

## CONTENIDO

### Iniciativas

- 2** Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas; del Código Civil Federal; de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Beatriz Rojas Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena
- 41** Que expide la Ley General de Operación de los Registros Civiles, suscrita por la diputada Érika Vanessa del Castillo Ibarra e integrantes de los Grupos Parlamentarios de Morena, PT y PVEM
- 99** Que adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social, suscrita por los diputados Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros y Moisés Ignacio Mier Velazco e integrantes del Grupo Parlamentario de Morena
- 147** Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Nelly Minerva Carrasco Godínez, del Grupo Parlamentario de Morena, e integrantes de la Comisión de Derechos Humanos

## Anexo III

**Jueves 7 de abril**

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS, EL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, Y LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA EN MATERIA DE GARANTÍA Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE ORFANDAD COMO CONSECUENCIA DEL FEMINICIDIO DE SUS MADRES.**

La suscrita, Beatriz Rojas Martínez, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta Soberanía la; **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS, EL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, Y LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA EN MATERIA DE GARANTÍA Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE ORFANDAD COMO CONSECUENCIA DEL FEMINICIDIO DE SUS MADRES** al tenor de lo siguiente:

### **Exposición de Motivos**

***El marco internacional para la erradicación de la discriminación, desigualdad de género y violencia contra las mujeres.***

Las distintas formas en que se manifiesta la discriminación y la violencia contra las mujeres han sido una constante desde el pasado y hasta la actualidad. “La discriminación contra las mujeres y las niñas, así como la

## **DIP. BEATRIZ ROJAS MARTÍNEZ**

desigualdad de género, tienen su expresión extrema en los actos cotidianos y sistemáticos de violencia que se cometen contra ellas”<sup>1</sup>.

Estos actos se ejercen de manera cotidiana y en todos los ámbitos de la vida. Tiene impactos negativos en la salud, libertad, seguridad y vida de las niñas y mujeres de todo el mundo, socavando el desarrollo de los países y dañando a la sociedad en conjunto, pues se limitan el pleno desarrollo de sus capacidades y minan su participación política, económica y social.

En el ámbito internacional, los movimientos feministas trajeron consigo grandes aportaciones para la atención de discriminación, desigualdad y violencia contra las mujeres. La constante movilización y presión que ejercen las mujeres feministas en busca del reconocimiento de sus derechos humanos ha permitido demandar a los Estados la atención de diversas problemáticas como la muerte materna, el aborto, la participación de las mujeres en los ámbitos político, económico, cultural, la mejora de sus condiciones sociales y la búsqueda por erradicar la violencia y discriminación que se ejercen en su contra. Esta preocupación constante por parte de la comunidad internacional se ha expresado en tratados internacionales sobre sus derechos humanos y también en nuestra legislación nacional.

En primer lugar, la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979) es un instrumento clave en la legislación internacional que busca eliminar todo tipo de discriminación contra las mujeres.

En su recomendación general número 19, señala que la violencia contra la mujer “es una forma de discriminación que inhibe gravemente la capacidad de la mujer de gozar de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre”<sup>2</sup>. Señala que la definición de discriminación contra la mujer contemplada en el artículo 1° de la Convención, incluye la violencia basada en el sexo, es decir, la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer y que la afecta en forma desproporcionada. Incluye actos que infligen daño o sufrimiento de índole física, mental o sexual, las amenazas de esos actos, la coacción y otras formas de privación de la libertad<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> ONUMUJERES- SEGOB-INMUJERES, *La violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-2016*. México, ONUMUJERES-SEGOB-INMUJERES, 2017, p. 10. Disponible en: [https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/293666/violenciaFeminicidaMx\\_07dic\\_web.pdf](https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/293666/violenciaFeminicidaMx_07dic_web.pdf)

<sup>2</sup> Oficina del ACNUR, *La violencia contra la mujer. CEDAW, Recomendación general 19*. Disponible en: [http://archive.ipu.org/splz-e/cuenca10/cedaw\\_19.pdf](http://archive.ipu.org/splz-e/cuenca10/cedaw_19.pdf)

<sup>3</sup> *Ídem*.

## **DIP. BEATRIZ ROJAS MARTÍNEZ**

La Recomendación 19, integra la violencia de género como parte de la discriminación de género, identificando las múltiples variedades que ésta asume y afectan especialmente a las mujeres al impedirles disfrutar cabalmente de sus derechos fundamentales. En esta recomendación, y con el objetivo de erradicar dicha violencia, se recomienda a los Estados la aplicación de programas educativos y de información que ayuden a suprimir prejuicios enraizados en la sociedad que obstaculizan el logro de la igualdad y respeto de la mujer.

En la CEDAW, considerada como la Carta Universal de los Derechos Humanos de las Mujeres, se aspira a la conformación de un nuevo orden internacional basado en la equidad y la justicia, que contribuya significativamente a la promoción de la igualdad entre las personas, independientemente de su sexo.

Otro de los instrumentos internacionales ratificado por la comunidad internacional en atención a las violencias y discriminación que aquejan a las mujeres, es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém Do Pará, 1994) que en su primer artículo define la violencia contra la mujer como “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”<sup>4</sup>. En el artículo 2, señala que los ámbitos donde se presenta la violencia contra las mujeres son: psicológico, físico y sexual; y puede manifestarse dentro de la familia o unidad doméstica o dentro de la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona, incluyendo el abuso sexual, la violación, la tortura, la trata de personas, la prostitución forzada, secuestro y acoso sexual.

Hoy, por primera vez, prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas es una prioridad mundial expresada en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, cuya implementación inició en 2016.

---

<sup>4</sup> OEA, *Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer*. “Convención Belém Do Pará. Disponible en: <https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html>

***El feminicidio: La máxima expresión de la discriminación, la desigualdad de género y la violencia contra las mujeres en México***

Existen diferentes tipos de violencia contra las mujeres como el acoso, violaciones, agresiones psicológicas o físicas, pero el feminicidio es la forma de violencia más extrema caracterizada por su brutalidad e impunidad. Todos los tipos de violencia contra las mujeres y las niñas son perpetrados, en general, para mantener la subordinación y el sometimiento de éstas en un sistema patriarcal que privilegia a los hombres en todos los ámbitos.

En el caso de los feminicidios, una constante que se presenta es la brutalidad con la que se cometen y la impunidad al momento de investigarlos y sancionar al feminicida. Las víctimas de feminicidio y secuestro son, generalmente, mujeres mayores de edad (18 años o más); aunque en los últimos años se ha visto un incremento de asesinatos de niñas y adolescentes. Por ejemplo, en 2019 se perpetraron 98 feminicidios en contra de menores de edad. Ese mismo año fueron asesinadas otras 191 niñas, pero fueron clasificados como homicidios dolosos<sup>5</sup>.

De acuerdo con Phumzile Mlambo-Ngcuka, Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, “el feminicidio, el asesinato de mujeres por el solo hecho de ser mujeres, arroja cifras cada vez más escalofriantes. Este tipo de violencia no conoce fronteras y afecta a mujeres y niñas de todas las edades, de todos los estratos económicos, de todas las razas y de todos los credos y culturas. Desde las zonas de conflicto hasta los espacios urbanos y los campus universitarios, se trata de una violencia que nos obliga a todas y a todos a actuar como agentes preventivos de esta pandemia y a tomar medidas ahora”<sup>6</sup>.

Por otro lado, en *el Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género* los términos femicidio/ feminicidio se entienden como: “la muerte violenta de mujeres por razones de género ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, en la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u omisión”<sup>7</sup>.

---

<sup>5</sup> Sergio Rincón, “Feminicidio de niñas, en aumento; en el último año, 98 casos”, en *La Razón*, disponible en: <https://www.razon.com.mx/mexico/feminicidio-de-ninas-en-aumento-en-el-ultimo-ano-98-casos/>

<sup>6</sup> ONUMJERES-SEGOB-INMUJERES, *La violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-2016*, op.cit., p. 9.

<sup>7</sup> ONUMJERES, ACNUR, ÚNETE. *Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio)*. ONUMJERES-ACNUR-ÚNETE, sin fecha, p. 14. Disponible en <https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/ProtocoloLatinoamericanoDeInvestigacion.pdf>

## **DIP. BEATRIZ ROJAS MARTÍNEZ**

En la legislación nacional, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el artículo 21 define la violencia feminicida como “[...] la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres”<sup>8</sup>.

En México prácticamente todas las mujeres viven en constante riesgo de sufrir algún tipo de violencia por razones de género. La violencia que los hombres ejercen contra las mujeres es un delito, una violación a sus derechos humanos, y una expresión de la constante desigualdad y discriminación que sufren y se mantiene fuertemente arraigada en la sociedad mexicana.

Ninguno de los estados de la república escapa a esta preocupante realidad debido, en gran parte, a la cultura machista socialmente aceptada. En dicha cultura machista la violencia contra las mujeres se observa como “normal” o “permitida” y puede derivar en impunidad al no perseguir los delitos cometidos por los hombres contra las mujeres.

Sólo para recordar un dato estadístico: siete de cada diez mujeres han vivido un acto de violencia en nuestro país. En la etapa del noviazgo es más alta, ocho de cada diez mujeres. Tenemos el dato de que, de esas siete, cuatro han sido actos cometidos por gente cercana a la víctima, es decir, su esposo, su pareja, su concubino. Esto nos permite asegurar que ¡el hogar se ha convertido en el lugar más peligroso para las mujeres!<sup>9</sup>

Atender este problema enfrenta grandes retos legislativos, políticos, sociales y culturales. En primer lugar, no existen estadísticas confiables que cuantifiquen los delitos cometidos contra las mujeres, impidiendo conocer la magnitud de las diferentes violencias que se cometen contra ellas.

A nivel institucional, las estadísticas sobre delitos del fuero común y del fuero federal son registradas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El indicador que se utiliza para estimar el número de

---

<sup>8</sup> Cámara de Diputadas y Diputados, *Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia*, disponible en: [https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/209278/Ley\\_General\\_de\\_Acceso\\_de\\_las\\_Mujeres\\_a\\_una\\_Vida\\_Libre\\_de\\_Violencia.pdf](https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/209278/Ley_General_de_Acceso_de_las_Mujeres_a_una_Vida_Libre_de_Violencia.pdf)

<sup>9</sup> Gricelda Torres Zambrano, “Huérfanos del feminicidio, los niños invisibles”, en *Informe sobre la situación de los derechos humanos en Jalisco, 2017*, Jalisco, 2017, disponible en: <https://cepad.org.mx/wp-content/uploads/2020/03/2017-5-Huerfanos-del-feminicidio.pdf>

## **DIP. BEATRIZ ROJAS MARTÍNEZ**

feminicidios es el número de defunciones femeninas con presunción de homicidio (DFPH). No obstante, debe reconocerse que estos “datos oficiales” están limitados porque la contabilidad del delito de feminicidio la realiza conforme a su tipificación en las entidades federativas.

En el *Mapa de Incidencia Delictiva Nacional*, con información con corte a octubre de 2020, se registraron 1,361, 735 presuntos delitos en todo el país. Las entidades federativas con el mayor número de delitos son el Estado de México con 251, 208 delitos registrados y la Ciudad de México, con 145, 031 delitos<sup>10</sup>. Del total de presuntos delitos de este periodo, 0.05% corresponde al delito de feminicidios (704 contabilizados).

La tendencia nacional en este sentido es preocupante, pues va en constante aumento, pasando de 411 feminicidios en 2015 a 945 en 2019. Para septiembre de 2020 ya se contabiliza más de la mitad de los feminicidios perpetrados el año anterior.

De los 704 feminicidios registrados hasta 20 de septiembre del 2020, en la Ciudad de México se cometieron 55 feminicidios (7.6% del total), colocándose como la tercera entidad federativa con mayor número de estos delitos durante este año. De esta manera, en la CDMX se contabilizan 0.43 delitos de feminicidio por cada 100 mil mujeres<sup>11</sup>.

Para el mismo periodo, a nivel nacional se contabilizaron 178,031 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer, de las cuales 26,155 se realizaron en la Ciudad de México (555 llamadas por cada 100mil mujeres). También se han registrado 2,484 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violación; el mayor número de <sup>12</sup>este tipo de llamadas se generó en la Ciudad de México (325).

México es un país donde la discriminación contras las mujeres y la desigualdad de género están fuertemente arraigados en la sociedad y la cultura mexicana. Lamentablemente, día a día las mujeres sufren la expresión extrema de la discriminación y la desigualdad en forma de distintos actos sistemáticos de violencia.

En el país y específicamente en la Ciudad de México, en los últimos años las niñas, mujeres jóvenes, adultas y de edades avanzadas viven en riesgo

---

<sup>10</sup> Secretariado del Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, “Mapa Incidencia Delictiva Nacional. Enero-agosto 2020”, disponible en: <https://drive.google.com/file/d/1KJEGs1UPHS8DbjdlreSOQiQ4tPU13BuI/view>

<sup>11</sup> *Idem.*

<sup>12</sup> Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, “Información sobre violencia contra las mujeres”, México, septiembre de 2020, disponible en: <https://drive.google.com/file/d/1IAN68eTY8ZoXuoJ0-W4uTpyZwbiS913H/view>

## **DIP. BEATRIZ ROJAS MARTÍNEZ**

constante de sufrir algún tipo de violencia. No obstante, el mayor número de feminicidios se siguen cometiendo en el Estado de México, donde 11<sup>13</sup> de los 125 municipios se encuentran en alerta roja por la violencia de género. Tan solo en 2020 se han perpetrado 106 feminicidios en este Estado, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo a septiembre de 2020.

Como ya se mencionó, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2020 se han registrado hasta la fecha un total de 704 feminicidios en todo el país. Los meses de junio y febrero fueron aquellos donde se registró un mayor número con 94 y 92 feminicidios respectivamente. De acuerdo con esta institución, los diez estados de la República Mexicana con el mayor número de feminicidios durante este año fueron: 1) Estado de México con 97; 2) Veracruz con 61; 3) Ciudad de México con 48; 4) Nuevo León con 42; 5) Puebla con 39; 6) Jalisco con 35; 7) Morelos con 27; 8) Baja California con 25; 9) Oaxaca con 24 y Chihuahua con 23<sup>14</sup>. Estos números parecen reducidos por dos cuestiones:

- 1) Falta de denuncia ante las autoridades: Las autoridades de la Ciudad de México, por ejemplo, han señalado que no se han recibido reportes o denuncias de estos sucesos, reportados en distintas redes sociales (Facebook y Twitter). Esto más allá de generar ilegitimidad a los hechos pone en la mesa de discusión la poca confianza que la ciudadanía tiene en sus instituciones de seguridad, prefiriendo no denunciar y generar otras formas de protección comunitaria vía redes sociales.
- 2) Problemas para definir y aceptar el concepto de feminicidio, definido por ONU Mujeres (2017) como las defunciones femeninas con presunción de homicidio.

Otros reportes sobre la situación en México alertan del enorme problema que se tiene. De acuerdo con ONU Mujeres (2017). De 2011 a 2016 ocurrieron 15, 535 homicidios. A partir de 2007, cuando se registraron 1, 089 homicidios en el país, la cifra ha ido aumentando constantemente y de forma alarmante. 2011 (2,749 feminicidios), 2012 (2, 769) y 2016 (2, 746) fueron los años con mayor registro de este delito, de acuerdo con las cifras de la institución<sup>15</sup>.

---

<sup>13</sup> Estos municipios son Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco.

<sup>14</sup> Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, “Información sobre violencia contra las mujeres”, *idem*.

<sup>15</sup> ONUMUJERES-SEGOB-INMUJERES, *La violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-2016, op.cit*



## **DIP. BEATRIZ ROJAS MARTÍNEZ**

Por otro lado, de acuerdo con el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, la información oficial para 2018 para 15 países de la región, señala que al menos 3, 287 mujeres han sido víctimas de feminicidio. En el caso de México, en ese año el Observatorio contabilizó 898 casos de feminicidio; es decir, 1.4 mujeres por cada 100,000<sup>16</sup>.

Los feminicidios son una expresión extrema de la violencia cometida contra las mujeres solamente por el hecho de serlo; se caracterizan por su enorme brutalidad, pues en muchos casos las niñas, jóvenes y adultas fueron asesinadas con mayor crueldad y con métodos más agresivos a su alcance como el desmembramiento, el ahorcamiento, acuchillamiento, incineración; finalmente, se caracterizan también por la constante impunidad de las autoridades para castigarlos.

En 2016 dio inicio la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, donde se contempla por primera vez la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres (Objetivo 5).

México se ha sumado a esta iniciativa y, ante los números tan alarmantes de este fenómeno, debería colocarla como una prioridad en la generación de estrategias de seguridad que garanticen la integridad y tranquilidad de las mujeres en las distintas zonas del país; específicamente en aquellos lugares donde se ha focalizado la violencia contra ellas y se ha evidenciado una sistemática violación a sus derechos humanos.

Es un tema de suma relevancia para el país, pues México no puede permitir ni tolerar que el número de muertes, secuestros y desapariciones por violencia de género sigan aumentando. Deben generarse políticas de Emergencia Nacional enfocadas en terminar con este problema y reducirlo hasta terminar con él.

La violencia contra las mujeres y las niñas es inaceptable, se puede prevenir y ponerle fin es un imperativo de la sociedad en su conjunto. Con esta propuesta de reforma, reafirmo mi compromiso como Diputada Federal de la Legislatura de la Paridad de Género para hacer realidad el acceso de todas las mujeres y las niñas a una vida libre de discriminación y violencia y lograr la igualdad de género en todas las dimensiones del desarrollo.

Será necesaria la aplicación de una política integral, que vaya más allá del aspecto de la seguridad, pues estos actos de violencia son resultado de una arraigada cultura machista y de discriminación contra las mujeres. En este

---

<sup>16</sup> Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, *México- Perfil de País*, 2018. Disponible en: <https://oig.cepal.org/es/paises/16/profile>

**DIP. BEATRIZ ROJAS MARTÍNEZ**

entendido, una política integral debe contemplar también a las hijas e hijos víctimas indirectas del feminicidio de sus madres.

En este sentido, tanto desde la legislación nacional como internacional, se han incorporado medidas específicas que permiten dar cuenta de las distintas formas de violencia de las que las mujeres son objeto, así como las sanciones previstas para quienes agreden.

***La invisibilidad ante el Estado de las niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por el feminicidio de sus madres***

Cuando un femicidio ocurre, los hijos e hijas de las víctimas de este delito quedan expuestos a mayores niveles de desprotección y abandono que ponen en riesgo no solo su salud mental, sino también la vida en su conjunto. En algunos casos, los familiares se hacen cargo de los niños/as o adolescentes, en otros, al no contar con redes de apoyo, deben ingresar a centros donde son institucionalizados, o inclusive hay ocasiones en las que el propio femicida es quien asume su cuidado.

La enorme impunidad que impera en nuestro sistema de justicia ha provocado que muchos de los agresores, violadores y feminicidas no enfrenten un proceso judicial eficiente que derive en sanciones para éstos. Muchos de los feminicidas quedan libres o nunca son encontrados, provocando que en las familias de las víctimas se viva angustia o terror, sobre todo cuando hay niñas o niños.

Es necesario definir y nombrar dentro de la ley a las niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio de sus madres. En este sentido, podríamos definirlos jurídicamente como aquellas y aquellos que han perdido a su progenitora fruto de la violencia feminicida.

Hasta la fecha, es alarmante que no se cuente con un registro a nivel nacional o estatal sobre cuántos y cuáles son las condiciones de las niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por el feminicidio de sus madres. Como es lógico, no sabemos su cantidad, ni su identidad; mucho menos sus edades, grado escolar, quiénes quedaron a cargo de ellos o si han recibido algún tipo de atención médica o psicológica.

Para el gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales, atender a este sector de la infancia debería ser una prioridad. No podemos seguirlos ignorando, la realidad de nuestro país, permeada por esta violencia

**DIP. BEATRIZ ROJAS MARTÍNEZ**

feminicida brutal y sistemática, ha dejado a muchas niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad después del asesinato de sus madres.

Los gobiernos deben no sólo contarlos e identificarlos, sino también ofrecerles protección y brindarles otro tipo de ayuda, médica y psicológica principalmente, pues muchos de estos niños han atestiguado el asesinato de sus madres y ello implica afectación emocional graves.

Las familias afectadas por un feminicidio requieren un tratamiento integral, sobre todo psicológico. Además, de esta situación, incluso cuando son testigos del asesinato de sus madres, las autoridades en los procesos de investigación y atención simplemente no identifican dicha situación ni preguntan si hay más personas afectadas, como lo establece la Ley General de Víctimas.

Martha Catalina Pérez González, directora del Centro de Evaluación Psicológica de la Universidad de Guadalajara, alerta que los huérfanos del feminicidio corren el riesgo de ser revictimizados, porque podrían ser objeto de discriminación, en especial cuando las familias con las que quedan no se encuentran preparadas para tener de nueva cuenta a un menor como parte de sus integrantes<sup>17</sup>.

Por ejemplo, existen casos donde las niñas y los niños huérfanos de feminicidio en relaciones de pareja quedan en custodia de las abuelas o la familia de la víctima, sin ningún apoyo del Estado, lo que genera precariedad para todas las personas integrantes de dicha familia<sup>18</sup>.

En ese sentido, el apoyo psicológico para los huérfanos por feminicidio debe ser una prioridad. Ayuda que les permita cerrar ciclos, vivir duelos y superar el trauma del asesinato de su madre. Estas niñas, niños y adolescentes enfrentan el enorme problema de quedarse sin padres, sin tratamiento psicológico y sin dinero, invisibles ante el Estado.

No son reconocidos como víctimas y tampoco son atendidos por el Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes ni por el Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes<sup>19</sup>.

---

<sup>17</sup> Gricelda Torres Zambrano, “Huérfanos del feminicidio, los niños invisibles”, *op.cit.*

<sup>18</sup> Andrea Medina Rosas. “Las niñas y los niños huérfanos víctimas del feminicidio y otras muertes violentas contra mujeres”, en *Dfensor Revista de Derechos Humanos*, México, 2017, p.13. Disponible en: <http://189.240.117.226/biblos-imdf/node/14993>

<sup>19</sup> Gricelda Torres Zambrano, “Huérfanos del feminicidio, los niños invisibles”, *op.cit.*

## **DIP. BEATRIZ ROJAS MARTÍNEZ**

En este sentido, podemos argumentar que la impunidad que rodea la violencia feminicida en nuestro país, se caracteriza por el sistemático incumplimiento de las obligaciones del Estado, que se presenta desde la ausencia de un registro cabal de los casos de violencia contra las mujeres (que como ya se explicó deriva de las diferentes definiciones realizadas en cada entidad federativa y la ausencia de un código penal único) y pasa por la ausencia del registro, atención y reparación del daño a las niñas y los niños afectados por dichos feminicidios y por la violencia feminicida en general<sup>20</sup>.

Las niñas, niños y adolescentes huérfanos por feminicidio ven afectados otros de sus derechos humanos como la educación y la salud pues quedan excluidos de políticas de vida diaria se ve severamente afectada para poder continuar con el acceso a los derechos y libertades para su pleno desarrollo.

Coincidimos con Andrea Medina Rosas, cuando señala que es indispensable que las autoridades garanticen que las condiciones para la custodia de esas niñas y niños sea asumida de manera social y colectiva, es decir, que los recursos para su sustento, las personas que están en su entorno y las percepciones y actitudes en su contexto social estén fundamentadas en los derechos humanos y en la resolución de los conflictos de manera no violenta<sup>21</sup>, lo que implica:

- Iniciar el registro de las niñas, los niños y las y los adolescentes familiares de mujeres víctimas de desapariciones, de feminicidios y de otras muertes violentas, para identificar la magnitud del problema y la situación real en la que se encuentran.
- Garantizar que las niñas, los niños y las y los adolescentes no estén en custodia del agresor ni de su familia, sin que ello implique incumplir sus obligaciones de pagos de alimentos como lo establece la ley.
- Establecer programas de apoyos directos y constantes para que accedan gratuitamente a mecanismos de rehabilitación ante los daños sufridos. Sus contenidos deberán cumplir con los criterios de la perspectiva de género y estar especializados al tipo de delito y conducta violenta a la que refiere el daño, y al enfoque diferencial, por ejemplo, la edad de las víctimas.

---

<sup>20</sup> Andrea Medina Rosas. “Las niñas y los niños huérfanos víctimas del feminicidio y otras muertes violentas...”, *op.cit.*

<sup>21</sup> *Ídem.*

## **DIP. BEATRIZ ROJAS MARTÍNEZ**

- Operar programas de apoyo directo a quienes asuman la custodia y cuidado de estos niños y niñas, de manera que se faciliten las condiciones para que puedan acceder a todos sus derechos y su entorno también permita una rehabilitación ante el daño sufrido. Será prioridad garantizar el acceso a la educación, a la salud integral, a la vivienda y a entornos seguros.
- Desarrollar espacios sociales y comunitarios para hablar de esta problemática, con el fin de que no se genere estigma ni se normalice la violencia<sup>22</sup>.

### ***Marco conceptual y de protección de la violencia contra niños, niñas y adolescentes***

La Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño se constituye en el primer texto que incluye el reconocimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y la responsabilidad de los adultos para hacerlos cumplir. El documento se redactó a raíz de las secuelas que la Primera Guerra Mundial dejó, y a pesar de que no era vinculante para los Estados, se constituyó en una aproximación que permitió evidenciar la necesidad de establecer acciones más concretas a favor de la niñez y adolescencia, en un mundo adulto-céntrico y patriarcal.

“La declaración es el primer documento de carácter internacional que hace visibles a los niños ante la comunidad internacional como objetos de protección [...] establece los derechos básicos para su desarrollo como son la alimentación, la seguridad social y la educación.” Este primer documento se constituyó en el punto de partida para incluir a los niños, niñas y adolescentes como objetos de protección de los Estados.

La Convención de los Derechos del Niño fue aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la resolución 44/25 del 20 de noviembre de 1989, entrando en vigor el 22 de septiembre de 1990, quedando abierta para la firma y ratificación de otras naciones.<sup>11</sup> Es un Tratado Internacional que reconoce como menores a toda persona menor de 18 años, de acuerdo a la legislación de cada Estado miembro de la ONU, reconociendo a los niños y niñas como sujetos del derecho, este documento agrupa la mayor parte de los derechos a favor de la infancia.

---

<sup>22</sup> *Ídem.*

## **DIP. BEATRIZ ROJAS MARTÍNEZ**

De forma integral la Convención replantea la visión de los derechos humanos, estableciendo normas universales sobre la protección de las niñas y los niños contra el abandono, los malos tratos y la explotación, consagra el respeto de sus derechos de supervivencia, desarrollo y plena participación en las actividades sociales, culturales y democráticas necesarias para su crecimiento y bienestar individual.

La Convención de los Derechos del Niño como reconocimiento de la dignidad humana fundamental en la infancia, describe la necesidad de establecer parámetros de no discriminación basados en el principio denominado “interés superior del niño”. En el artículo 2.1, de esta Convención, se señala que:

Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales<sup>23</sup>.

A esto, se suma el compromiso que los Estados Parte asumen al momento de “asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley”.

Para verificar su cumplimiento la ONU crea a la par que la Convención de los Derechos del niño, el Comité de los Derechos del Niño, este Comité revisa los informes de los Estados miembros y sus principios rectores son:

- **La no discriminación de los niños y las niñas**, el niño o la niña no debe ser diferenciado por razón de su raza, creencia religiosa, color género, idioma, su situación de nacimiento o por impedimento físico.
- **El interés superior del niño**, todas las instituciones públicas o privadas, así como sus padres o cualquier entidad que tenga en sus manos la capacidad de tomar una decisión en torno a los niños, deben considerar siempre el bienestar el niño anteponiéndolo a cualquier otra situación.
- **Las opiniones de los niños y niñas**, en este aspecto se considera que los niños pueden expresar sus ideas y opiniones sobre los temas que les competen mismas que deben ser escuchadas y tomadas en cuenta para la toma de decisiones.

---

23

**DIP. BEATRIZ ROJAS MARTÍNEZ**

- **La supervisión y desarrollo**, el Estado y las personas encargadas del pequeño o pequeña deben de tomar todas las medidas necesarias para que se desarrollen de manera plena preservando la vida misma que debe ser con calidad y en armonía.

Una vez que un Estado ha ratificado la Convención, el Comité de los Derechos de la Infancia recibe dentro de los primeros dos años un informe sobre el grado de cumplimiento que guarda de la Convención, posteriormente los miembros están obligados a enviar sus informes cada cinco años, estos informes son revisados por el Comité junto con el representante del Estado miembro, después de los cuales expresa sus comentarios y preocupaciones, mismas que dan paso a observaciones finales que son publicadas y que el miembro se compromete a subsanar.

En el caso de México se cuenta, desde 2014, con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que podríamos dividir en 3 grandes rubros:

1. El reconocimiento de las niñas, niños y adolescentes como titulares de un amplio marco de derechos. Entre ellos destacan: el derecho a la igualdad sustantiva, el derecho a la salud gratuita y de calidad, el derecho a la educación de calidad, el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, y el derecho a la participación.
2. Para complementar y vigilar el cumplimiento de dichos derechos, es necesario fortalecer las instituciones del Estado mexicano para que estén en aptitud y en capacidad de hacer realidad estos derechos. Para ello, contempla el Sistema de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Además, se crean a nivel federal y estatal, Procuradurías de Protección que coordinan el trabajo conjunto de las autoridades para asegurar el respeto y cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Se regulan los Centros de Asistencia Social, con el objetivo de garantizar las mejores condiciones de integridad, seguridad y bienestar para quienes ahí se atienden.
3. Está prevista la colaboración y coordinación entre órdenes de Gobierno y organismos autónomos. Se obliga a los tres órdenes de

**DIP. BEATRIZ ROJAS MARTÍNEZ**

Gobierno a que incorporen en sus proyectos de presupuesto la asignación de recursos para dar cumplimiento a esta legislación<sup>24</sup>.

No obstante, dentro de la legislación no están contemplados los derechos de niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad por el feminicidio de sus madres. Es importante reconocer dentro de ella que tienen y viven condiciones distintas al ser víctimas indirectas de la violencia ejercida contra sus madres. Esta es una de las consecuencias más lamentables y dolorosas.

***Sobre la propuesta de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Orfandad como Consecuencia del Feminicidio de sus Madres***

La lógica de generar un Protocolo de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Orfandad como Consecuencia del Feminicidio de sus Madres, deriva de que su situación no debe traducirse en una orfandad de Estado ni de comunidad. Por ello es indispensable reforzar la atención institucional y la acción social para brindarles una reparación integral de los daños.

Se debe generar un protocolo integral, universal y multidimensional que parta de la identificación de las niñas, niños y adolescentes en dicha situación. Posteriormente, el protocolo deberá centrarse en esferas importantes sus vidas, pasando por salud integral, educación, formación humana y conciencia ciudadana, seguridad alimentaria, habitabilidad y protección de un medio ambiente digno, entre otros.

La propuesta de este protocolo surge de a necesidad de contar con un instrumento eficaz que contribuya a la solución de un problema que afecta directamente a aquellos niños, niñas y adolescentes que quedan en abandono fruto de la violencia feminicida.

Para atender y solucionar este problema, es necesaria la articulación y esfuerzo de múltiples actores que coordinen sus acciones para plantear estrategias que permitan intervenir a este sector infantil que han sido

---

<sup>24</sup> Gobierno de México, “Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes: ¿ya la conoces?. Disponible en: <https://www.gob.mx/sipinna/articulos/ley-general-de-los-derechos-de-ninas-ninos-y-adolescentes-ya-la-conoces-107204?idiom=es>



## **DIP. BEATRIZ ROJAS MARTÍNEZ**

víctima de violencia y permitirles desarrollarse en un ambiente favorable para alcanzar todas sus potencialidades de desarrollo humano.

El protocolo que planteamos tiene por objetivo garantizar los siguientes principios básicos, mismos que se encuentran contenidos en el artículo 6 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes:

- **Interés superior de la niña, el niño y los adolescentes:** Como se contempla en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de nuestro país (específicamente en el artículo 6°, fracción I).
- **Universalidad, indivisibilidad, interdependencia, progresividad, integralidad y no discriminación:** Será un protocolo encaminado a garantizar los derechos de TODAS y TODOS las y los niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por el feminicidio de sus madres, sin importar su raza, color, sexo, edad, idioma, ideología, religión, cultura, posición económica, origen étnico, entre otros (Artículo 6°, fracciones II y IV respectivamente).
- **Igualdad sustantiva:** que permita el desarrollo igualitario para niñas y niños (fracción III).
- **Desarrollo pleno:** Que, en términos del concepto de desarrollo humano, las niñas, niños y adolescentes tengan la capacidad de desarrollar todas sus habilidades y capacidades al máximo; que gocen de las mismas oportunidades.
- **Derecho a la intimidad:** Que se garantice a las niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por el feminicidio de sus madres, el gozar del derecho a una vida privada e íntima que les permita lidiar con su pérdida (primero) y reintegrarse en la sociedad para alcanzar su pleno desarrollo.
- **No revictimización y acceso a una vida libre de violencia :** Vigilar que la persona menor de edad no vuelva a ser víctima, evitando que sea sometida a múltiples interrogatorios y declaraciones que le generen maltrato físico o psicológico.

De esta manera, el protocolo también tiene el objetivo primordial de organizar la intervención de distintas instancias gubernamentales encargadas de atender los casos de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por el feminicidio de sus madres, estableciendo mecanismos de referencia para abordar de forma apropiada y coordinada la protección de estos.

**DIP. BEATRIZ ROJAS MARTÍNEZ**

Por ello, proponemos que dicho protocolo sea nombrado como Protocolo de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de Orfandad por Femicidio.

Para que tal mecanismo funcione, consideramos que deben articularse acciones de las siguientes instituciones: El Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes; Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF); Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

Por tal motivo, será necesario modificar las siguientes leyes: Ley General de Víctimas; Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; y la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Para el caso específico de hijos e hijas de víctimas de femicidio, se propone llevar adelante un proceso de reparación integral, que incluya:

- 1) Restitución.** Este punto contempla la posibilidad de devolver a la víctima aquello que la violencia arrebató, sin embargo, es preciso señalar que, en casos de muertes violentas, esta restitución debe ir por una vía diferente. Precisamente, para niños, niñas y adolescentes resulta imprescindible que se piense en la restitución desde la garantía del ejercicio de los derechos de la niñez y adolescencia, fundamentado en la posibilidad de permitir su participación activa, junto con la de sus familiares, escuchar su opinión y contribuir para que la restitución se convierta en un ejercicio de reconstrucción de la vida y sanación para la integración en el nuevo núcleo familiar.
- 2) Indemnización.** Entendida como una forma de que la persona que cometió el delito asuma su responsabilidad con un monto específico de compensación monetaria por lo ocurrido. No obstante, no se puede cuantificar el costo de una vida perdida y tampoco se debe desligar al Estado de su responsabilidad. La propuesta entonces se encamina a que el Estado garantice la generación de ingresos económicos, sea a través de bonos, emprendimientos u otros mecanismos que permitan a los familiares que quedan al cuidado de los hijos/as, asegurar el ejercicio de los derechos de los niños/as y adolescentes. Es menester precisar que la indemnización no debe considerarse como única forma de reparación.
- 3) Rehabilitación.** En este punto, es fundamental trabajar de manera articulada entre el Estado y la sociedad civil en la atención integral, a

**DIP. BEATRIZ ROJAS MARTÍNEZ**

través de espacios de acogida que brinden acompañamientos continuos a los niños, niñas y adolescentes. Esto se encaminaría a la protección especial, así como a la protección específica, que incluya aspectos relacionados de manera exclusiva con las afectaciones psicosociales de niños, niñas y adolescentes que quedaron en la orfandad producto de la muerte violenta de su madre.

- 4) Garantías de no repetición.** Al ser de correspondencia del Estado el evitar que se vuelvan a repetir los episodios de violencia, lo fundamental es que sea el propio Estado el que asegure la protección de los niños, niñas y adolescentes desde el primer momento que se notifica el delito, en acompañamiento y seguimiento de los familiares de los hijos e hijas de víctimas de feminicidio.

Estas dimensiones de la reparación integral que se conjugan con la atención, protección y restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo luego de la muerte violenta de su madre, ponen de manifiesto la importancia de generar lineamientos básicos que contribuyan a la generación de políticas públicas integrales e inclusivas. La propuesta de protocolo se orienta a dejar esbozadas las condiciones mínimas que se deben tener en cuenta al momento de acompañar a un grupo familiar que queda a cargo del cuidado de hijos e hijas de víctimas de feminicidio.

Tan sólo entre diciembre de 2018 y junio de 2019, el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) contabilizó 4, 245 niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad por el asesinato de sus madres.

Estas niñas, niños y adolescentes se encuentran en estado de indefensión. Por ello, con esta presente iniciativa se pretende brindar protección, a través de mecanismos específicos donde se les reconozca y se les apoye en todos los ámbitos necesarios.

La intención de esta iniciativa, se suma a muchas otras que buscan que, en el los tres órdenes de gobierno se proteja el interés superior de la infancia de este sector, para que puedan seguir con sus vidas en condiciones óptimas.

El siguiente cuadro expone el comparativo de las modificaciones que se plantean:

<b>LEY GENERAL DE VÍCTIMAS</b>	
<b>TEXTO VIGENTE</b>	<b>PROPUESTA DE MODIFICACIÓN</b>
<p><b>Artículo 4.</b> Se denominarán víctimas directas aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte.</p> <p>Son víctimas indirectas los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella.</p> <p>Son víctimas potenciales las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima ya sea por impedir o detener la</p>	<p><b>Artículo 4. ...</b></p> <p>...</p> <p>...</p>

<p>violación de derechos o la comisión de un delito.</p>	
<p>La calidad de víctimas se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de los derechos en los términos establecidos en la presente Ley, con independencia de que se identifique, aprehenda, o condene al responsable del daño o de que la víctima participe en algún procedimiento judicial o administrativo.</p>	<p>...</p>
<p>Son víctimas los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como resultado de la comisión de un delito o la violación de derechos.</p>	<p>...</p>
<p><b>SIN CORRELATIVO</b></p>	<p><b>Las niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad como consecuencia del feminicidio de sus madres, son víctimas indirectas del delito.</b></p>

<p><b>CAPÍTULO II DE LOS DERECHOS DE AYUDA, ASISTENCIA Y ATENCIÓN</b></p> <p>Artículo 8. ...</p> <p><b>SIN CORRELATIVO</b></p>	<p><b>CAPÍTULO II DE LOS DERECHOS DE AYUDA, ASISTENCIA Y ATENCIÓN</b></p> <p>Artículo 8. ...</p> <p>Los tres órdenes de gobierno, en sus respectivas competencias, estarán obligados a asignar recursos presupuestales necesarios para garantizar una pronta y eficaz asistencia de las niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad por el feminicidio de sus madres.</p> <p>Será primordial la atención médica, alimentaria, educativa y psicológica de los menores de edad.</p> <p>En los casos en que las niñas, niños y adolescentes sean encuentren en situación de orfandad por feminicidio, se aplicarán las disposiciones oficiales. Los protocolos de atención deberán considerar su</p>
--	--

	<p><b>edad, desarrollo cognoscitivo y madurez para la implementación de las acciones de asistencia y protección respectivas, así como la reparación integral del daño, resguardando en todo momento el interés superior de niñas, niños y adolescentes.</b></p>
<p><b>TÍTULO CUARTO MEDIDAS DE ASISTENCIA Y ATENCIÓN CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES</b></p> <p><b>Artículo 44.</b> La Comisión Ejecutiva como responsable de la creación y gestión del Registro Nacional de Víctimas a que hace referencia el Título Séptimo de esta Ley garantizará que el acceso de las víctimas al Registro se haga de manera efectiva, rápida y diferencial con el fin de permitirles disfrutar de las medidas de asistencia y atención establecidos en la presente Ley.</p>	<p><b>TÍTULO CUARTO MEDIDAS DE ASISTENCIA Y ATENCIÓN CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES</b></p> <p><b>Artículo 44.</b> La Comisión Ejecutiva como responsable de la creación y gestión del Registro Nacional de Víctimas a que hace referencia el Título Séptimo de esta Ley, <b>elaborará también y dentro del mismo, un registro particular de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por el feminicidio de sus madres y</b> garantizará que el acceso de las víctimas al Registro se haga de manera efectiva, rápida y diferencial con el fin de permitirles disfrutar de</p>

<p>El sistema nacional de seguridad pública recabará y concentrará información estadística sobre víctimas asistidas por las comisiones ejecutivas de las entidades federativas, por modalidades de asistencia, ayuda o reparación y por tipo de delito o violación de derechos que la motivare. La información tendrá carácter público y en ningún caso incluirá datos personales</p>	<p>las medidas de asistencia y atención establecidos en la presente Ley.</p>
<p><b>CÓDIGO CIVIL FEDERAL</b></p>	
<p><b>TEXTO VIGENTE</b></p>	<p><b>PROPUESTA DE MODIFICACIÓN</b></p>
<p><b>Artículo 414.-</b> La patria potestad sobre los hijos se ejerce por los padres. Cuando por cualquier circunstancia deje de ejercerla alguno de ellos, corresponderá su ejercicio al otro.</p> <p>A falta de ambos padres o por cualquier otra circunstancia prevista en este ordenamiento, ejercerán la patria potestad sobre</p>	<p><b>Artículo 414.-...</b></p> <p>....</p>



<p>los menores, los ascendientes en segundo grado en el orden que determine el juez de lo familiar, tomando en cuenta las circunstancias del caso.</p> <p><b>SIN CORRELATIVO</b></p>	<p><b>Se extingue o pierde la patria potestad por haber sido condenado por delito de feminicidio. Los familiares del feminicida tampoco podrán ejercer la patria potestad sobre los menores.</b></p>
<p><b>LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES</b></p>	
<p><b>Artículo 13.</b> Artículo 13. Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, niños y adolescentes, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes:</p> <p><b>I. a XX ...</b></p> <p><b>SIN CORRELATIVO</b></p>	<p><b>Artículo 13.</b> Artículo 13. Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, niños y adolescentes, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes:</p> <p><b>I. a XX ...</b></p> <p><b>XXI.- Derechos de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por el feminicidio de sus madres</b></p>

<p><b>Artículo 40.</b> Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a adoptar medidas y a realizar las acciones afirmativas necesarias para garantizar a niñas, niños y adolescentes la igualdad sustantiva, de oportunidades y el derecho a la no discriminación.</p> <p>...</p> <p>Serán factor de análisis prioritario las diferencias de género como causa de vulnerabilidad y discriminación en contra de las niñas y las adolescentes;</p>	<p><b>Artículo 40.</b> Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a adoptar medidas y a realizar las acciones afirmativas necesarias para garantizar a niñas, niños y adolescentes la igualdad sustantiva, de oportunidades y el derecho a la no discriminación.</p> <p>...</p> <p>Serán factor de análisis prioritario las diferencias de género como causa de vulnerabilidad y discriminación en contra de las niñas y las adolescentes; <b>haciendo énfasis en las niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por el feminicidio de sus madres, quienes recibirán atención privilegiada en los derechos de acceso a la salud, atención psicológica, educación y</b></p>
---	---

	<p><b>programas y beneficios que les permitan desarrollarse de manera plena.</b></p>
<p><b>Artículo 47.</b> Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por:</p> <p><b>I. a la VIII. ...</b></p> <p><b>SIN CORRELATIVO</b></p> <p>....</p> <p>....</p> <p>Las autoridades competentes, están obligadas a implementar medidas especiales para prevenir, sancionar y reparar las conductas previstas en</p>	<p><b>Artículo 47.</b> Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por:</p> <p>I. a la VIII. ...</p> <p><b>IX. La orfandad por el feminicidio de sus madres</b></p> <p>...</p> <p>...</p> <p>Las autoridades competentes, están obligadas a implementar medidas especiales para prevenir, sancionar y reparar las conductas previstas en</p>

<p>este artículo para niñas, niños y adolescentes con discapacidad.</p>	<p>este artículo para niñas, niños y adolescentes con discapacidad.</p> <p><b>Las autoridades competentes, atenderán el principio del interés superior de la niñez para garantizar las prerrogativas inherentes a las niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por el feminicidio de sus madres, privilegiando el derecho a la educación, a la salud, a la atención psicológica y el acceso a programas y beneficios.</b></p>
<p><b>Artículo 116.</b> Corresponden a las autoridades federales y locales de manera concurrente, las atribuciones siguientes:</p> <p><b>I.</b> a la <b>XII.</b></p> <p><b>XIII.</b> Adoptar las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes, víctimas de cualquier forma de violencia;</p>	<p><b>Artículo 116.</b> Corresponden a las autoridades federales y locales de manera concurrente, las atribuciones siguientes:</p> <p>I. a la XII. ...</p> <p>XIII. Adoptar las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes, víctimas de cualquier forma de violencia;</p>

<p><b>XIV.</b> a la <b>XXV.</b> ...</p>	<p><b>incluyendo a quienes sean víctimas indirectas y se encuentren en situación de orfandad por el feminicidio de sus madres.</b></p> <p>XIV. a la XXV. ...</p>
<p><b>LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b>Sección Novena. De la Procuraduría General de la República</b></p> <p><b>ARTÍCULO 47.-</b> Corresponde a la Procuraduría General de la República:</p> <p><b>I. a XI...</b></p> <p><b>XII.</b> Las demás previstas para el cumplimiento de la presente Ley.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Sección Novena. De la Procuraduría General de la República</b></p> <p><b>ARTÍCULO 47.-</b> Corresponde a la Procuraduría General de la República:</p> <p><b>I. a XI...</b></p> <p><b>XII. Crear un Registro de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por el feminicidio de sus madres</b></p> <p><b>XIII.</b> Las demás previstas para el cumplimiento de la presente Ley.</p>

<p><b>ARTÍCULO 49.</b> Corresponde a las entidades federativas y al Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto por esta ley y los ordenamientos locales aplicables en la materia:</p> <p><b>I. a XXIV...</b></p> <p><b>XXV. Crear un Registro de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por el feminicidio de sus madres</b></p> <p><b>XXVI.</b> Las demás previstas para el cumplimiento de la presente Ley.</p>	<p><b>ARTÍCULO 49.</b> Corresponde a las entidades federativas y <b>a la Ciudad de México</b>, de conformidad con lo dispuesto por esta ley y los ordenamientos locales aplicables en la materia:</p> <p><b>I. a XXIV...</b></p> <p><b>XXV. Crear un Registro de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por el feminicidio de sus madres</b></p> <p><b>XXVI.</b> Las demás previstas para el cumplimiento de la presente Ley.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO VI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE ORFANDAD POR FEMINICIDIO DE SUS MADRES</b></p> <p><b>Artículo 61.</b> Las autoridades competentes, atenderán el principio del interés superior de la niñez para garantizar las prerrogativas inherentes a las niñas, niños y adolescentes en</p>

**DIP. BEATRIZ ROJAS MARTÍNEZ**

	<p>situación de orfandad por el feminicidio de sus madres, privilegiando el derecho a la educación, a la salud, a la atención psicológica y el acceso a programas y beneficios.</p>
	<p><b>Artículo 62.</b> La Fiscalía General de la República, las entidades federativas y la Ciudad de México, crearán un Registro de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por el feminicidio de sus madres que forme parte del Registro Nacional de Víctimas.</p>
	<p><b>Artículo 63.</b> Las autoridades competentes se coordinarán a través de un Protocolo de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Orfandad como Consecuencia del Feminicidio de sus Madres a fin de garantizar y vigilar el cumplimiento de la satisfacción de las necesidades de alimentación, educación, atención médica y psicológica de los menores de edad en estado de</p>

**DIP. BEATRIZ ROJAS MARTÍNEZ**

	<b>orfandad como consecuencia del delito de feminicidio.</b>
	<b>TRANSITORIO</b> <b>PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.</b>



**DIP. BEATRIZ ROJAS MARTÍNEZ**

En tal virtud, tengo a bien someter a consideración de este Pleno la siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS, EL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, Y LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA EN MATERIA DE GARANTÍA Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE ORFANDAD COMO CONSECUENCIA DEL FEMINICIDIO DE SUS MADRES.**

**ARTÍCULO PRIMERO.** Se adiciona un párrafo cuarto al artículo 4° y se adicionan los párrafos cuarto, quinto y sexto al artículo 8°; se reforma el artículo 44 de la Ley General de Víctimas

Artículo 4. ...

...  
...

**Las niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad como consecuencia del feminicidio de sus madres, son víctimas indirectas del delito.**

## **CAPÍTULO II DE LOS DERECHOS DE AYUDA, ASISTENCIA Y ATENCIÓN**

Artículo 8. ...

...  
...

**Los tres órdenes de gobierno, en sus respectivas competencias, estarán obligados a asignar recursos presupuestales necesarios para garantizar una pronta y eficaz asistencia de las niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad por el feminicidio de sus madres.**

**DIP. BEATRIZ ROJAS MARTÍNEZ**

**Será primordial la atención médica, alimentaria, educativa y psicológica de los menores de edad.**

**En los casos en que las niñas, niños y adolescentes sean encontrados en situación de orfandad por feminicidio, se aplicarán las disposiciones oficiales. Los protocolos de atención deberán considerar su edad, desarrollo cognoscitivo y madurez para la implementación de las acciones de asistencia y protección respectivas, así como la reparación integral del daño, resguardando en todo momento el interés superior de niñas, niños y adolescentes.**

#### **TÍTULO CUARTO MEDIDAS DE ASISTENCIA Y ATENCIÓN CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES**

**Artículo 44.** La Comisión Ejecutiva como responsable de la creación y gestión del Registro Nacional de Víctimas a que hace referencia el Título Séptimo de esta Ley, **elaborará también y dentro del mismo, un registro particular de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por el feminicidio de sus madres y** garantizará que el acceso de las víctimas al Registro se haga de manera efectiva, rápida y diferencial con el fin de permitirles disfrutar de las medidas de asistencia y atención establecidos en la presente Ley.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** Se adiciona un párrafo tercero al artículo 414 del Código Civil Federal.

Artículo 414...

...

**Se extingue o pierde la patria potestad por haber sido condenado por delito de feminicidio. Los familiares del feminicida tampoco podrán ejercer la patria potestad sobre los menores.**

**DIP. BEATRIZ ROJAS MARTÍNEZ**

**ARTÍCULO TERCERO.** Se adiciona la fracción XXI al artículo 13; se reforma el artículo 40, se adiciona la fracción IX y un párrafo quinto al artículo 47; y se reforma la fracción XIII del artículo 116 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

**Artículo 13.** Artículo 13. Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, niños y adolescentes, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes:

I. a **XX** ...

**XXI.- Derechos de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por el feminicidio de sus madres**

**Artículo 40.** Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a adoptar medidas y a realizar las acciones afirmativas necesarias para garantizar a niñas, niños y adolescentes la igualdad sustantiva, de oportunidades y el derecho a la no discriminación.

...

Serán factor de análisis prioritario las diferencias de género como causa de vulnerabilidad y discriminación en contra de las niñas y las adolescentes; **haciendo énfasis en las niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por el feminicidio de sus madres, quienes recibirán atención privilegiada en los derechos de acceso a la salud, atención psicológica, educación y programas y beneficios que les permitan desarrollarse de manera plena.**

**Artículo 47.** Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por:

I. a la VIII. ...

**IX. La orfandad por el feminicidio de sus madres**

...  
...

Las autoridades competentes, están obligadas a implementar medidas especiales para prevenir, sancionar y reparar las conductas previstas en este artículo para niñas, niños y adolescentes con discapacidad.

**Las autoridades competentes, atenderán el principio del interés superior de la niñez para garantizar las prerrogativas inherentes a las niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por el feminicidio de sus madres, privilegiando el derecho a la educación, a la salud, a la atención psicológica y el acceso a programas y beneficios.**

**Artículo 116.** Corresponden a las autoridades federales y locales de manera concurrente, las atribuciones siguientes:

I. a la XII. ...

XIII. Adoptar las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes, víctimas de cualquier forma de violencia; **incluyendo a quienes sean víctimas indirectas y se encuentren en situación de orfandad por el feminicidio de sus madres.**

XIV. a la XXV. ...

**DIP. BEATRIZ ROJAS MARTÍNEZ**

**ARTÍCULO CUARTO.** Se adiciona la fracción XII al artículo 47; se adiciona la fracción XXV al artículo 49; y se adiciona el Capítulo VI De las Niñas, Niños y Adolescentes en situación de orfandad por el feminicidio de sus madres que contiene los artículos 61, 62 y 63, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

**Sección Novena. De la Procuraduría General de la República**

**ARTÍCULO 47.-** Corresponde a la Procuraduría General de la República:

**I. a XI...**

**XII. Crear un Registro de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por el feminicidio de sus madres**

**XIII.** Las demás previstas para el cumplimiento de la presente Ley.

**ARTÍCULO 49.** Corresponde a las entidades federativas y a **la Ciudad de México**, de conformidad con lo dispuesto por esta ley y los ordenamientos locales aplicables en la materia:

**I. a XXIV...**

**XXV. Crear un Registro de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por el feminicidio de sus madres**

**XXVI.** Las demás previstas para el cumplimiento de la presente Ley.

**CAPÍTULO VI**

**DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE ORFANDAD POR FEMINICIDIO DE SUS MADRES**

**Artículo 61.** Las autoridades competentes, atenderán el principio del interés superior de la niñez para garantizar las prerrogativas inherentes a las niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por el feminicidio de sus madres, privilegiando el derecho a la educación, a la salud, a la atención psicológica y el acceso a programas y beneficios.

**DIP. BEATRIZ ROJAS MARTÍNEZ**

**Artículo 62.** La Fiscalía General de la República, las entidades federativas y la Ciudad de México, crearán un Registro de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por el feminicidio de sus madres que forme parte del Registro Nacional de Víctimas.

**Artículo 63.** Las autoridades competentes se coordinarán a través de un Protocolo de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Orfandad como Consecuencia del Feminicidio de sus Madres a fin de garantizar y vigilar el cumplimiento de la satisfacción de las necesidades de alimentación, educación, atención médica y psicológica de los menores de edad en estado de orfandad como consecuencia del delito de feminicidio.

**TRANSITORIOS.**

**ÚNICO.** El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

**A T E N T A M E N T E**



**DIPUTADA BEATRIZ ROJAS MARTÍNEZ**

**Ciudad de México a 23 de marzo de 2022**

**Fuentes consultadas:**

Cámara de Diputadas y Diputados, *Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia*, disponible en: [https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/209278/Ley\\_General\\_de\\_Acceso\\_de\\_las\\_Mujeres\\_a\\_una\\_Vida\\_Libre\\_de\\_Violencia.pdf](https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/209278/Ley_General_de_Acceso_de_las_Mujeres_a_una_Vida_Libre_de_Violencia.pdf)

Medina Rosas. “Las niñas y los niños huérfanos víctimas del feminicidio y otras muertes violentas contra mujeres”, en *Dfensor Revista de Derechos Humanos*, México, 2017, p.13. Disponible en: <http://189.240.117.226/biblos-imdf/node/14993>

Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, *México-Perfil de País*, 2018. Disponible en: <https://oig.cepal.org/es/paises/16/profile>

OEA, *Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. “Convención Belém Do Pará*. Disponible en: <https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html>

Oficina del ACNUR, *La violencia contra la mujer. CEDAW, Recomendación general 19*. Disponible en: [http://archive.ipu.org/splze/cuenca10/cedaw\\_19.pdf](http://archive.ipu.org/splze/cuenca10/cedaw_19.pdf)

ONUMUJERES, ACNUR, ÚNETE. *Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio)*. ONUMUJERES-ACNUR-ÚNETE, sin fecha, p. 14. Disponible en <https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/ProtocoloLatinoamericanoDeInvestigacion.pdf>

ONUMUJERES-SEGOB-INMUJERES, *La violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-2016*. México, ONUMUJERES-SEGOB-INMUJERES, 2017, p. 10. Disponible en:

**DIP. BEATRIZ ROJAS MARTÍNEZ**

[https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/293666/violenciaFeminicidaMx\\_07dic\\_web.pdf](https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/293666/violenciaFeminicidaMx_07dic_web.pdf)

Rincón, Sergio. “Feminicidio de niñas, en aumento; en el último año, 98 casos”, en *La Razón*, disponible en:

<https://www.razon.com.mx/mexico/feminicidio-de-ninas-en-aumento-en-el-ultimo-ano-98-casos/>

Secretariado del Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, “Mapa Incidencia Delictiva Nacional. Enero-agosto 2020”, disponible en:

<https://drive.google.com/file/d/1KJEGs1UPHS8DbjdlreSOQiQ4tPU13BuI/view>

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, “Información sobre violencia contra las mujeres”, México, septiembre de 2020, disponible en:

<https://drive.google.com/file/d/1IAN68eTY8ZoXuoJO-W4uTpyZwbiS913H/view>

Torres Zambrano, Gricelda. “Huérfanos del feminicidio, los niños invisibles”, en *Informe sobre la situación de los derechos humanos en Jalisco, 2017*, Jalisco, 2017, disponible en: <https://cepad.org.mx/wp-content/uploads/2020/03/2017-5-Huerfanos-del-feminicidio.pdf>



*“2022 Año de Ricardo Flores Magón”*

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE PROPONE EXPEDIR LA LEY GENERAL DE OPERACIÓN DE LOS REGISTROS CIVILES, A CARGO DE LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA**

Suscriben los Diputados Erika Vanessa del Castillo, Manuel Vázquez Arellano, Félix Durán Ruiz, Dulce María Corina Villegas Guarneros, Araceli Ocampo Manzanares, María Sierra Damián, Marisol García Segura, Julieta Andrea Ramírez Padilla, Irma Juan Carlos, Pedro Sergio Peñaloza Pérez, Jorge Ángel Sibaja Mendoza, Catalina Diaz Vilchis, Olga Juliana Elizondo Guerra, Brenda Ramiro Alejo, Víctor Gabriel Varela López, Carlos López Guadarrama, Blanca Carolina Pérez Gutiérrez, Brianda Aurora Vázquez Álvarez, Alfredo Vázquez Vázquez, Ismael Brito Mazariegos; Luz Adriana Candelario Figueroa, Martha Robles Ortiz, Rocío Natalí Barrera Puc, María Guadalupe Chavira de la Rosa, César Agustín Hernández Pérez, Rebeca Valle Hernández, Lidia García Anaya, Esther Martínez Romero, Fátima Almendra Cruz Peláez, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, integrantes de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Morena; con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la honorable Cámara de Diputados; someto a consideración de esta soberanía la siguiente **Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se expide la Ley General de Operación de los Registros Civiles**, al tenor de la siguiente:

**Exposición de Motivos**

El derecho a la identidad constituye el derecho primigenio para cualquier persona y se convierte de manera automática en el derecho que permite ejercer de manera plena otros derechos esenciales, como el derecho a la educación, a la salud, al bienestar, a la protección y a la seguridad, es decir, ejercer los derechos que todas las y los mexicanos tenemos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y en nuestras leyes. Garantizar el derecho de toda persona a ser registrada después de su nacimiento es el primer paso para el reconocimiento a la personalidad jurídica sin distinción, en condiciones de igualdad y no discriminación. El derecho a la identidad es a su vez, la integración de otros derechos, como el derecho al nombre propio, el derecho de filiación, dejando constancia de los datos personales más esenciales para el libre desarrollo de la personalidad, como la fecha y lugar de nacimiento, el sexo, los datos de los padres, madres o personas que detenten la filiación o patria potestad, y el documento fundamental en México para acreditar y reconocer la nacionalidad mexicana de todas las personas nacidas en territorio nacional o de madre y/o padre mexicano.



*“2022 Año de Ricardo Flores Magón”*

El derecho a la identidad ha sido reconocido en diversos instrumentos internacionales ratificados por el Estado mexicano, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño, entre otros, son los instrumentos que reconocen los derechos humanos, mismos que no tienen caducidad, son únicos, irrenunciables, intransferibles e indivisibles, los hace un atributo de las personas, de lo contrario representa un factor de exclusión y discriminación.

El derecho a la Identidad está plasmado en el octavo párrafo del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos desde el 17 de junio de 2014 que a la letra dice:

*“Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento.”*

En el marco del respeto a los derechos humanos y en el que se ubica el derecho a la identidad, es una labor del Estado construir políticas públicas que reivindiquen la dignidad humana. En México, el registro de nacimiento, la adopción, reconocimiento, concubinato, matrimonio, divorcio, defunción e inscripciones de sentencias, e inserciones de registros realizados en el exterior; recaen en el Registro Civil de cada una de las 32 entidades federativas y en los Consulados de México en sus funciones del registro civil en el exterior.

En consecuencia, la falta de un acta de nacimiento significa la privación del derecho a la identidad para las niñas, niños y adolescentes. Esta situación adolece de manera constante, por mencionar algunos datos, los gobiernos municipales en compañía con Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) instrumentaron una campaña especial de registro de nacimiento, para abatir los altos niveles de subregistros en entidades como Chiapas y Guerrero, con el objeto de sensibilizar a la población de la importancia de la inscripción en el registro civil. Atendido a otros datos antes de la pandemia de Covid-19, se calculaba que el índice de subregistro de nacimientos era del 1 al 2.9 por ciento de la población, es decir entre uno y tres millones de personas.

Durante el periodo de confinamiento, debido a la expansión del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), el cierre del Registro Civil de las actividades que las autoridades sanitarias definieron como no esenciales, se observó una reducción en la demanda

*“2022 Año de Ricardo Flores Magón”*

de registros, debido a la caída de los nacimientos en 21.58 por ciento respecto lo observado en 2019, dicho descenso se acentuó entre marzo y julio de 2020<sup>1</sup>.

Mas allá de situaciones coyunturales como la pandemia, uno de los grupos históricamente afectados son las personas nacidas a principios y mediados del siglo pasado, que habitan en un lugar diferente al que nacieron, y qué en muchos de los casos no cuentan con un acta de nacimiento, lo que hace que, para la Ley, no tengan identidad legal.

Hay 127 millones<sup>2</sup> de personas mexicanas que habitamos en México y aproximadamente 21 millones de mexicanas y mexicanos residentes en el exterior, independientemente de ello sin distinción, todas las personas necesitan los servicios del Registro Civil, ya sea por cuestiones básicas a la hora de nacer o morir.

Además, en México nos encontramos que, los documentos que acreditan el nacimiento, matrimonio o defunción, se encuentran con errores, lo que significa que la persona interesada tiene que solicitar la corrección, aclaración, rectificación o enmienda de datos en las diferentes actas del registro del estado civil, por la vía administrativa o por vía judicial, lo que implica diversidad de costos, tiempos y requisitos de una entidad federativa a otra. Ello impide el acceso y desarrollo pleno de la personalidad jurídica, por lo que se requiere una homologación de criterios y procedimientos al interior del Registro civil, con una menor carga administrativa, velando en todo momento por la certeza y certidumbre que debe tener el registro de los hechos y actos del estado civil.

## **I. Los Registros Civiles en México**

En México, el antecedente del registro del estado civil de la persona inició con los registros parroquiales. Con el bautismo, se establecieron los primeros libros. El primer Código Civil fue expedido por el Estado de Oaxaca, el 2 de noviembre de 1829, siendo el primero en regular en materia registral, normó los nacimientos, matrimonios y muertes y dotó a las actas eclesiásticas de legalidad absoluta.

En 1859 se decretó la Ley Orgánica del Registro del Estado Civil, la cual otorgó el cambio de adscripción y estableció que los jueces serían quienes harían constar el estado civil de todos los mexicanos y extranjeros residentes en el territorio nacional. Uno de los retos importantes que enfrentó fue la cobertura para registrar a la población y desligarse de los registros religiosos. Los jueces debían de hacer el registro por duplicado en tres libros.

---

<sup>1</sup> Inegi (2020). Derecho a la Identidad en México 2015-2020

<sup>2</sup> Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), datos del Censo de Población y Vivienda 2020 (Censo 2020) link [https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/default.html#Resultados\\_generales](https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/default.html#Resultados_generales)

*“2022 Año de Ricardo Flores Magón”*

Aunque el registro civil de México comenzó en 1859, se impuso su cumplimiento hasta 1867. Por lo general, el nacimiento se registraba a pocos días de nacer una niña o niño, aunque en ocasiones tomaba más tiempo en las zonas rurales, dado que se dificultaba viajar hasta la oficina de registro.

En 1928 con la promulgación del Código Civil, cuya base fue la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, se estableció que los estados de la federación regularían jurídica y administrativamente las funciones del Registro Civil bajo la facultad concedida en el artículo 121 constitucional, el cual:

- a) Da una nueva organización al Registro Civil, poniéndolo bajo la vigilancia del Ministerio Público;
- b) Incorpora elementos ideológicos del movimiento revolucionario, así como una heterogeneidad de tratamiento en diversos aspectos del quehacer registral.

En 1935 se introduce en el Registro Civil, el uso del formato preimpreso para cada acta. Esto homogeneiza el registro de datos precisos que se establecen en la Ley Orgánica del Registro Civil, no obstante, se conserva el registro en forma manuscrita hasta el año de 1979 cuando se establece la obligación de asentar los datos en los formatos preimpresos en forma mecanográfica y en cinco tantos.

La heterogeneidad provocó la desorganización institucional, el marco jurídico existente en cada Estado era diferente y en algunos casos contradictorio entre las entidades federativas. Se presentaron diferencias en el número de hechos y actos de materia de inscripción, existía divergencia de formas utilizadas para inscribir los actos. En algunos de los Estados utilizaban formatos preimpresos con diferencias de fondo y forma significativas mientras que el resto los hacía en forma manuscrita; la denominación de las oficinas y de los funcionarios registradores también era desigual, en la mayoría de los Estados eran oficiales a cargo de una oficialía del Registro Civil, en otros casos contaban con un órgano rector estatal que los coordinaba; en otros eran Jueces, aunque material ni formalmente tenían labores jurisdiccionales, el criterio relacionado con el plazo para registrar el nacimiento oscilaba entre los quince y ciento ochenta días y el registro extemporáneo, en algunos Estados se realizaba por la vía administrativa y en otros, por vía judicial; permanecía la práctica de inscribir en una sola acta a todos los infantes producto de un nacimiento múltiple; el uso indiscriminado de calificativos que estigmatizaban a la persona registrada; el nivel educativo y la capacitación del funcionario registral y sus apoyos no resultaban adecuados para el cumplimiento de las tareas registrales.

En agosto de 1980 por decreto presidencial, se estableció la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal, mejor conocida como RENAPO, adscrita a la Secretaría de Gobernación, con la finalidad de iniciar los

*“2022 Año de Ricardo Flores Magón”*

trabajos para integrar el Registro Nacional de Población, con el objetivo de obtener información fidedigna y completa de los nacionales y extranjeros que acreditaran la ciudadanía mexicana.

Con la coordinación entre las entidades federativas y la Secretaría de Gobernación, así como con la participación del Registro Civil, se inició el proceso de innovación en la institución registral, partiendo del hecho de que en México, los Registros Civiles se encontraban totalmente desarticulados, obsoletos y distintos en muchos de los procedimientos que se utilizan en cada entidad federativa, que no interoperaban a nivel nacional y que en varios lugares constituye para las personas una verdadera batalla al momento de solicitar una corrección elemental, como lo son datos personales o para acreditar su filiación, no obstante, son una pieza clave para hacer valer y ejercer todos los derechos humanos, a partir de acreditar y garantizar de manera fehaciente el derecho a la identidad de todas las personas.

Los Diálogos por la Justicia Cotidiana, convocados en noviembre de 2015 por el Gobierno de la República, en conjunto con el CIDE y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, recogen y desarrollan las principales problemáticas y recomendaciones para que el derecho a la identidad y a la personalidad jurídica, sean una realidad para todas las personas en nuestro país, para lo cual se concluye que el país debería trabajar en los siguientes criterios de solución:

- 1) La armonización de la multiplicidad de los códigos de procedimientos civiles, con ello brindará jurisprudencia.
- 2) El registro civil corresponde al orden local por lo que no existe procedimiento homologado que regule el registro civil con un enfoque de derechos incluyente.
- 3) La accidentada orografía de ciertas regiones, en ocasiones, obstaculiza el registro de nacimiento porque se dificulta el acceso a los registros civiles.
- 4) Los costos económicos obstaculizan el registro y cumplir la gratuidad de la emisión de la primera acta de nacimiento.
- 5) Las barreras culturales, es decir el desconocimiento de la importancia del registro de nacimiento, por cuestiones de ilegitimidad de las madres solteras discriminación de género, son las principales causas del subregistro.
- 6) La falta de capacitación de los servidores públicos que incluya el conocimiento de la lengua local en oficinas que atienden poblaciones indígenas.

Asimismo, se concluyó en los Diálogos por la Justicia Cotidiana como medidas para reducir la marginación jurídica:

- La armonización y homologación de los Registros Civiles;

*“2022 Año de Ricardo Flores Magón”*

- Establecer formatos accesibles de inscripción en materia de Registro Civil;
- Estandarizar las actas del estado civil;
- Establecer medidas de alta seguridad física en las actas expedidas en los establecimientos públicos;
- Establecer medidas de seguridad electrónicas de las actas;
- Simplificar y homologar los criterios y procedimientos para asentar las anotaciones marginales;
- Diseñar mecanismos que permitan la consulta y expedición remota de las actas del Registro Civil;
- Diseñar mecanismos alternos para la atención de comunidades indígenas/afro y grupos en situación de especial vulnerabilidad y marginación;
- Simplificar, agilizar y estandarizar los procedimientos y requisitos en materia de Registro Civil;
- Homologar costos y cumplir la gratuidad de la primera acta de nacimiento;
- Establecer mecanismos homologados de captura de datos;
- Establecer procesos para que personas que no tengan documentos tengan acceso a ellos, no obstante que el registro sea extemporáneo;
- Simplificar procedimientos de corrección, rectificación y aclaración de actas;
- Mejorar la atención que se brinda a la ciudadanía en los Registros Civiles;
- Agilizar la expedición de actas mediante el uso de recursos tecnológicos, y
- Establecer mecanismos para garantizar el acceso en zonas lejanas o marginadas con adecuación cultural en materia de Registro Civil.

Derivado de dichas recomendaciones se planteó la necesidad de llevar a cabo una Reforma Constitucional, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 05 de febrero de 2017, relativa a la fracción XXIX-R del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos de México<sup>3</sup>, que estableció:

*“XXIX-R. Para expedir las leyes generales que armonicen y homologuen la organización y el funcionamiento de los registros civiles, ....”*

Así mismo, estableció que la Honorable Cámara de Diputados tendría un plazo que no excedería de los 180 días naturales siguientes para la expedición de las leyes<sup>4</sup>,

<sup>3</sup> [https://www.dof.gob.mx/nota\\_detalle.php?codigo=5470987&fecha=05/02/2017](https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5470987&fecha=05/02/2017)

<sup>4</sup> *ibid*

**“2022 Año de Ricardo Flores Magón”**

sin embargo, hasta ahora han pasado 5 años 1 mes y no se había emitido propuesta alguna al respecto.

En consecuencia, de acuerdo con el artículo primero que establece:

*“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.....”*

Así mismo, el párrafo octavo del artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mandata:

*“Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos...”*

El 2 de septiembre de 2020, el Poder Judicial de la Federación dictó omisión a la **Cámara de Diputados y Cámara de Senadores**, ambas del Congreso de la Unión, consistente en la **omisión legislativa** de expedir la Ley Reglamentaria del artículo 73, fracción XXIX-R, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

***Ley General que homologue y regule el funcionamiento de los Registros Civiles, conforme a lo ordenado en la reforma constitucional que se publicó el cinco de febrero de dos mil diecisiete.***

Por lo que ordenan a las autoridades responsables, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, ambas del Congreso de la Unión, realicen:

*“todas las acciones necesarias, conforme a las facultades que tienen conferidas en la Constitución y en las leyes secundarias que rigen su funcionamiento, con el fin de que, a la brevedad posible, expidan la Ley Reglamentaria del artículo 73, fracción XXIX-R, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que armonice y homologue la organización y el funcionamiento de los Registros Civiles de todo el país”. Atendiendo a la reforma publicada, sobre dicho tópico, el cinco de febrero de dos mil diecisiete, en el Diario Oficial de la Federación.*

*“2022 Año de Ricardo Flores Magón”*

Si bien actualmente han colaborado en coordinación permanente el Consejo Nacional de Funcionarios del Registro Civil, la Dirección General de Registro Nacional de Población e Identidad (RENAPO), los 32 Registros Civiles de las entidades federativas, y los 148 consulados en el exterior, es necesario y crucial para el desarrollo de nuestro país, acreditar el derecho a la identidad de todas las personas sin distinción y reconocer su personalidad jurídica, a través de la institución mexicana que lo acredita y lo hace valer en beneficio de todas las personas: el Registro Civil.

Esta iniciativa retoma la propuesta inscrita en la LXIV legislatura por la Dip. Roció Barrera Badillo, de nombre *“Ley General para Armonizar y Homologar los Registros Civiles”* presentada el 26 de marzo de 2020, fue turnada a la Comisión de Gobernación y Población, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, sin embargo, el estatus quedó pendiente. La actual propuesta que tenemos a bien en presentar recoge un extracto de las ideas que con anterioridad se mencionan.

Por lo que hace manifiesta y necesaria esta propuesta de Ley, que adicionalmente dará cumplimiento a un mandato constitucional:

## **II. Propuesta y Estructura de la Ley General de Operación de los Registros Civiles.**

El presente proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Operación de los Registros Civiles, además de ser una obligación del Estado mexicano, establece la respuesta a las demandas y necesidades de la población para ejercer plenamente sus derechos humanos.

La Ley General de Operación de los Registros Civiles que se propone, consta de cinco Títulos:

Título Primero **“Disposiciones Generales”** establece el **Capítulo I** señalando que dicha Ley es reglamentaria de los artículos 4º, octavo párrafo y 121, fracción IV de la Constitución Política, de orden público, de interés social y de observancia general en el territorio nacional para los Registros Civiles del país y en el exterior por cuanto hace a las funciones y facultades que realizan las Oficinas Consulares de México de conformidad con su marco jurídico aplicable, en materia de registro de Hechos o Actos del Estado Civil Susceptibles de Registro.

Asimismo, establece que el objeto de la ley es garantizar el derecho a la identidad de las personas y el acceso a los servicios que proporciona el Registro Civil, así como a los documentos y constancias en los que conste su identidad jurídica; establecer los mecanismos para garantizar el derecho de toda persona mexicana a



*“2022 Año de Ricardo Flores Magón”*

ser registrada después de su nacimiento; establecer las normas, bases y principios que armonicen y homologuen la organización, funcionamiento y procedimientos de los Registros Civiles en territorio nacional y en el exterior por cuanto hace a las funciones que realizan las Oficinas Consulares y distribuir las competencias y armonizar facultades entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno en materia de hechos o actos del Estado Civil susceptibles de registro.

En el **Capítulo II, “De la Armonización de Facultades”**, establece aquellas que le corresponden al Poder Ejecutivo Federal, al Poder Ejecutivo de cada entidad federativa, a los municipios y a las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, por conducto de sus presidentes municipales y alcaldes, así como las facultades que de manera concurrente corresponderán a los tres órdenes de gobierno.

**Titulo Segundo “Estructura y Organización del Registro Civil”** cuenta con un **Capítulo Único** denominado **“De las autoridades en materia de Registro Civil”**, señala que el Registro Civil es la institución pública que hace constar, mediante la intervención de personas funcionarias autorizadas e investidas de fe pública, la inscripción en sus Libros de los Hechos y Actos del Estado Civil Susceptibles de Registro.

Al respecto en su **Sección Primera “De las Direcciones Generales del Registro Civil”** por conducto de la persona titular de la misma tendrá como responsabilidad organizar, dirigir, administrar y vigilar las áreas del Registro Civil, dictando las medidas necesarias para el óptimo y eficaz funcionamiento de la **institución registral**.

En la **Sección Segunda** denominada **“Oficialías y de las personas titulares de las Oficialías del Registro Civil”** establece los requisitos que debe de cumplir, así como sus principales funciones.

La **Sección Tercera** denominada **“De la Secretaría de Relaciones Exteriores”**, determina que, para el registro de las personas mexicanas domiciliadas en el extranjero, el Jefe de la Oficina Consular, ejercerá las funciones de Oficial del Registro Civil, con base en lo previsto en la presente ley, la Ley del Servicio Exterior Mexicano, su reglamento y demás disposiciones jurídico- administrativas aplicables.

En la **Sección Cuarta “Del Consejo Nacional del Registro Civil”**, determina que este consejo es el órgano de coordinación interinstitucional para la operación de la organización, el funcionamiento y los procedimientos de los Registros Civiles en los



*“2022 Año de Ricardo Flores Magón”*

Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto establecer los acuerdos, normas, planes, programas, políticas, bases generales, lineamientos, manuales, reglas, instructivos, procedimientos y demás disposiciones de carácter general y obligatorio, que permitan la operación, organización y el funcionamiento de los Registros Civiles.

**Título Tercero “De las Herramientas del Registro Civil e identidad”**, está integrado por el dos **Capítulos, I. “Del formato Único en Materia de Registro de Población”**, determina que es el formato para la inscripción en Libros del Registro Civil de los Hechos o Actos del Estado Civil Susceptibles de Registro y con base en el mismo, expedir las Actas, mismo que es emitido por la Secretaría de Gobernación, previo acuerdo del Consejo Nacional del Registro Civil, el cual debe asentar la información en español, así como en lenguas indígenas de las que se disponga, y sea solicitada de manera expresa por la persona registrada o quien tenga derecho a solicitarla.

**Sección Primera “Formato Único de Inscripción”** el cual contiene los apartados necesarios para que esté debidamente inscrito el Hecho o Acto del Estado Civil Susceptible de Registro que corresponda, que permita su localización, inscripción y almacenamiento, en términos de lo que disponga la normativa que para tal efecto emita el Consejo Nacional del Registro Civil.

**Sección Segunda “Formato Único de Actas”** hace referencia al formato para la expedición del Acta que corresponda con el Hecho o Acto del Estado Civil Susceptible de Registro que haya sido inscrito en los Libros del Registro Civil.

El **Capítulo II** denominado **“Del Sistema Nacional de Registro e Identidad”**, establece que este sistema es la herramienta informática administrada por la Secretaría de Gobernación, que permite la inscripción y la certificación de los Hechos o Actos del Estado Civil Susceptibles de Registro asentados por las personas titulares de las Oficialías en los Libros del Registro Civil, la gestión de la Clave Única de Registro de Población y la vinculación de los datos biométricos a los que se refiere la Ley General de Población de las personas registradas.

**Título Cuarto: “De los Procedimientos del Registro Civil”** se inscribe y certifica Hechos o Actos del Estado Civil Susceptibles de Registro, bajo dos criterios de los hechos del estado civil que crean o modifican la identidad de la persona o los actos que crean o modifican el parentesco consanguíneo o civil.

**Capítulo I “De las Solicitudes de Inscripción”**, señalando que las personas titulares de las Oficialías del Registro Civil sólo podrán inscribir aquellos Hechos o Actos del Estado Civil Susceptibles de Registro de acuerdo con la jurisdicción y circunscripción territorial establecida por la entidad federativa de la que dependan.



*“2022 Año de Ricardo Flores Magón”*

Los Jefes de Oficinas Consulares podrán inscribir aquellos Hechos o Actos del Estado Civil Susceptibles de Registro, sin restricción territorial, en términos de lo dispuesto en la Ley del Servicio Exterior Mexicano y su Reglamento, así como las disposiciones jurídico administrativas aplicables que emita la Secretaría de Relaciones Exteriores y que a través del Consejo Nacional del Registro Civil se establecerá el procedimiento y requisitos para realizar las solicitudes de inscripción en los Libros del Registro Civil de los Hechos y Actos del Estado Civil Susceptibles de Registro para su registro oportuno y para los que se realicen fuera de dichos plazos.

**Capítulo II “De las Rectificaciones”**, señalando que la rectificación es el procedimiento que se realiza ante las Direcciones Generales, Oficialías del Registro Civil y en las Oficinas Consulares de México en el exterior o en su caso, ante la autoridad judicial competente, sin importar el lugar o entidad federativa en la que se haya realizado la inscripción del Hecho o Acto del Estado Civil susceptible de Registro, que enmienda un error, aclara, modifica o anula una inscripción o, complementa información faltante y necesaria para un registro, en cualquiera de los datos que la integren.

**Capítulo III “De las anotaciones”**, señalando que son objeto de anotaciones, en las inscripciones y en las Actas del Registro Civil, los hechos y actos jurídicos que los modifiquen, las cuales deben realizarse siempre bajo el principio de prelación y cuyo registro será realizado mediante el asentamiento de la anotación del hecho u acto que corresponda en el Formato Único de Inscripción de que se trate, el cual deberá cumplimentar la totalidad de los campos que la integran.

**Título Quinto “De las Responsabilidades y de las Sanciones”**, es el Capítulo Único que hace referencia a los actos u omisiones que impliquen el incumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley, y demás aplicables en la materia, mismas que serán sancionados de conformidad con lo previsto en el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de las constituciones de las entidades federativas, y de lo previsto en la legislación sobre responsabilidades administrativas y penales de servidores públicos, según corresponda.

Por las razones expuestas, se somete a la consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa de Ley.



*“2022 Año de Ricardo Flores Magón”*

**DECRETO POR EL QUE SE EXPEDIRÁ LA LEY GENERAL  
DE OPERACIÓN DE LOS REGISTROS CIVILES**

**Artículo Único.** Se EXPIDE la Ley General de Operación de los Registros Civiles, para quedar como sigue:

**LEY GENERAL DE OPERACIÓN DE LOS REGISTROS CIVILES**

**TÍTULO PRIMERO  
DISPOSICIONES GENERALES**

**CAPÍTULO I  
OBJETO DE LA LEY**

**Artículo 1.** La presente Ley es reglamentaria de los artículos 4º, octavo párrafo y 121, fracción IV de la Constitución Política, de orden público, de interés social y de observancia general en el territorio nacional para los Registros Civiles del país y en el exterior por cuanto hace a las funciones y facultades que realizan las Oficinas Consulares de México de conformidad con su marco jurídico aplicable, en materia de registro de Hechos o Actos del Estado Civil Susceptibles de Registro.

**Artículo 2.** Esta Ley tiene como objeto:

- I. Garantizar el derecho a la identidad de las personas y el acceso a los servicios que proporciona el Registro Civil, así como a los documentos y constancias en los que conste su identidad jurídica.
- II. Establecer los mecanismos para garantizar el derecho de toda persona mexicana a ser registrada después de su nacimiento.
- III. Establecer las normas, bases y principios que armonicen y homologuen la organización, funcionamiento y procedimientos de los Registros Civiles

*“2022 Año de Ricardo Flores Magón”*

en el territorio nacional, y en el exterior conforme lo determine la legislación federal que corresponda, por cuanto hace a las funciones que en esta materia realizan las Oficinas Consulares de México, y

- IV. Distribuir competencias y armonizar facultades y obligaciones entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno en materia de Hechos o Actos del Estado Civil Susceptibles de Registro.

**Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entiende por:**

- I. **Acta:** al documento público debidamente autorizado por la persona titular de la Oficialía del Registro Civil y por servidores públicos facultados para ello, en el que se hace constar y hace prueba plena, del registro de los hechos o actos inscritos en los Libros del Registro Civil.
- II. **Anotación:** al asiento breve que forma parte del registro y que debe obrar en el Acta, que tienen por objeto dejar constancia de la correlación entre uno o más registros, de un hecho o modificar el contenido original de una inscripción derivado de un procedimiento administrativo, judicial o por disposición expresa de la ley.
- III. **Apéndice:** al expediente agregado que contiene los documentos necesarios para realizar la inscripción o la rectificación de los Hechos o Actos del Estado Civil Susceptibles de Registro.
- IV. **Archivo Central:** al área de la Dirección General del Registro Civil o de la Dirección General correspondiente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que custodia y conserva un respaldo de los Libros de formato físico y/o electrónico, así como de la base de datos local que contienen la inscripción de los registros de los Hechos y Actos del Estado Civil Susceptibles de Registro de todas las Oficialías del Registro Civil de cada entidad federativa y de las Oficinas Consulares de México en su función de Oficial de Registro Civil, respectivamente.
- V. **Base de Datos Estatal de Registro Civil:** al sistema de datos a cargo del Poder Ejecutivo de cada entidad federativa en el que se concentra la inscripción de los registros de los hechos y actos del estado civil que obren en los Libros del Registro Civil de dicha entidad.

- VI. **Base de Datos Nacional del Registro Civil:** al sistema de datos a cargo de la Secretaría de Gobernación, en el que se concentra la inscripción de los registros de los hechos y actos del estado civil inscritos en los Libros del Registro Civil de cada entidad federativa y en las Oficinas Consulares de México en su función de Oficial de Registro Civil, que sean remitidos a la Secretaría.
- VII. **Certificación:** acto jurídico por medio del cual las personas servidoras públicas en el ejercicio de su cargo dan fe de la existencia de un hecho o acto del estado civil de las personas que se encuentra inscrito en los Libros del Registro Civil.
- VIII. **Constancia de inexistencia:** al documento público que acredita que no existe en los Libros del Registro Civil, el registro de la inscripción de un Hecho o Acto Susceptible de Registro, en fecha cierta.
- IX. **Consejo:** al Consejo Nacional del Registro Civil.
- X. **Clave Única de Registro de Población:** al código de registro e identificación que emite la Secretaría de Gobernación, asignada a las personas mexicanas desde el momento de su nacimiento por parte del Registro Civil, asociado a la identidad de una persona, que permite la interacción tanto en el ámbito público como privado y digital.
- XI. **Datos personales:** Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información.
- XII. **Hecho o Acto del Estado Civil Susceptible de Registro:** al hecho vital: nacimiento y defunción, y en forma enunciativa, más no limitativa, a los actos jurídicos como: adopción, reconocimiento, matrimonio, divorcio, concubinato, presunción de muerte e inscripción de sentencias y situaciones de extranjería, entre otros, que acreditan en su conjunto el estado civil de una persona, que tienen relevancia jurídica al crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones y que son registrables ante las Oficialías del Registro Civil y Oficinas Consulares de México, los

*“2022 Año de Ricardo Flores Magón”*

cuales son regulados en la normatividad correspondiente a nivel federal y de cada entidad federativa.

- XIII. **Identidad:** al conjunto de rasgos y atributos de la persona física, que la caracterizan y la distinguen de las demás personas, y que la constituyen como sujeto de derechos y obligaciones.
- XIV. **Inscripción:** al asiento mediante el cual se registran en los Libros del Registro Civil los Hechos o Actos del Estado Civil Susceptibles de Registro ante las Oficialías del Registro Civil y Oficinas Consulares de México.
- XV. **Inserción:** A la inscripción de los hechos o actos del estado civil adquiridos o celebrados en el extranjero por personas mexicanas.
- XVI. **Jefes de Oficinas Consulares:** a los miembros del Servicio Exterior Mexicano que ejercen funciones de la persona titular de la Oficialía del Registro Civil, en términos de lo que dispone el Código Civil Federal, la Ley del Servicio Exterior Mexicano y su reglamento, y la Sección Tercera del Capítulo Único del Título Segundo de esta Ley.
- XVII. **Ley:** a la Ley General de Operación de los Registros Civiles.
- XVIII. **Libros del Registro Civil:** al conjunto de registros, en formato físico y/o electrónico, que acreditan la inscripción de los hechos y actos del estado civil de las personas, que se identifican con base en la normatividad que emita el Consejo, cuyo original obra en cada una de las Oficialías del Registro Civil en donde se realiza la inscripción y un duplicado exacto que se remite por cada Oficialía a la Dirección General del Registro Civil y se integra de manera física o electrónica al Archivo Central.

Para el caso de las Oficinas Consulares de México, los Libros del Registro Civil originales quedan a resguardo de la Oficina Consular que haya realizado la inscripción del hecho o del acto jurídico, y cuyo libro duplicado exacto, que obre en formato físico, deberá remitirse a la Dirección General del Registro de la Ciudad de México en los términos que establezca el Consejo. Los Libros del Registro Civil que integren registros en formato

*“2022 Año de Ricardo Flores Magón”*

electrónico, quedarán a resguardo en la base de datos que, para tal efecto, integre y administre la Secretaría de Relaciones Exteriores.

- XIX. **Oficialía del Registro Civil:** a la oficina física o itinerante del Registro Civil en territorio nacional y al área que corresponda a las Oficinas Consulares de México que ejerzan dichas funciones, para inscribir, autorizar, rectificar, certificar, dar publicidad y solemnidad a los Hechos o Actos del Estado Civil Susceptibles de Registro, a través de medios físicos y/o electrónicos, con el propósito de brindar certeza jurídica a las personas.
- XX. **Personas titulares de las Oficialías del Registro Civil:** a las personas servidoras públicas descritas en el artículo 19 de esta Ley, así como a los Jefes de las Oficinas Consulares que realicen funciones de Oficial del Registro Civil, en términos de lo que dispone esta ley y la Ley del Servicio Exterior Mexicano y su reglamento.
- XXI. **Población:** a las personas mexicanas y extranjeras que habiten en el territorio nacional o aquellas personas de nacionalidad mexicana que radiquen o se encuentren de paso en el extranjero.
- XXII. **Registro:** resultado del proceso de inscripción en los Libros del Registro Civil, del cual se obtiene el instrumento público donde se asientan los datos de inscripción de un Hecho o Acto Susceptible de Registro y se emiten las Actas.
- XXIII. **Registro Oportuno:** al proceso para la inscripción en Libros del Registro Civil que se realiza bajo demanda, para el nacimiento dentro de los sesenta días posteriores al hecho vital; para la defunción dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes ocurrida la defunción salvo los casos que establezca el Consejo, y para el resto de los actos jurídicos cuando éstos sean registrados.
- XXIV. **Registro Universal:** al proceso para que todas las personas que integran la población cuenten con la inscripción de los hechos y actos de su estado civil en los Libros del Registro Civil.
- XXV. **Reglamento:** al Reglamento de esta Ley.



*“2022 Año de Ricardo Flores Magón”*

XXVI. **Secretaría:** a la Secretaría de Gobernación.

XXVII. **Servicio Profesional de Carrera:** a la política pública a cargo de cada entidad federativa para la profesionalización de las personas servidoras públicas del Registro Civil que fomenta la eficiencia y eficacia de la gestión pública, lo que se traduce en una mejora en los servicios que se ofrecen a la ciudadanía, y

XXVIII. **SID:** al Sistema Nacional de Registro e Identidad.

**Artículo 4.** En todas las entidades federativas y en las Oficinas Consulares de México se dará entera fe y crédito de la inscripción en los Libros del Registro Civil y de las Actas que se emitan correspondientes al registro de los hechos y actos del estado civil, que ajustados a las leyes federales y de cada entidad federativa, tendrán plena validez y harán prueba plena en las otras.

**Artículo 5.** La inscripción del nacimiento y defunción, las constancias de inexistencia que sean necesarias para llevar a cabo dichas inscripciones, así como la expedición de la primera Acta respectiva, son gratuitas, con independencia de si se trata o no de un registro oportuno.

Las contraprestaciones que la Federación y las entidades federativas establezcan para cubrir los servicios que presta el Registro Civil deben garantizar que las personas puedan acceder a éstos.

**Artículo 6.** En el ejercicio de la función registral se observarán los principios de publicidad, inscripción, especialidad, consentimiento, tracto sucesivo, rogación, prelación o prioridad, legalidad, legitimación y fe pública registral.

El Registro Civil debe prestar sus servicios con disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, eficacia, eficiencia y rendición de cuentas, respetando los derechos a la igualdad y no discriminación, con un enfoque pluricultural y de respeto a toda forma de diversidad.



*“2022 Año de Ricardo Flores Magón”*

**Artículo 7.** La interpretación para efectos administrativos de la Ley corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, y al Ejecutivo de cada entidad federativa en el ámbito de su respectiva competencia y aplicación de la Ley, la cual se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política y en los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, como norma relativa a la promoción, respeto, protección y garantía del derecho humano a la identidad, al reconocimiento de la personalidad jurídica y al derecho a ser registrada después de su nacimiento, privilegiando asimismo los principios constitucionales en materia de protección de datos personales.

## CAPÍTULO II DE LA ARMONIZACIÓN DE FACULTADES

**Artículo 8.** Corresponde al Ejecutivo Federal lo siguiente:

- I. Por conducto de la Secretaría:
  - a) Formular y conducir la política pública para el Registro Universal y Oportuno de la población, así como diseñar e instrumentar estrategias para garantizar el derecho a la identidad.
  - b) Diseñar y administrar el SID para la inscripción de los Hechos o Actos del Estado Civil Susceptibles de Registro, la gestión de la Clave Única de Registro de Población y la vinculación con los datos biométricos de su titular, que se realicen ante las personas titulares de las Oficialías del Registro Civil o las personas servidoras públicas facultadas para ello en el territorio nacional o en las Oficinas Consulares de México.
  - c) Concentrar y administrar la Base de Datos Nacional del Registro Civil, así como plantear y proponer las características mínimas que deberá contener la Base de Datos Estatal de Registro Civil.
  - d) Conformar y mantener actualizado un catálogo nacional de Oficialías del Registro Civil, con base en la información que le sea proporcionada por las entidades federativas, y por la Secretaría de Relaciones

*“2022 Año de Ricardo Flores Magón”*

Exteriores, por lo que refiere a la información de las Oficinas Consulares de México.

- e) Establecer las medidas de seguridad administrativas, físicas y electrónicas de la información y documentación que deberá aplicar el Registro Civil de cada entidad federativa, y las Oficinas Consulares de México, éstas últimas en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores.
- f) Diseñar modelos de funcionamiento para las Direcciones Generales del Registro Civil que deberán adoptar las entidades federativas, de conformidad con la fracción III del artículo 2 de la Ley.
- g) Proponer al Consejo criterios de operación para la organización, funcionamiento y procedimientos del Registro Civil.
- h) Coordinar con las Direcciones Generales de Registro Civil y con la Secretaría de Relaciones Exteriores los procesos para la asignación, actualización e inactivación de la Clave Única de Registro de Población en las Oficialías del Registro Civil y Oficinas Consulares de México; así como el proceso para el registro de identidad de las personas, y
- i) Las demás que establezca la Ley, el Reglamento y otras disposiciones aplicables.

- II. Por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, armonizar, homologar y coordinar la organización, funcionamiento y procedimientos correspondientes, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables a la actuación de las Oficinas Consulares de México en su función de Oficial de Registro Civil.

**Artículo 9.** Corresponde a las entidades federativas, por conducto de su Poder Ejecutivo, lo siguiente:

***“2022 Año de Ricardo Flores Magón”***

- I. Administrar y operar el Registro Civil, conforme a las facultades establecidas en la Ley, la normativa que emita el Consejo y demás disposiciones aplicables en cada entidad federativa.
- II. Mantener actualizada la Base de Datos Estatal de Registro Civil, para su integración en la Base de Datos Nacional del Registro Civil.
- III. Nombrar y separar de su cargo al titular de la Dirección General del Registro Civil, de conformidad con lo dispuesto en la Ley, y demás disposiciones aplicables.
- IV. Determinar la creación y reubicación de Oficialías del Registro Civil; estableciendo su circunscripción territorial; disponer lo necesario para su funcionamiento y, en su caso, determinar su cierre temporal o definitivo, en términos de lo dispuesto en la normativa que emita el Consejo y demás disposiciones aplicables.
- V. Administrar el Archivo Central del Registro Civil, en términos de lo dispuesto en la normativa que emita el Consejo o las demás disposiciones aplicables.
- VI. Promover e implementar programas específicos y acciones que contribuyan a facilitar el acceso a los servicios del Registro Civil, así como a su eficaz funcionamiento.
- VII. Coadyuvar con el Registro Nacional de Población en la asignación, actualización o inactivación de la Clave Única de Registro de Población, así como en los procesos para el registro de identidad de las personas, en los términos de las disposiciones aplicables.
- VIII. Establecer, administrar y operar el Servicio Profesional de Carrera con base a los criterios de reclutamiento, selección, capacitación, actualización y profesionalización que emita el Consejo, conforme a las facultades establecidas en la normativa que al respecto se emita en cada entidad federativa y demás disposiciones aplicables.
- IX. Proponer al Poder Legislativo que corresponda las contraprestaciones por los servicios que presta el Registro Civil.

*“2022 Año de Ricardo Flores Magón”*

- X. Asegurar que los servicios que preste el Registro Civil a la población se realicen con calidad, oportunidad, seguridad, certeza y con pleno respecto a los derechos humanos, observando en todo momento los principios registrales contenidos en el artículo 6 de la presente Ley.
- XI. Diseñar mecanismos alternos para facilitar la inscripción de los hechos y actos del estado civil de las personas integrantes de comunidades indígenas, afromexicanas y grupos en situación de especial de vulnerabilidad y marginación; así como para brindarles todos los servicios del Registro Civil, y
- XII. Las demás atribuciones que les confieran la Ley que no estén reservadas a la Federación y que se establezcan en las disposiciones aplicables del ámbito estatal.

**Artículo 10.** Corresponde a los municipios y a las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, por conducto de sus presidentes municipales y alcaldes, lo siguiente:

- I. Auxiliar en las labores que les solicite el Ejecutivo Estatal en materia de Registro Civil.
- II. Promover la regularización de la inscripción de los Hechos o Actos del Estado Civil Susceptibles de Registro de las personas.
- III. Participar en las estrategias que promueva el Registro Civil de su entidad federativa con la finalidad de garantizar el registro universal, oportuno y gratuito de nacimientos y defunciones, y
- IV. Las demás atribuciones que les confieran la Ley y otras disposiciones aplicables.

**Artículo 11.** Corresponde, en forma concurrente, al Ejecutivo Federal, a las entidades federativas, a los municipios y a las demarcaciones territoriales, en lo que corresponda, lo siguiente:

- I. Promover estrategias para garantizar plenamente el derecho a la identidad, el registro universal, oportuno y gratuito de nacimientos y defunciones y el reconocimiento a la personalidad jurídica.
- II. Promover el uso del Formato Único en materia de registro de población.
- III. Elaborar materiales y promover campañas de difusión sobre el funcionamiento del Registro Civil y los beneficios de la inscripción de los Hechos o Actos del Estado Civil Susceptibles de Registro en los Libros del Registro Civil.
- IV. Impulsar acciones para que las unidades hospitalarias y clínicas de salud, tanto públicas como privadas, cuenten con mecanismos para registrar oportunamente ante el Registro Civil, los nacimientos y las defunciones; priorizando aquellas en donde ocurran mayor número de dichos hechos vitales.
- V. Promover acciones para mejorar la accesibilidad y cobertura de los servicios que presta el Registro Civil, atendiendo las características pluriculturales de toda la población mexicana, con enfoque de derechos, universalidad, igualdad, no discriminación, accesibilidad, adaptabilidad, calidad, sensibilidad al curso de vida, lenguaje accesible, sencillo e incluyente, y de pleno respeto a toda forma de diversidad.
- VI. Las demás que, en el ámbito de sus atribuciones, les confieran la Ley, el Reglamento y otras disposiciones aplicables.

## **TITULO SEGUNDO**

### **ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL**

#### **CAPÍTULO ÚNICO**

#### **DE LAS AUTORIDADES EN MATERIA DE REGISTRO CIVIL**

#### **SECCIÓN PRIMERA**



*“2022 Año de Ricardo Flores Magón”*

## DE LAS DIRECCIONES GENERALES DEL REGISTRO CIVIL

**Artículo 12.** El Registro Civil es la institución pública que hace constar, mediante la intervención de personas funcionarias autorizadas e investidas de fe pública, la inscripción en sus Libros de los Hechos y Actos del Estado Civil Susceptibles de Registro.

**Artículo 13.** Las entidades federativas contarán en su territorio con una unidad administrativa denominada Dirección General del Registro Civil, a cargo de una persona titular denominada Directora o Director General, adscrita a la Secretaría de Estado que así determine el Poder Ejecutivo de cada entidad federativa.

**Artículo 14.** La o el Director General de la unidad administrativa denominada Dirección General del Registro Civil de cada entidad federativa es designada por la persona titular del Poder Ejecutivo de dicha entidad, y debe cumplir con los siguientes requisitos:

- I. Ser de nacionalidad mexicana.
- II. Contar con un título y cédula profesional de por lo menos estudios superiores de licenciatura, y práctica profesional de cinco años-
- III. No estar en el supuesto de suspensión, destitución o inhabilitación por resolución firme como persona servidora pública en términos de las disposiciones normativas aplicables.
- IV. Estar en el pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos.
- V. No estar purgando penas por delitos dolosos, y
- VI. No ser persona ministra de algún culto religioso.

**Artículo 15.** Corresponde a la unidad administrativa denominada Dirección General del Registro Civil, por conducto de la persona titular de la misma: organizar, dirigir, administrar y vigilar las áreas del Registro Civil, dictando las medidas necesarias

*“2022 Año de Ricardo Flores Magón”*

para el óptimo y eficaz funcionamiento de la institución registral, para lo cual tendrán las facultades siguientes:

- I. Coordinar y supervisar a las Oficialías del Registro Civil y demás unidades administrativas a su cargo, para constatar el correcto desempeño de sus funciones.
- II. Expedir y autorizar con su firma autógrafa, digital, electrónica o con sello físico o digital, a través de los medios físicos o electrónicos dispuestos para tal efecto, en los formatos autorizados, las Actas que hagan constar la inscripción de los Hechos o Actos del Estado Civil Susceptibles de Registro de las personas que obren en los Libros del Archivo Central de la Dirección General de la que sea titular, así como la expedición de las constancias de inexistencia, rectificaciones administrativas y las anotaciones derivadas a dichas rectificaciones.
- III. Resguardar la inscripción de los Hechos o Actos del Estado Civil Susceptibles de Registro, sus respectivos apéndices y la información soporte de su actuar, por medios físicos o informáticos o aquéllos que el avance tecnológico ofrezca en la Base de Datos Estatal del Registro Civil, que permitan la conservación de los mismos y la certeza sobre su autenticidad.
- IV. Aplicar las disposiciones normativas relativas al uso, actualización, conservación, custodia y seguridad de la información capturada y digitalizada de los Hechos o Actos del Estado Civil Susceptibles de Registro de las personas; así como supervisar dichas normas de conformidad con los modelos que apruebe el Consejo.
- V. Administrar el Archivo Central del Registro Civil, así como mantener actualizados los índices de los Libros del Registro Civil y catálogos de las inscripciones de los Hechos o Actos del Estado Civil Susceptibles de Registro, procurando su incorporación a medios que el avance tecnológico permita, en términos de lo que disponga la normativa que emita el Consejo.



*“2022 Año de Ricardo Flores Magón”*

- VI. Resguardar los Libros del Registro Civil en formato físico y/o electrónicos, así como la Base de Datos Estatal de Registro Civil que contengan los registros, documentos y anotaciones que se relacionen con las inscripciones registrales, así como aquellos medios que los contengan y que el avance tecnológico puede ofrecer.
- VII. Aplicar la normatividad que establezca la Ley y el Consejo, respecto a las solicitudes de rectificación administrativa que se realicen de manera presencial o vía remota de los registros en los que conste la inscripción de los Hechos o Actos del Estado Civil Susceptibles de Registro de las que son responsables.
- VIII. Proporcionar los informes, estadísticas e información solicitada por su superior jerárquico o por el Consejo, sobre el funcionamiento y operación de la Dirección General a su cargo, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.
- IX. Ordenar, y en su caso, autorizar, la reposición de los Libros del Registro Civil, las inscripciones, rectificaciones y anotaciones del registro de Hechos o Actos del Estado Civil Susceptibles de Registro que se deterioren, destruyan, mutilen o extravíen de las que son responsables conforme la presente Ley y demás leyes aplicables.
- X. Verificar, previo a realizar la inscripción de nacimiento de una persona en los Libros del Registro Civil, que se tiene derecho a la nacionalidad mexicana conforme lo establecido en la Constitución Política y a la Ley de Nacionalidad de acuerdo a los criterios establecidos por la Secretaría de Relaciones Exteriores.
- XI. Analizar y, en su caso, aprobar las solicitudes de inscripción extemporáneas de nacimiento y de defunción que sean solicitados a la Dirección General a su cargo, cuyos casos no estén contemplados por la normatividad que determine el Consejo, remitiendo la resolución de aprobación al Oficial de Registro Civil correspondiente, para que realice el registro respectivo.
- XII. Expedir las constancias de inexistencia de la inscripción de Hechos o Actos del Estado Civil Susceptibles de Registro que le sean solicitadas;

- XIII. Planear y coordinar la capacitación, actualización y profesionalización del personal del Registro Civil, en los términos que establece la Ley y la normativa que emita el Consejo. como parte del Servicio Profesional de Carrera de su entidad federativa.
- XIV. Autorizar y expedir constancias, extractos, actas, órdenes y copias certificadas de inscripciones, rectificaciones, anotaciones registrales y de cualquier documento que obre en el Archivo Central de su Dirección General, con base en las disposiciones que establezca el Consejo.
- XV. Representar a la Dirección General del Registro Civil en los procedimientos jurisdiccionales o administrativos en los que tenga interés jurídico.
- XVI. Elaborar y proponer a su superior jerárquico, proyectos para la apertura o reubicación de Oficialías del Registro Civil.
- XVII. Designar y separar de su cargo al personal del Registro Civil, así como al personal que integre las unidades administrativas o áreas a su cargo, de conformidad a la legislación aplicable a cada entidad federativa.
- XVIII. Expedir los acuerdos administrativos, manuales, instructivos, disposiciones generales y circulares que correspondan, a efecto de implementar los procedimientos de inscripción, registro, rectificación, anotación, reserva, cancelación o nulidad de registro, operación o funcionamiento del Registro Civil a efecto de hacer más eficiente su desarrollo y operación, con base en las disposiciones que para tal efecto establezca el Consejo.
- XIX. Proponer al titular del Poder Ejecutivo, la apertura de una Oficialía del Registro Civil en las instalaciones de la Dirección General, la cual tendrá las facultades, atribuciones y obligaciones establecidas en esta Ley.
- XX. Autorizar y designar por escrito a alguna persona funcionaria de la Dirección General del Registro Civil, para que en ausencia o en auxilio a las funciones, facultades y actividades del titular, firme la expedición de constancias, autorizaciones y copias certificadas de inscripciones,

*“2022 Año de Ricardo Flores Magón”*

rectificaciones, anotaciones registrales y de cualquier documento que obren en el Archivo Central de su Dirección General; así como cualquier otra relacionada con el desempeño de sus funciones. En caso de que no sea designada dicha persona de manera expresa, la firma por ausencia estará a cargo de la persona titular del área jurídica de la Dirección General.

XXI. Auxiliar a la Secretaría en la asignación, actualización e inactivación de la Clave Única de Registro de Población a través de la operación del SID, así como para el registro de identidad de las personas, con base en la normatividad que para tal efecto emita la Secretaría; y

XXII. Las demás que le señale la Ley y otras disposiciones aplicables.

La Dirección General del Registro Civil de cada entidad federativa para dar cumplimiento a sus facultades, determinará y establecerá las áreas, unidades administrativas, estructura y manual organizacional, y dispondrá los recursos que sean necesarios para tal efecto, así como para la correcta operación de las Oficialías del Registro Civil a su cargo.

Las facultades señaladas en este artículo podrán ser ejercidas por los Jefes de Oficinas Consulares, en lo que les resulte aplicable.

**SECCIÓN SEGUNDA**  
**OFICIALÍAS Y DE LAS PERSONAS TITULARES DE**  
**LAS OFICIALÍAS DEL REGISTRO CIVIL**

**Artículo 16.** La Dirección General del Registro Civil ejerce la función de inscripción en los Libros del Registro Civil de los Hechos o Actos del Estado Civil Susceptibles de Registro por conducto de las Oficialías del Registro Civil y de las unidades administrativas que sean establecidas para dicho fin, las cuales serán de exclusiva competencia del Poder Ejecutivo Estatal.



*“2022 Año de Ricardo Flores Magón”*

**Artículo 17.** Las entidades federativas por conducto de su Poder Ejecutivo, deben establecer en su territorio las Oficialías del Registro Civil necesarias para ejercer de forma oportuna y universal esa función, con base en lo dispuesto en la normativa que emita el Consejo y demás disposiciones aplicables.

**Artículo 18.** Las entidades federativas por conducto de su Poder Ejecutivo podrán disponer en su territorio, la habilitación temporal de la ampliación de la jurisdicción de Oficialías itinerantes del Registro Civil, que tendrán las mismas atribuciones y obligaciones señaladas en esta sección.

La ampliación referida en el párrafo anterior se regirá por los principios de eficiencia y eficacia gubernamental con base en las disposiciones que emita el Consejo.

**Artículo 19.** Cada Oficialía de Registro Civil está a cargo de una persona titular denominada Oficial del Registro Civil, servidora o servidor público dotado con fe pública en el ejercicio de la función registral para inscribir, verificar, registrar, insertar, certificar y dar publicidad a la inscripción de los Hechos o Actos del Estado Civil Susceptibles de Registro.

**Artículo 20.** Las personas titulares de las Oficialías del Registro Civil deben cumplir con los requisitos siguientes:

- I. Ser de nacionalidad mexicana.
- II. Contar con título y cédula profesional de por lo menos estudios superiores en ciencias sociales o afines y práctica profesional de por lo menos de dos años.
- III. No estar en el supuesto de suspensión, destitución o inhabilitación por resolución firme como persona servidora pública en términos de las leyes aplicables.
- IV. Estar en el pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos.
- V. No estar purgando penas por delitos dolosos, y

VI. No ser ministro de algún culto religioso.

**Artículo 21.** Las personas titulares de las Oficialías del Registro Civil deben cumplir con los criterios de reclutamiento, selección, capacitación, actualización y profesionalización que emita el Consejo, a través del Servicio Profesional de Carrera establecido en cada entidad federativa.

**Artículo 22.** Corresponde a las personas titulares de las Oficialías del Registro Civil:

- I. Realizar la inscripción en los Libros del Registro Civil de los Hechos o Actos del Estado Civil Susceptibles de Registro de las personas, previo cumplimiento de los requisitos que para tal efecto determine el Consejo y extender las Actas relativas a los mismos.
- II. Integrar y custodiar los Libros del Registro Civil en formato físico y/o electrónico del Registro Civil que correspondan, así como remitir a la Dirección General del Registro Civil el Libro del Registro Civil duplicado exacto de la inscripción de los Hechos o Actos del Estado Civil Susceptibles de Registro de las personas que realice, con base en el procedimiento que determine el Consejo.
- III. Custodiar los Formatos Únicos en materia de registro de población, archivos, sellos oficiales, bases de datos, documentos del apéndice y demás acciones necesarias para el desempeño de sus funciones. En caso de extravío, pérdida, destrucción o robo de los Libros del Registro Civil, registros, Actas y apéndices, se deberá realizar la denuncia ante la autoridad correspondiente en cada entidad federativa e informarlo de manera inmediata a la Dirección General del Registro Civil de su entidad federativa.
- IV. Expedir las Actas de las inscripciones que obran en los Libros del Registro Civil en el Formato Único de Actas al que hace referencia la presente Ley.
- V. Expedir las copias certificadas de los documentos del apéndice correspondiente, cuando le fueren solicitadas y se paguen los derechos

*“2022 Año de Ricardo Flores Magón”*

respectivos establecidos en la normativa aplicable a cada entidad federativa.

- VI. Fijar en lugar visible de la Oficialía del Registro Civil la copia del apartado específico, de las gacetas o periódicos oficiales en cada entidad federativa según corresponda, en donde se prevén los derechos que se pagarán por los servicios que presta el Registro Civil
- VII. Contestar en tiempo y forma, las demandas interpuestas en su contra en el ámbito de sus atribuciones y notificar por escrito y de manera oportuna a la Dirección General del Registro Civil.
- VIII. Organizar el despacho de su oficina de tal forma que toda inscripción y tramitación de los servicios que brinda la Oficialía sean oportunos, eficientes; y se ajusten a las disposiciones normativas aplicables.
- IX. Orientar al público sobre la trascendencia de la inscripción de los Hechos o Actos del Estado Civil Susceptibles de Registro, e informar sus requisitos.
- X. Elaborar los índices alfabéticos de los registros de la Oficialía del Registro Civil a su cargo, en tanto las Oficialías no cuenten con el SID.
- XI. Expedir las constancias de inexistencia de la inscripción de los Hechos o Actos del Estado Civil Susceptibles de Registro que le sean solicitadas, previa comprobación de que el registro respectivo no obre en la Oficialía del Registro Civil a su cargo, en el Archivo Central de la Dirección General del Registro Civil y no se encuentre en la Base de Datos Nacional del Registro Civil a la que refiere la Ley.
- XII. Indicar de manera verbal, a quienes soliciten la inscripción del nacimiento de una persona en las Oficialías del Registro Civil en territorio nacional o en el exterior, que el nombre propio será elegido libremente, instándoles que es ampliamente recomendable para el pleno desarrollo de la persona, no incluir más de dos nombres simples o uno compuesto; evitar asentar abreviaturas, diminutivos, claves, números y adjetivos que puedan denigrar a la persona registrada, o cuando resulte impropio, denostador

*“2022 Año de Ricardo Flores Magón”*

o cause afrenta o bien, sean denigrantes o peyorativos, ya sea por su rareza, peculiaridad o dificultad en su emisión y articulación.

- XIII. Elaborar y proporcionar informes, estadísticas e información, sobre el funcionamiento y operación de la oficialía a su cargo, que le sean solicitados por la Dirección General del Registro Civil de la entidad federativa que corresponda.
- XIV. Cumplir con las resoluciones y normatividad que emita la Dirección General del Registro Civil.
- XV. Verificar en el SID, previo a la inscripción del Hecho o Acto del Estado Civil Susceptible de Registro, que no exista otra inscripción que lo imposibilite, y validar la filiación, sin importar la prelación de los apellidos.
- XVI. Consultar a la Dirección General del Registro Civil de su entidad federativa, cuando para la inscripción de los nacimientos exista duda sobre el derecho a la nacionalidad mexicana de la persona a ser registrada, a través de los mecanismos que determine la Dirección General del Registro Civil.
- XVII. Hacer del conocimiento del Archivo Central la inscripción, rectificación y anotación de los registros de los Hechos y Actos del Estado Civil Susceptibles de Registro.
- XVIII. Cumplir cabalmente con la normatividad que emita el Consejo, y
- XIX. Las demás que establezca la Ley y otras disposiciones aplicables.

Las facultades señaladas en este artículo podrán ser ejercidas por los Jefes de Oficinas Consulares, en lo que les resulte aplicable.

**SECCIÓN TERCERA**  
**DE LOS JEFES DE LA OFICINA CONSULAR CON**  
**FUNCIONES EN MATERIA DE REGISTRO CIVIL.**



*“2022 Año de Ricardo Flores Magón”*

**Artículo 23.** Para el registro de las personas mexicanas domiciliadas en el extranjero, el Jefe de la Oficina Consular, ejercerá las funciones de Oficial del Registro Civil, con base en lo previsto en la presente ley, la Ley del Servicio Exterior Mexicano, su reglamento y demás disposiciones jurídico- administrativas aplicables.

**Artículo 24.** La Secretaría de Relaciones Exteriores asentará en el SID, la inscripción de los Hechos o Actos del Estado Civil Susceptibles de Registro, respecto de los que ejerza funciones de Oficial del Registro Civil, con base en lo dispuesto en esta Ley y la normatividad que emita el Consejo que le sea aplicable.

**Artículo 25.** Los Jefes de Oficina Consular serán competentes para atender y resolver, previo el pago de las contraprestaciones federales que se determine para tal efecto, las solicitudes de rectificación administrativa de las personas mexicanas domiciliadas en el extranjero, cuyo registro se haya inscrito en las Oficialías del Registro Civil del país, con base en el procedimiento que establezca el Reglamento y las disposiciones que emita el Consejo.

## SECCIÓN CUARTA

### DEL CONSEJO NACIONAL DEL REGISTRO CIVIL

**Artículo 26.** El Consejo es el órgano de coordinación interinstitucional para la operación de la organización, el funcionamiento y los procedimientos de los Registros Civiles en los Estados Unidos Mexicanos.

El Consejo tendrá por objeto establecer los acuerdos, normas, planes, programas, políticas, bases generales, lineamientos, manuales, reglas, instructivos, procedimientos y demás disposiciones de carácter general y obligatorio, que permitan operación de la organización y el funcionamiento de los Registros Civiles, así como en lo conducente y conforme a su normativa aplicable, de las Oficinas Consulares de México, en el ejercicio de su función de Oficial de Registro Civil en el exterior.



*“2022 Año de Ricardo Flores Magón”*

**Artículo 27.** Las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales en la Ciudad de México y las Oficinas Consulares de México, adoptarán e implementarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, las decisiones que determine el Consejo.

El Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría a través del Coordinador Nacional del Consejo, publicará en el Diario Oficial de la Federación la normatividad que emita el Consejo, así como las demás disposiciones que sean necesarias para dar cumplimiento con lo previsto en esta Ley.

**Artículo 28.** El Consejo está integrado por:

- I. Un representante de la Secretaría, con un nivel mínimo de Director General, que lo presidirá, coordinará y a quien se le denominará Coordinador Nacional.
- II. Un representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con un nivel mínimo de Director General, y
- III. Los titulares de las Direcciones Generales del Registro Civil de las entidades federativas.

Las personas integrantes del Consejo deben nombrar a sus respectivos suplentes, los cuales deben contar con el nivel jerárquico inmediato inferior.

Las personas que integran el Consejo tendrán voz y voto y están obligadas, en el marco de sus competencias, a cumplir con las acciones que deriven del ejercicio de las atribuciones de dicho órgano.

**Artículo 29.** El Consejo contará con una Secretaría Técnica a cargo de la persona servidora pública que designe la Secretaria, por conducto del titular de la Dirección General que lo presida.

*“2022 Año de Ricardo Flores Magón”*

La Secretaría Técnica contará con las siguientes atribuciones:

- I. Asesorar y coordinar las actividades necesarias para el desarrollo de las reuniones que celebre el Consejo.
- II. Convocar a reunión del Consejo y elaborar el respectivo orden del día.
- III. Rendir por escrito, los informes que le sean solicitados por el Consejo.
- IV. Elaborar la minuta y dar seguimiento a los acuerdos de las reuniones que se realicen.
- V. Coadyuvar en el diseño de los instrumentos de comunicación que deben difundirse.
- VI. Coordinarse con las dependencias y entidades de la Administración Pública, para el cumplimiento de las obligaciones que señala la Ley y las disposiciones aplicables, así como colaborar con las instancias respectivas en las sanciones a presuntos actos de corrupción detectados en el ejercicio de las funciones del registro civil.
- VII. Recoger y computar los votos de los miembros del Consejo.
- VIII. Establecer las políticas de trabajo del Consejo.
- IX. Auxiliar al Coordinador Nacional del Consejo en el procedimiento administrativo que haya a lugar para la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la normatividad que emita el Consejo, y
- X. Las demás que le sean asignadas por el Consejo.

**Artículo 30.** El Consejo sesionará válidamente con la presencia de la mayoría de sus integrantes y sus resoluciones deben ser tomadas por mayoría de votos. En caso de empate, el Coordinador Nacional del Consejo tiene voto de calidad.

*“2022 Año de Ricardo Flores Magón”*

**Artículo 31.** El Consejo debe celebrar sesiones de manera ordinaria, por lo menos, una vez al año, por convocatoria de quien presida la Secretaría Técnica, por instrucción de su Coordinador Nacional.

El Consejo determinará los temas y el procedimiento que deberá llevarse a cabo para sesionar de manera ordinaria y aquellos que impliquen convocar a una sesión extraordinaria.

El Consejo celebrará reuniones regionales, cuando así lo requiera para el ejercicio de sus atribuciones

Las convocatorias deben ser realizadas por oficio o por cualquier medio electrónico que dé constancia de su recepción, con al menos quince días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la sesión, y ocho días hábiles de anticipación en el caso de sesiones extraordinarias y reuniones regionales. Las convocatorias deben acompañarse por el correspondiente orden del día.

**Artículo 32.** El Consejo tiene las siguientes atribuciones:

- I. Establecer acciones estratégicas para fomentar el Registro Universal y Oportuno.
- II. Diseñar acciones para evaluar, modernizar, profesionalizar y procurar la mejora continua de los servicios del Registro Civil que se presten a los particulares.
- III. Establecer los criterios y procedimientos para la interpretación de los documentos normativos en materia registral que emita el Consejo.
- IV. Emitir lineamientos para homologar los requisitos, procesos y mecanismos para la inscripción y certificación de los registros de los Hechos y Actos del Estado Civil Susceptibles de Registro, así como para la prestación de sus demás servicios, salvo en materia de nacionalidad mexicana, en cuyo caso, deberá seguir los lineamientos señalados por la

*“2022 Año de Ricardo Flores Magón”*

Secretaría de Relaciones Exteriores, conforme a la Ley de Nacionalidad y la normatividad aplicable.

- V. Determinar los contenidos del modelo de Formato Único en materia de registro de población, así como de las medidas de seguridad físicas y/o electrónicas que someta a su consideración la Secretaría.
- VI. Emitir la normativa que regule la operación y funcionamiento del Registro Civil.
- VII. Emitir la normativa para fines administrativos, que regule la operación y funcionamiento de las Oficialías y archivos del Registro Civil.
- VIII. Emitir la normatividad que regule los procesos de rectificación de los registros de los Hechos o Actos del Estado Civil Susceptibles de Registro contenidos en los Libros del Registro Civil, con base en lo dispuesto en la Ley.
- IX. Definir, mediante la normativa que emita para tal efecto, los métodos y criterios para el reclutamiento, selección, capacitación, actualización y profesionalización de las personas titulares de las Oficialías del Registro Civil y demás personal del Registro Civil, de conformidad con lo dispuesto en la Ley y demás disposiciones aplicables, que se implementarán en el Servicio Profesional de Carrera que establezca, administre y opere cada entidad federativa.
- X. Establecer mecanismos para el intercambio de información sobre los Hechos o Actos del Estado Civil Susceptibles de Registro.
- XI. Emitir el estatuto interno para su organización y funcionamiento.
- XII. Conocer y difundir los posibles casos de conflicto internacional en materia de reconocimiento de Estados y disputas territoriales que presente la Secretaría de Relaciones Exteriores, a fin de emitir las disposiciones necesarias para que las Oficialías del Registro Civil en territorio nacional realicen la inscripción de los Hechos o Actos del Estado Civil Susceptibles de Registro de conformidad con el derecho internacional que sea reconocido por México.

- XIII. Instrumentar las medidas necesarias que permitan vigilar el cumplimiento de la normatividad que emita el Consejo, así como la corrección de posibles fallas en colaboración con las autoridades competentes, y
- XIV. Las demás que establezca la Ley, otras disposiciones aplicables y las que el propio Consejo determine para el cabal cumplimiento de esta legislación y de los principios que deben regir la función registral.

### TITULO TERCERO

#### DE LAS HERRAMIENTAS DEL REGISTRO CIVIL E IDENTIDAD

#### CAPÍTULO I

#### DEL FORMATO ÚNICO EN MATERIA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

**Artículo 33.** El Formato Único en materia de Registro de Población es el formato para la inscripción en Libros del Registro Civil de los Hechos o Actos del Estado Civil Susceptibles de Registro y con base en el mismo, expedir las Actas.

**Artículo 34.** El Formato Único en materia de Registro de Población es emitido por la Secretaría, previo acuerdo del Consejo, el cual debe asentar la información en español, así como en lenguas indígenas de las que se disponga, y sea solicitada de manera expresa por la persona registrada o quien tenga derecho a solicitarla.

**Artículo 35.** El Formato Único en materia de Registro de Población tendrá dos modalidades:

- I. Formato Único de Inscripción: para la inscripción en Libros del Registro Civil de los Hechos y Actos del Estado Civil Susceptibles de Registro, y
- II. Formato Único de Actas: para la expedición de las Actas.

## SECCIÓN PRIMERA

### FORMATO ÚNICO DE INSCRIPCIÓN.

**Artículo 36.** El Formato Único de Inscripción contiene los apartados necesarios para que esté debidamente inscrito el Hecho o Acto del Estado Civil Susceptible de Registro que corresponda, que permita su localización, inscripción y almacenamiento, en términos de lo que disponga la normativa que para tal efecto emita el Consejo.

Para realizar la inscripción de los hechos relativos al nacimiento y a la defunción de una persona, necesariamente deberá requerirse la presentación física o electrónica, según corresponda, de los certificados de nacimiento y defunción que emite la Secretaría de Salud, dentro del plazo que determina esta Ley y demás disposiciones aplicables.

Para disponer de un cadáver, su traslado o para autorizar su destino final, sin excepción alguna, debe existir previamente el registro de la defunción y la expedición del Acta correspondiente por parte del Registro Civil.

Los datos mínimos que deba tener cualquier inscripción en Libros del Registro Civil son:

- I. Los datos administrativos de registro, tales como año, libro, número de acta, entidad federativa, municipio, localidad y Oficialía de registro.

El valor numérico para el registro de entidades federativas, municipios y localidades se obtendrá del Catálogo Único de Claves Geo estadísticas para Entidades, Municipios y Localidades que emite y actualiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Los datos administrativos de registro de las inscripciones realizadas en las Oficinas Consulares de México, que correspondan al país y lugar de

*“2022 Año de Ricardo Flores Magón”*

registro, se sujetará a lo dispuesto en la normatividad que para tal efecto emita la Secretaría de Relaciones Exteriores, que sea consistente con el SID.

II. Los datos de identidad de la o las personas inscritas, tales como:

- a. Nombre o nombres.
- b. Apellido o Apellidos, según corresponda.
- c. Sexo y género en los términos y variantes que establezca el Consejo.
- d. Lugar y fecha de nacimiento.
- e. Nacionalidad o nacionalidades, según corresponda.
- f. Clave Única de Registro de Población, y
- g. Datos biométricos en los términos que establezca la Ley General de Población, conforme al procedimiento y disposiciones que emita la Secretaría.

Para el caso de la inscripción del nacimiento, siempre y cuando se trate del primer hijo, los apellidos se asentarán en el orden de prelación que las madres, padres o personas que detenten la filiación o patria potestad determinen de común acuerdo, el cual corresponderá sola y exclusivamente al primero o al segundo de sus apellidos, sin posibilidad de crear apellidos compuestos o que se inscriban más de dos apellidos simples. El orden de los apellidos determinado se mantendrá para el resto de las demás hijas e hijos que tengan los mismos datos de filiación.

En caso de que las madres, padres o personas que detenten la filiación o patria potestad no lleguen a un acuerdo sobre el orden de los apellidos, la persona titular de la Oficialía del Registro Civil determinará el orden de los mismos con base en un criterio de paridad y de no discriminación en los casos en los cuales deba decidir, preservando lo dispuesto en el párrafo anterior para evitar la creación de apellidos compuestos.

Para la inscripción o inserción de nacimiento de madre o, padre soltero conforme a los supuestos que así determine el Consejo, se incluirán los dos apellidos de la madre o del padre, registrándose en el campo del

*“2022 Año de Ricardo Flores Magón”*

primer y segundo apellido que corresponda, evitando generar en el primer campo un apellido compuesto. En el caso de que exista un solo apellido, éste deberá capturarse invariablemente como primer apellido. En caso de que por usos o costumbres de sus sistemas normativos no existan apellidos que deban ser inscritos, el espacio que corresponda se dejará en blanco, haciéndose la anotación que corresponda que de fe de la inexistencia de apellidos.

Para el caso de los nacimientos ocurridos en el exterior, la inscripción que realicen las Oficinas Consulares de México o la inserción que realicen las Oficialías del Registro Civil, según corresponda, deberán inscribir y asentar el nombre o nombres y el apellido o apellidos conforme a la normatividad, usos o costumbres del país de que se trate, a fin de evitar que se genere una segunda identidad jurídica.

Si la persona registrada o quien tenga derecho a solicitar la inscripción de Hechos o Actos del Estado Civil Susceptible de Registro cuenta con el reconocimiento de otra u otras nacionalidades adicionales a la mexicana, deberá declararlo y comprobarlo al momento de realizar dicha inscripción a efecto de que sean asentadas en el Formato Único de Inscripción, conforme al procedimiento que emita el Consejo, siendo en todo momento la nacionalidad mexicana la primera que quedará inscrita.

- III. Los datos particulares del hecho o acto que sea inscrito, incluyendo los datos de filiación cuando proceda.
- IV. El fundamento jurídico y las anotaciones que correspondan, y
- V. Nombre, cargo y firma de quien realiza y da fe de la inscripción del Hecho o Acto del Estado Civil Susceptible de Registro, la cual podrá ser autógrafa, digital, electrónica y/o contener sello físico o digital.

**SECCIÓN SEGUNDA**  
**FORMATO ÚNICO DE ACTAS**



*“2022 Año de Ricardo Flores Magón”*

**Artículo 37.** El Formato Único de Actas es el formato para la expedición del Acta que corresponda con el Hecho o Acto del Estado Civil Susceptible de Registro que haya sido inscrito en los Libros del Registro Civil.

**Artículo 38.** Los datos mínimos que debe contener cualquier Acta son:

- I. Los datos administrativos de registro que correspondan.
- II. Los datos de la o las personas inscritas:
  - a. Nombre o nombres.
  - b. Apellido o Apellidos.
  - c. Género en las Actas que así lo apruebe el Consejo.
  - d. Lugar y fecha de nacimiento.
  - e. Nacionalidad o nacionalidades según corresponda, y
  - f. Clave Única de Registro de Población.
- III. El tipo de Acta que corresponda respecto del hecho o acto del estado civil inscrito en los Libros del Registro Civil; así como los demás datos que apruebe para cada Acta el Consejo.
- IV. El fundamento jurídico y las anotaciones que correspondan, y
- V. La firma de quien certifica el hecho o el acto, la cual podrá ser autógrafa, digital, electrónica y/o contener sello físico o digital.

**Artículo 39.** Los registros que obren en la Base de Datos Nacional del Registro Civil se expedirán en las Actas, de manera física en las Direcciones General del Registro Civil, Oficialías del Registro Civil y Oficinas Consulares de México sin importar la entidad federativa o país donde se haya realizado la inscripción y por medios electrónicos a través de las plataformas que para tal efecto ponga a disposición la Secretaría.

La Dirección General de cada Registro Civil podrá establecer dentro de su territorio, así como en la jurisdicción que corresponda a las Oficinas Consulares de México, a disposición del público en general, módulos fijos e itinerantes para expedir Actas de los hechos o actos del estado civil que obren en la Base de Datos Nacional de Registro Civil.

**Artículo 40.** Las Actas que se transmitan por medios físicos o electrónicos se expedirán en papel bond, no tendrán vigencia, ni fecha de expiración para su uso y deberán ser aceptadas por cualquier autoridad mexicana, sin necesidad de legalización o apostilla, independientemente de si su expedición fue hecha en territorio nacional o en alguna Oficina Consular de México.

**Artículo 41.** Las Actas previa solicitud en las Oficialías del Registro Civil en territorio nacional pueden expedirse en la lengua indígena del solicitante que se encuentre disponible y preservará los nombres, apellidos ancestrales y tradicionales, conforme a sus sistemas normativos.

Para los efectos del párrafo anterior, el Consejo debe auxiliarse de la autoridad federal que corresponda o de los institutos u organismos equivalentes en las entidades federativas para expedir las Actas en la lengua indígena de que se trate, con base en las especificaciones que establezca el Consejo.

Las Actas podrán expedirse en sistema Braille para personas en situación de discapacidad visual, con base en las especificaciones que establezca el Consejo.

## CAPÍTULO II

### DEL SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO E IDENTIDAD

**Artículo 42.** El SID es la herramienta informática administrada por la Secretaría, que permite la inscripción y la certificación de los Hechos o Actos del Estado Civil Susceptibles de Registro asentados por las personas titulares de las Oficialías en los Libros del Registro Civil, la gestión de la Clave Única de Registro de Población y la vinculación de los datos biométricos a los que se refiere la Ley General de Población de las personas registradas.

**Artículo 43.** Toda inscripción, inserción, rectificación o anotación que acredite el registro de los Hechos o Actos del Estado Civil Susceptibles de Registro se realizará en el SID.

*“2022 Año de Ricardo Flores Magón”*

**Artículo 44.** Las personas titulares de las Oficialías del Registro Civil suministrarán a las Direcciones Generales del Registro Civil, a través del SID la información derivada de las inscripciones, rectificaciones o anotaciones.

**Artículo 45.** Las Direcciones Generales de Registro Civil, así como las Oficinas Consulares podrán consultar la información contenida en el SID, mediante el procedimiento que determine la Secretaría.

**Artículo 46.** La Secretaría establecerá los mecanismos y requisitos para que las dependencias y entidades del sector público, sector privado y financiero, puedan consultar y validar electrónicamente la información de los registros y datos contenidos en el SID, a través de la consulta a la Base de Datos Nacional del Registro Civil. El resultado de dicha consulta tendrá validez y pleno valor probatorio para acreditar plenamente el registro del hecho o acto del estado civil de las personas de que se trate.

En caso de existir inconsistencia entre la consulta y los datos contenidos en el Acta física que se pretenda validar, prevalecerán los datos e información que refleje el resultado de la consulta electrónica, el cual deberá ser corroborado con el registro que obre en los Libros del Registro Civil a fin de acreditar plenamente el registro del hecho o acto del estado civil de las personas de que se trate, con base al procedimiento que para tal fin establezca el Consejo.

#### TÍTULO CUARTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL REGISTRO CIVIL

**Artículo 47.** El Registro Civil inscribe y certifica Hechos o Actos del Estado Civil Susceptibles de Registro.

Los diversos procedimientos con relación a los Hechos o Actos del Estado Civil Susceptibles de Registro serán regulados de conformidad con el Manual General de Procedimientos que apruebe el Consejo.

**Artículo 48.** El Registro Civil realizará sus inscripciones bajo dos criterios:

- I. Hechos del estado civil que crean o modifican la identidad de la persona,  
o
- II. Actos que crean, modifican o extinguen el parentesco consanguíneo o civil de la persona.

**Artículo 49.** Los servicios que presta el Registro Civil son públicos.

Las personas titulares de las Oficialías del Registro Civil deben permitir a quienes lo soliciten conforme lo establecido en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de sujetos Obligados y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, enterarse de los apéndices de los Hechos o Actos del Estado Civil Susceptibles de Registro, conforme al procedimiento que establezca el Consejo y demás disposiciones aplicables.

Asimismo, deben expedir al solicitante, que cumpla con los requisitos que para este fin se establezcan por el Consejo y demás disposiciones aplicables, las Actas y copias certificadas de las constancias que figuren en los archivos, apéndices y en el SID.

## **CAPÍTULO I**

### **DE LAS SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN**

**Artículo 50.** Las personas titulares de las Oficialías del Registro Civil sólo podrán inscribir aquellos Hechos o Actos del Estado Civil Susceptibles de Registro de acuerdo a la jurisdicción y circunscripción territorial establecida por la entidad federativa de la que dependan.

Los Jefes de Oficinas Consulares podrán inscribir aquellos Hechos o Actos del Estado Civil Susceptibles de Registro, sin restricción territorial, en términos de lo dispuesto en la Ley del Servicio Exterior Mexicano y su Reglamento, así como las

*“2022 Año de Ricardo Flores Magón”*

disposiciones jurídico administrativas aplicables que emita la Secretaría de Relaciones Exteriores.

**Artículo 51.** El Consejo establecerá el procedimiento y requisitos para realizar las solicitudes de inscripción en los Libros del Registro Civil de los Hechos y Actos del Estado Civil Susceptibles de Registro para su registro oportuno y para los que se realicen fuera de dichos plazos.

Para el caso de las personas integrantes de las comunidades indígenas o afroamericanas y de grupo en situación de especial vulnerabilidad y marginación, el Consejo deberá establecer la normatividad que facilite y acerque los servicios registrales que garanticen que toda persona cuente con la debida inscripción de los hechos o actos de su estado civil.

Para tal efecto, las Oficialías del Registro Civil deberán disponer de lo necesario para que su atención sea acorde a la situación de dichas personas, promoviendo y haciendo valer en todo el proceso de inscripción, los principios de igualdad y no discriminación.

**Artículo 52.** La inscripción del registro del estado civil puede pedirse por quien acredite tener interés jurídico del hecho o acto del estado civil que se va a inscribir, o en su caso por la autoridad judicial que declare creado, modificado o extinguido algún hecho u acto del estado civil, conforme al procedimiento que establezca la normativa que emita el Consejo y demás disposiciones aplicables, previo el pago de las contraprestaciones correspondientes.

**Artículo 53.** Los Hechos o Actos del Estado Civil Susceptibles de Registro adquiridos o celebrados en el extranjero por personas mexicanas podrán ser inscritos ante las Oficialías del Registro Civil, para lo cual, las personas que acrediten tener interés jurídico, deberán presentar las actas o documentos en que se haga constar el hecho o acto del estado civil de que se trate y sólo se realizará la inserción si son compatibles conforme a lo dispuesto en la legislación civil correspondiente de la entidad federativa.



*“2022 Año de Ricardo Flores Magón”*

**Artículo 54.** No se estará sujeto a las normas y procedimientos sobre la legalización o apostilla de las Actas, partidas o documentación análoga expedida por otro país respecto al registro de los hechos o actos del estado civil de las personas adquiridos o celebrados en otro país, cuando sea posible su verificación de forma electrónica con la autoridad competente en el extranjero para acreditar la validez de los mismos y se obtenga el acuse correspondiente. Para tal efecto, el Coordinador Nacional del Consejo, con base en la normatividad aplicable, impulsará los mecanismos de verificación con otros países.

Los acuerdos interinstitucionales que sean suscritos con las autoridades competentes del país de que se trate para los fines descritos en el presente artículo, deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación.

Para el caso específico de la inscripción o inserción del registro de nacimiento de una persona con derecho a la nacionalidad mexicana, no se estará sujeto a las normas y procedimientos sobre la legalización o apostilla de la documentación que sea necesaria para realizar dicha inscripción. El Consejo deberá emitir el procedimiento y los requerimientos necesarios para dicho fin, priorizando únicamente la verificación que en su caso, pueda realizarse vía electrónica conforme lo dispuesto en el párrafo anterior.

**Artículo 55.** Los Hechos o Actos del Estado Civil Susceptibles de Registro que consten en sentencias dictadas en el extranjero sólo se registrarán si son acordes con las leyes mexicanas o si la autoridad judicial competente ordena su compatibilidad.

**Artículo 56.** Para realizar la inscripción del hecho o acto del estado civil que correspondan, deberán seguirse los siguientes criterios:

- I. Se deberá asentar una inscripción por persona en los casos de parto múltiple.
- II. Antes de realizarse la inscripción de un hecho o acto del estado civil debe cerciorarse que la persona no cuenta con una inscripción anterior del

*“2022 Año de Ricardo Flores Magón”*

mismo hecho o acto para evitar que existan dos registros para una misma persona.

- III. No se podrá asignar más de una CURP por persona, bajo el principio de que no deben existir dos registros de nacimiento válidos y vigentes a favor de una misma persona.
- IV. No se deberá asentar en las inscripciones calificativos infamantes que estigmaticen a la persona registrada, tales como: hijo ilegítimo, natural, fuera de matrimonio, de padre desconocido.
- V. Previo a la inscripción de la defunción, deberá realizarse la inscripción del nacimiento, excepto en los casos de muerte fetal y en aquellos en donde el Consejo de manera particular así lo determine.

## **CAPÍTULO II**

### **DE LAS RECTIFICACIONES**

**Artículo 57.** La rectificación es el procedimiento que se realiza ante las Direcciones Generales, Oficialías del Registro Civil y en las Oficinas Consulares de México en el exterior o en su caso, ante la autoridad judicial competente, sin importar el lugar o entidad federativa en la que se haya realizado la inscripción del Hecho o Acto del Estado Civil susceptible de Registro, que enmienda un error, aclara, modifica o anula una inscripción o, complementa información faltante y necesaria para un registro, en cualquiera de los datos que la integren.

**Artículo 58.** La rectificación es administrativa o judicial.

La rectificación es administrativa cuando enmienda, aclara, complementa, modifica, cancela o anula una inscripción en cualquiera de los datos que la integren, tales como, de manera enunciativa más no limitativa: datos de registro, datos de identidad de las personas inscritas, como el nombre, apellidos, sexo, género, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad y filiación, datos relativos al hecho o acto del estado civil de que se trate.

*“2022 Año de Ricardo Flores Magón”*

Como resultado de dicha rectificación, no se deberá realizar una nueva inscripción ni expedir una nueva Acta, sino rectificar el registro primigenio y emitirse el Acta con el dato rectificado, incluida la CURP que le corresponda.

La rectificación es judicial cuando complementa información faltante y necesaria para un registro que implique crear o modificar la filiación de una persona.

**Artículo 59.** Las Direcciones Generales de Registro Civil deberán establecer mecanismos para permitir que las personas que se encuentren en territorio nacional soliciten la rectificación administrativa de los registros del estado civil vía remota, siempre y cuando comprueben su interés jurídico e identidad conforme lo establecido en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de sujetos Obligados y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en términos de lo previsto en el Reglamento, la normatividad que emita el Consejo y demás disposiciones aplicables.

**Artículo 60.** El procedimiento, requisitos y contenido de las resoluciones administrativa será establecido en la normativa que emita el Consejo.

Cualquier rectificación que se realice deberá estar reflejada inmediatamente en la inscripción contenida en los Libros del Registro Civil, y deberá expedirse en las Actas que correspondan y en la consulta electrónica que permita el SID.

**Artículo 61.** Los datos rectificados en las inscripciones del Registro Civil deberán hacerse constar necesariamente en los campos que le correspondan del Formato Único de Inscripción en el SID y en las Actas que se expidan, relacionándose con la anotación que le dio origen, a efecto de que las inscripciones y las Actas se encuentren permanentemente actualizadas y se refleje con claridad los datos que hayan sido rectificados.

**Artículo 62.** Las entidades federativas por conducto de la Dirección General del Registro Civil correspondiente, garantizarán la calidad de los registros y proporcionarán servicios para su rectificación, previo el pago de las contraprestaciones que correspondan.



### CAPÍTULO III DE LAS ANOTACIONES

**Artículo 63.** Son objeto de anotaciones, en las inscripciones y en las Actas del Registro Civil, los hechos y actos jurídicos que los modifiquen, las cuales deben realizarse siempre bajo el principio de prelación.

**Artículo 64.** El registro será realizado mediante el asentamiento de la anotación del hecho u acto que corresponda en el Formato Único de Inscripción de que se trate, el cual deberá cumplimentar la totalidad de los campos que la integran.

**Artículo 65.** Toda resolución que enmiende un error, aclare, modifique, cancele o anule una inscripción o, complemente información faltante y necesaria para un registro, ordenara anotar en el Acta de la inscripción de los Hechos o Actos del Estado Civil Susceptibles de Registro el sentido de la rectificación.

**Artículo 66.** El Consejo deberá emitir la normatividad que establezca los casos y las condiciones en las que se podrá realizar, de manera exclusiva por la entidad federativa en donde se haya realizado la inscripción del hecho o acto del estado civil de que se trate, la cancelación, nulidad o reserva administrativa de un registro. En ningún caso la autoridad de una entidad federativa podrá ordenar la cancelación, nulidad o reserva de un acta del estado civil de otra entidad federativa o aquellas expedidas en las Oficinas Consulares de México, salvo por mandato judicial.

**Artículo 67.** Las anotaciones deben asentarse conforme lo determine la normativa que al efecto emita el Consejo.

**Artículo 68.** El Consejo determinará aquellos casos en que no se realice anotación en las Actas del registro de los Hechos o Actos del Estado Civil Susceptibles de Registro.

**TITULO QUINTO**  
**DE LAS RESPONSABILIDADES Y DE LAS SANCIONES**

**CAPÍTULO ÚNICO**

**Artículo 69.** Los actos u omisiones que impliquen el incumplimiento a las disposiciones establecidas en la presente Ley y demás aplicables en la materia, serán sancionados de conformidad con lo previsto en el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de las constituciones de las entidades federativas, y de lo previsto en la legislación sobre responsabilidades administrativas y penales de servidores públicos, según corresponda.

**Artículo 70.** Se sancionará administrativamente como infracción grave, a las y los servidores públicos en los términos de la legislación en materia de responsabilidades administrativas aplicable, en cualquiera de los supuestos siguientes:

- I. Que inscriba un registro de cualquier Hecho o Acto del Estado Civil Susceptible de Registro sin que se cumplan los requisitos establecidos para ello o que no correspondan con la inscripción de que se trate.
- II. Que emita un Acta del Registro Civil o copias certificadas de ésta, que no corresponda en su integralidad y totalidad a un registro debidamente inscrito en los Libros del Registro Civil.
- III. Que eliminen o desaparezcan un registro de cualquier Hecho o Acto del Estado Civil Susceptible de Registro.
- IV. A quien elabore, altere, esconda, sustraiga, o haga aparentar como verdadero un documento o información relativa a las inscripciones de los Hechos y Actos del Estado Civil Susceptibles de Registro, de manera

*“2022 Año de Ricardo Flores Magón”*

directa o que los datos de una persona se hagan pasar por los datos de otra.

- V. Den de alta, alteren o eliminen, en cualquier forma, sin cumplir los requisitos establecidos en la normatividad que corresponda, los datos personales contenidos en la inscripción de los Hechos o Actos del Estado Civil Susceptibles de Registro, en las Actas y en el Sistema.
- VI. A quien sabedor de que existe el registro de un Hecho o Acto del Estado Civil Susceptible de Registro ya inscrito en los Libros del Registro Civil, vuelva a inscribir el mismo Hecho o Acto del Estado Civil para una misma persona; ya sea con los mismos datos o con datos diferentes.
- VII. Asignen una CURP a personas que no tengan derecho a ella, o no la asignen a quien si tenga derecho.
- VIII. Impidan o alteren el funcionamiento, datos y registros contenidos del SID, o accedan al mismo sin autorización, y
- IX. Sin estar autorizados, den a conocer información de carácter confidencial.

Las sanciones administrativas a que se refiere este artículo se impondrán y exigirán con independencia de las responsabilidades de carácter penal o civil que, en su caso, lleguen a determinarse por las autoridades competentes.

## TRANSITORIOS

**PRIMERO.** El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

**SEGUNDO.** El Ejecutivo Federal deberá emitir el Reglamento en un plazo no mayor a un año, contado a partir de su entrada en vigor.

**TERCERO.** Se derogan las disposiciones que contravengan lo dispuesto por la Ley.

*“2022 Año de Ricardo Flores Magón”*

**CUARTO.** Dentro del año posterior a la publicación del Reglamento al que hace referencia el segundo de los transitorios, el Congreso de la Unión y los Congresos de las entidades federativas deberán expedir las reformas necesarias al Código Civil Federal y a normatividad que corresponda a los registros civiles locales respectivamente. En tanto no se realicen las reformas antes mencionadas, los procedimientos continuarán realizándose con base en las disposiciones de la normatividad federal y local que corresponda, que se encuentre vigente a la fecha de la entrada en vigor de la Ley.

**QUINTO.** Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, se cubrirán con los recursos que de manera ordinaria apruebe la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal de que se trate.

Las legislaturas de las entidades federativas, en los términos de la legislación aplicable, deberán destinar de sus recursos propios, aquellos que sean necesarios para el cumplimiento de las obligaciones que les competen en términos del presente Decreto.

**SEXTO.** El Consejo debe quedar conformado en un periodo no mayor a un año, posterior a la entrada en vigor de la Ley.

**SÉPTIMO.** Dentro del año posterior a su conformación, el Consejo deberá emitir la normativa que refieren las fracciones IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XI del artículo 32 de la presente Ley.

**OCTAVO.** Dentro del año siguiente a la entrada en vigor de esta ley, los municipios que actualmente tengan a su cargo la operación y funcionamiento de las Oficialías de los Registros Civiles, deben realizar las acciones correspondientes a efecto de llevar a cabo la entrega-recepción jurídico- administrativa de las Oficialías de los Registros Civiles al Poder Ejecutivo de la entidad federativa que corresponda, en caso de omisión el Consejo determinará lo conducente.



*“2022 Año de Ricardo Flores Magón”*

**NOVENO.** Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo que antecede, las entidades federativas y los municipios deberán celebrar los convenios que establezcan la forma en que los municipios transferirán a la entidad federativa que corresponda la administración de los recursos humanos, materiales y tecnológicos con que los municipios ejercían la función del Registro Civil. Asimismo, en dichos convenios se podrá establecer la coordinación y trabajo colaborativo que los municipios desempeñarán junto con el Poder Ejecutivo de la entidad federativa para el cumplimiento de esta Ley.

**DÉCIMO.** En tanto se realiza la armonización de la normatividad federal y local conforme lo dispuesto en esta Ley, toda referencia que se haga en las leyes y códigos a la denominación de Jueces o Juzgados del Registro Civil, se entenderá que se refiere a las personas y a las oficinas en las que se ejercen las funciones por parte de la persona titular de la Oficialía del Registro Civil.

**DÉCIMO PRIMERO.** En tanto las Oficialías del Registro Civil no cuenten con el SID, deberán seguir operando con el sistema local con el que cuenten y expedir las Actas en el papel valorado que se encuentre vigente a la fecha de entrada en vigor de esta ley o en papel blanco tipo bond en caso de que se encuentren interconectadas con la Dirección General del Registro Civil de la entidad federativa que corresponda y se cuente con las medidas de seguridad electrónicas para su expedición.

Las entidades federativas deberán utilizar, hasta agotar su inventario, el papel valorado con el que cuenten a la fecha de la entrada en vigor de esta ley para la inscripción de los registros de los hechos o actos del estado civil de que se trate y para expedición de las Actas conforme a la operación y distribución que cada entidad federativa determine.

**DÉCIMO SEGUNDO.** La expedición de las Actas en sistema Braille, al que hace referencia el artículo 41, se realizará una vez que las Direcciones Generales del Registro Civil, así como las Oficinas Consulares cuenten con la tecnología que permita la emisión de este formato.



*“2022 Año de Ricardo Flores Magón”*

**DÉCIMO TERCERO.** Dentro del año posterior a la entrada en vigor del Reglamento al que hace mención el segundo de los transitorios, se deberá integrar y poner en operación la Base de Datos Nacional del Registro Civil, para lo cual deberá utilizarse la información con la cuenta en esta materia la Secretaría.

Una vez en operación la Base de Datos Nacional de Registro Civil, las entidades federativas deberán enviar de forma constante la información que permita su integración y actualización permanente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 23 de marzo de 2022

**Dip. Erika Vanessa del Castillo**

**Dip. Manuel Vázquez Arellano**

**Dip. Dulce María Corina Villegas Guarneros**

**Dip. Félix Durán Ruiz**

**Dip. Araceli Ocampo Manzanares**



"2022 Año de Ricardo Flores Magón"

Dip. María Sierra Damián

  
\_\_\_\_\_

Dip. Marisol García Segura

  
\_\_\_\_\_

Dip. Pedro Sergio Peñaloza Pérez

  
\_\_\_\_\_

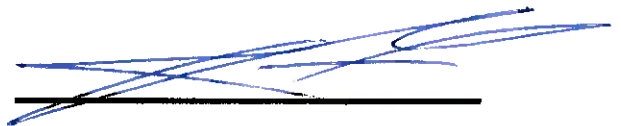
Dip. Catalina Díaz Vilchis

  
\_\_\_\_\_

Dip. Víctor Gabriel Varela López

  
\_\_\_\_\_

Dip. Julieta Andrea Ramírez Padilla

  
\_\_\_\_\_

Dip. Rocío Natalí Barrera Puc

  
\_\_\_\_\_

Dip. Irma Juan Carlos



*"2022 Año de Ricardo Flores Magón"*

**Dip. Jorge Ángel Sibaja Mendoza**

**Dip. Brenda Ramiro Alejo**

**Dip. Carlos López Guadarrama**

**Dip. Blanca Carolina Pérez Gutiérrez**

**Dip. Brianda Aurora Vázquez Álvarez**

**Dip. Ismael Brito Mazariegos**

**Dip. Luz Adriana Candelario Figueroa**

**Dip. Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros**





*"2022 Año de Ricardo Flores Magón"*

Dip. Alfredo Vázquez Vázquez

---

Dip. María Guadalupe Chavira de la Rosa

Dip. Olga Juliana Elizondo Guerra

Dip. Martha Robles Ortiz

Dip. César Agustín Hernández Pérez

Dip. Rebeca Valle Hernández

Dip. Lidia García Anaya

---

Dip. Esther Martínez Romero

Dip. Fátima Almendra Cruz Peláez

---



## INICIATIVA

### **CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SUSCRITA POR EL DIPUTADO PABLO AMÍLCAR SANDOVAL BALLESTEROS A NOMBRE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA**

Quien suscribe, Diputado Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, integrante de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, a nombre del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6; numeral 1; 77, numeral 3; 78 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Soberanía la presente **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL**, para lo cual se expone el:

### **PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA**

El **10 de febrero de 2014** se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el *Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia política-electoral*. El artículo tercero transitorio del decreto de reforma estableció que el Congreso de la Unión debería expedir la ley reglamentaria del artículo 134, párrafo octavo constitucional, durante el segundo período de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura, es decir, a más tardar el **30 de abril de 2014**.

En dicha legislación deberían establecerse las normas para sujetar a todo poder público, dependencia, entidad, órgano u organismo del Estado Mexicano al cumplimiento de principios, procedimientos, reglas, condiciones y criterios en materia de comunicación social. El artículo tercero transitorio también estableció dos elementos sustanciales para guiar la labor legislativa, a saber: 1) que la ley estableciera las disposiciones para garantizar que el gasto en comunicación social

respete los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez; y 2) que se hagan respetar los topes presupuestales, límites y condiciones para el ejercicio del gasto, de conformidad con los presupuestos de egresos respectivos.

El Congreso de la Unión, sin embargo, omitió la obligación de generar dicha ley reglamentaria en el plazo establecido por el artículo transitorio. Esta omisión legislativa motivó que la organización de la sociedad civil Artículo 19 promoviera una demanda de amparo que tuvo por efecto que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenara al Congreso Federal la expedición de la ley que regulara la actuación de las autoridades en materia de comunicación social, con especial énfasis en la regulación de la publicidad oficial o gubernamental.

Esta sentencia paradigmática tuvo como enfoque central la protección de los derechos humanos a la libertad de expresión y a la información. Así, se consideró que:

*“la ausencia de reglas que permitan al Estado actuar de tal manera que asegure que todas las voces de la sociedad que se expresan en los medios de comunicación sean escuchadas de forma completa y justa, hace que cualquier gasto que se haga en ese rubro sea potencialmente arbitrario, puesto que no será evidente que cumpla con los principios que deben disciplinar el gasto en comunicación social”<sup>1</sup>.*

El Congreso de la Unión acató la sentencia del **amparo en revisión 1359/2015** (resuelto el **15 de noviembre de 2017**), con la expedición de la Ley General de Comunicación Social publicada en el DOF el **11 de mayo de 2018**, y que entraría en vigor hasta el **1 de enero de 2019**. Esta ley general contiene disposiciones transitorias para que las autoridades federales y locales obligadas por ella adecuaran sus marcos normativos, generaran los sistemas, registros y padrones

---

1 Amparo en revisión 308/2020, Primera Sala, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 8 de noviembre de 2021, p. 9, párrafo 22.

para transparentar el ejercicio de gasto en comunicación social y pusieran en marcha los procedimientos necesarios para dar cumplimiento a la Ley.

La legislación, sin embargo, fue impugnada nuevamente por no cumplir adecuadamente con el mandato constitucional de establecer las normas necesarias para regular la asignación del gasto en comunicación social. En esta ocasión la Corte sostuvo que el Congreso de la Unión incurrió en una omisión legislativa de carácter relativo, porque aun cuando se hubiere cumplido con el mandato de expedir una ley reglamentaria, no se habían regulado con el grado de precisión constitucionalmente exigible los principios y criterios en la materia, además de establecer disposiciones deficientes que no garantizan efectivamente la asignación equitativa de publicidad oficial, lo que vulnera el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información de las personas.

La parte quejosa (Artículo 19) argumentó también que la LGCS vigente adolece de reglas y procedimientos claros que establezcan los criterios conforme a los cuales se ejerce el gasto de comunicación social; carece de topes presupuestales y mecanismos para hacerlos valer; y no señala los términos y condiciones para que los recursos de comunicación social se circunscriban a los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

La Corte explicó en la sentencia del **amparo en revisión 308/2020**, que se actualiza una omisión legislativa de carácter relativo respecto de una competencia de ejercicio obligatorio por parte del Congreso de la Unión, pues aunque dicha competencia se ejerció, esta se realizó de manera incompleta, parcial o deficiente, lo cual no permite el correcto desarrollo y eficacia de la función creadora de leyes.<sup>2</sup>

Por otra parte, respecto del análisis de los artículos impugnados y su constitucionalidad, la Corte da la razón a la parte quejosa en cuanto a que:

---

<sup>2</sup> *Ibidem*, pp. 43, 44, párrafos 126 y 127.

- La LGCS no regula con el grado de precisión constitucionalmente exigible los principios que deben regir el gasto público en comunicación social;
- No se precisa suficientemente qué debe entenderse por ‘comunicación social institucional’;
- Se delega indebidamente en una autoridad administrativa la responsabilidad de delimitar el entramado normativo necesario para garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales en la materia, así como los criterios de selección de los medios de comunicación;
- No existen parámetros precisos y suficientes para que la Secretaría Administradora emita lineamientos que impidan una total discrecionalidad en la asignación de gasto en comunicación social;
- La simple mención respecto a que el ejercicio de gasto en la materia debe respetar la libertad de expresión, no constituye una manera eficaz de proteger a ese derecho;
- La remisión a la legislación en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios para la contratación de los tiempos comerciales es insuficiente y mantiene un estado de cosas inconstitucional, pues dicha remisión no puede ir en detrimento del mandato constitucional, conforme al cual el Congreso de la Unión debe disponer normas en materia de comunicación social aplicables a todos los entes públicos;
- La ley no establece techos presupuestales para el gasto en la materia, por lo que su determinación queda a discrecionalidad de las dependencias y entidades gubernamentales;
- En suma, se determina que la LGCS carece de reglas específicas, procedimientos y criterios concretos para garantizar que el gasto en comunicación social cumpla con los principios constitucionales, y disminuya la discrecionalidad de los agentes gubernamentales;
- Luego entonces, la Corte establece que la LGCS “actualiza una omisión legislativa de carácter relativo que repercute en la libertad de expresión”, por lo que considera que los planteamientos son suficientes para otorgar la protección constitucional contra dicha ley.

Expuesto el planteamiento del problema, presentamos los argumentos que sustentan la idoneidad de la presente iniciativa; su justificación constitucional; la explicación del contenido de los artículos propuestos en el proyecto de decreto y las razones por las cuales consideramos que dicho contenido cumple con lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sentencia del **amparo en revisión 308/2020**:

### **ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INICIATIVA**

Difundir los actos y decisiones de gobierno es un signo distintivo de las sociedades democráticas, cuyas ciudadanas y ciudadanos tienen derecho a conocer y acceder a la información de naturaleza pública, mientras que a las y los servidores públicos les corresponde rendir cuentas de manera cotidiana.

Este deber se funda en el principio republicano de publicidad de los actos de gobierno, pues contrariamente a lo que ocurre en regímenes no democráticos donde el secreto es la regla, y la publicidad la excepción, las democracias exigen que el poder que se deposita en los representantes populares y funcionarios públicos se ejerza de forma transparente y accesible para todas las personas.

El principio de publicidad de los actos de gobierno es correlativo a los derechos humanos a la información y a la libertad de expresión reconocidos en los artículos 6o y 7o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los convenios internacionales de derechos humanos que nuestro país ha adoptado como parte de su orden jurídico. Tal es el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, mismos que recogen el derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole en su artículo 19, y la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 13.

Las modalidades a través de las cuales los gobiernos cumplen con el deber de publicidad cambian atendiendo a la evolución y alcance de las comunicaciones, así como a las exigencias de sociedades que demandan más información y de manera más accesible. Tanto la sociedad como el gobierno se enfrentan a limitaciones estructurales que impiden que la información o el mensaje de interés público llegue a toda la población que tiene derecho a recibirlo. Estas limitantes se explican, entre otras razones, por la falta de recursos para difundir la información con la mayor amplitud posible o por la ausencia de medios idóneos para hacer llegar el mensaje, pero también por la falta de interés, los tratos discriminatorios y excluyentes hacia ciertos sectores de la población, o la ausencia de transparencia por parte del gobierno para garantizar el acceso de todas las personas a la información.

En este sentido, uno de los mayores obstáculos para que toda la población acceda y tenga a su alcance información útil para ejercer derechos, cumplir obligaciones, recibir servicios o ser beneficiaria de programas públicos, lo es la actitud discrecional o arbitraria de los órganos públicos en la asignación de pautas gubernamentales a través de medios de comunicación. Y es que los medios de comunicación juegan una parte fundamental en el ejercicio de la democracia, por llevar a cabo una función esencial de informar a la ciudadanía para que esta tome decisiones con mayores elementos de racionalidad y, por otra parte, para obligar a los poderes públicos a rendir cuentas.

La publicidad oficial - como generalmente se ha denominado a las pautas gubernamentales en medios de comunicación - es, pues, un recurso al alcance de las autoridades para difundir de manera efectiva y con la mayor amplitud, la información relativa a sus acciones y decisiones. Sin embargo, por estar vinculada a la función pública y por ejercerse con recursos públicos, la asignación de publicidad gubernamental es también un acto de autoridad que debe sujetarse a parámetros de control que permitan vigilar la toma de decisiones de los entes públicos en esta materia.



Como explica la SCJN, las dependencias y entidades gubernamentales realizan actividades de comunicación social para cumplir con fines informativos, educativos o de orientación social, para lo cual requieren de la difusión de sus actividades a través de medios de comunicación que hagan llegar la información al mayor número de destinatarios. Al realizar esto, las autoridades ejercen y destinan recursos públicos que se convierten en ingresos para los medios de comunicación, muchos de los cuales dependen en buena parte de dichas pautas estatales para su operación.<sup>3</sup>

Esta función debe constreñirse no solo a controles presupuestarios o de vigilancia en el ejercicio de los recursos, sino que, por la especial naturaleza de la publicidad oficial, debe sujetarse a reglas y procedimientos claros y no incidir indebidamente en el ejercicio de los derechos humanos. Esto, porque la experiencia nos muestra que la publicidad oficial ha sido empleada también como un medio de censura indirecta para premiar o castigar a los medios de comunicación, lo cual incide negativamente en el ejercicio de su libertad de expresión, pues los condiciona a elegir una determinada línea editorial, a evitar la difusión de informaciones que resulten contrarias a los intereses de personajes políticos, o a evadir la crítica a las autoridades.

Este fenómeno no es exclusivo de nuestro país. Por el contrario, se han documentado numerosos casos de censura indirecta a través del condicionamiento de la publicidad oficial en toda la región latinoamericana, en Argentina, Chile, Perú, Colombia, pero también en Puerto Rico, España e India. Si bien la experiencia comparada nos muestra prácticas adecuadas en la regulación de la asignación de publicidad oficial, no se tienen estándares internacionales en esta materia por existir marcos regulatorios heterogéneos que atienden a las necesidades particulares de cada país.

---

<sup>3</sup> *Ibidem*, pp. 50, 51, párrafos 144 y 145.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha afirmado categóricamente, respecto de la distribución de publicidad oficial de los gobiernos latinoamericanos, que “(p)ara reducir las asignaciones discriminatorias o arbitrarias de los recursos públicos se precisan marcos legales claros y transparentes que impidan la arbitrariedad en las decisiones”, puesto que “la insuficiente precisión de las leyes y las facultades inaceptablemente discrecionales constituyen violaciones a la libertad de expresión”<sup>4</sup>.

El vínculo entre publicidad oficial y libertad de expresión ha quedado demostrado en la larga lucha de los medios de comunicación independientes y críticos que han combatido jurídicamente el ejercicio autoritario del poder público. La experiencia nos muestra que la difusión de la actividad gubernamental a través de los medios de comunicación se ha empleado de manera algunas veces sutil, y otras evidente, para coartar la libertad de expresión y como un medio de censura indirecta.

Tanto la sentencia de la SCJN en el amparo en revisión 308/2020, como los informes de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, dan cuenta de casos emblemáticos en Argentina, Chile y Puerto Rico, en los cuales sus respectivas cortes supremas desprendieron las siguientes conclusiones<sup>5</sup>:

- Las autoridades que distribuyan publicidad oficial deben regirse por un marco legal claro y adecuado que limite la discrecionalidad de los funcionarios públicos;
- Si el Estado decide distribuir publicidad oficial, debe hacerlo con base en dos criterios: 1) no puede otorgar o retirar la publicidad con base en criterios

---

4 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, *Principios sobre regulación de la publicidad oficial y libertad de expresión*, 2012, p. 23.

5 *Ibidem*, pp. 8 - 17.

discriminatorios; y 2) no puede utilizarse la publicidad como un modo indirecto para afectar la libertad de expresión<sup>6</sup>;

- La publicidad estatal debe otorgarse bajo criterios transparentes y no discriminatorios<sup>7</sup>;
- Usar fondos públicos para castigar el discurso político de la prensa y coaccionar a los medios de comunicación para que emitan expresiones favorables al gobierno, es contrario a la primera enmienda (en el caso de Puerto Rico)<sup>8</sup>.

Específicamente en la región latinoamericana, se ha documentado que la publicidad del Estado representa un porcentaje sustancial de la inversión total que reciben los medios de comunicación, alcanzando entre el 40% y el 50% de su ingreso<sup>9</sup>. Si bien existe una dependencia de los medios de comunicación a los recursos que ejerce el Estado para comunicación social, también es cierto que la naturaleza de dichos recursos, la finalidad, objetivo y función de informar y rendir cuentas es eminentemente pública y, como tal, constituye un acto de autoridad que no puede ejercerse en detrimento de los derechos humanos reconocidos constitucional y convencionalmente.

Algunas organizaciones internacionales han desarrollado principios y criterios a considerar en cualquier regulación de la publicidad oficial<sup>10</sup>, mismos que se retoman en la presente iniciativa:

- En principio, se ha señalado la necesidad de contar con un *marco regulatorio claro y concreto* que permita combatir la discrecionalidad de las autoridades, así como la falta de transparencia e incluso la corrupción;

---

6 Amparo en revisión 308/2020, Primera Sala, Suprema Corte de Justicia de la Nación, *cit*, p. 53, párrafo 151.

7 *Ibidem*, p. 55, párrafo 157.

8 *Ibidem*, p. 54, párrafo 155.

9 *Ídem*.

10 Asociación por los Derechos Civiles, *Principios básicos para la regulación de publicidad oficial*, 2006.

- También se ha concluido que la publicidad oficial tiene el objetivo primordial de fungir como un *canal de comunicación* entre el poder público y la población, lo que exige que el mensaje sea claro, objetivo, fácil de entender, necesario, útil y relevante para el público. Asimismo, y de manera preponderante, se afirma que la publicidad gubernamental no debe promover los intereses de ningún partido político ya sea implícita o explícitamente;
- Para los efectos de esta iniciativa, destacamos el principio de *no discrecionalidad* en la distribución de la publicidad oficial, por lo que deben generarse mecanismos para la contratación que tengan por objeto reducir la discrecionalidad, evitar los favoritismos políticos e impedir actos de corrupción.
- Dentro del principio de la no discrecionalidad necesariamente deben destacarse los principios de *claridad y transparencia*, no solo en la asignación de las pautas gubernamentales, sino del mensaje mismo, por lo cual toda campaña o pauta debe estar *justificada* y responder a *necesidades concretas y reales de comunicación*. En este sentido, al estar justificada y no resultar trivial, se garantiza en buena medida que la publicidad no sea utilizada para alimentar a medios de comunicación que sean afines a los gobiernos;
- Por otra parte, la *transparencia* de responder, evidentemente, a la creación de mecanismos que permitan a la población acceder de forma fácil a la información relativa a la distribución de las pautas oficiales, al ejercicio de los recursos públicos y a la elección de medios de comunicación;
- La *descentralización* en la distribución de pautas estatales también es un mecanismo idóneo para evitar la discrecionalidad, la corrupción y los favoritismos en la asignación de los mensajes gubernamentales - actividad que deberá privilegiar los elementos técnicos sobre los políticos;
- Como acto de autoridad, la distribución de publicidad oficial debe necesariamente sujetarse a controles que obliguen a los ejecutores de gasto a rendir cuentas sobre el uso del dinero público, lo cual se garantiza en gran medida a través de mecanismos de transparencia, evaluación y vigilancia

con los que ya cuenta el Estado mexicano a nivel federal y de las entidades federativas.

Respecto de los *mecanismos de contratación* para asignar publicidad oficial o campañas gubernamentales, se ha enfatizado que todo proceso de contratación debe ser abierto, transparente en todas sus etapas, y en él deben hacerse explícitos criterios no discriminatorios y previamente establecidos que permitan una selección idónea de los medios de comunicación, atendiendo a los objetivos de comunicación de la campaña gubernamental, y del alcance del propio medio.

Por regla general, estos procedimientos deben permitir la concurrencia de varios participantes y, excepcionalmente y en casos de emergencia, podrán justificarse mecanismos cerrados o de contratación directa.

La LGCS publicada en el DOF el 11 de mayo de 2018 carece de un marco regulatorio adecuado para garantizar que el gasto de comunicación social se asigne de manera equitativa e imparcial, y de conformidad con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia previstos en la CPEUM. En este sentido, la ley impugnada adolece de reglas pertinentes y suficientes para evitar que el gasto en comunicación social se utilice de manera discrecional y como un elemento de disuasión de la libertad de expresión.

El artículo 5 de la LGCS vigente enlista como principios rectores del ejercicio del gasto en materia de comunicación social, los de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez; sin embargo, como indica la Primera Sala de la SCJN, el artículo no define adecuadamente el alcance y sentido de dichos principios. Asimismo, el artículo establece principios tales como el de racionalidad presupuestaria, objetividad e imparcialidad, institucionalidad, necesidad, congruencia y veracidad, sin embargo, su definición no necesariamente atiende las recomendaciones de expertos y organizaciones dedicadas a esta materia, o no cumple de manera pertinente con el objeto de la ley.

El mismo artículo 5, párrafo tercero, en relación con el 4, fracción X, delega en una Secretaría Administradora – la Secretaría de Gobernación en el ámbito federal, y las dependencias equivalentes en las entidades federativas – la facultad de ‘regular el gasto en materia de comunicación social’ mediante Lineamientos que contemplen los criterios de selección del medio de comunicación correspondiente, a fin de garantizar el cumplimiento de los principios previstos en el artículo 5. Estas porciones normativas deben reformarse puesto que indebidamente delegan en una autoridad administrativa la facultad de regular procedimientos y condiciones que deben estar directamente contempladas en la LGCS.<sup>11</sup>

Por otra parte, no debe perderse de vista que uno de los ámbitos de mayor interés –y cuya defensa motivó la puesta en marcha de los litigios estratégicos que resultaron en la LGCS– es precisamente la protección, respeto y garantía de la libertad de expresión. En este sentido, resulta preocupante que la ley encargada de regular una materia que ha sido empleada largamente para coartar ese derecho, no contemple mecanismos adecuados para garantizarlo efectivamente.

Esto es así porque lejos de establecer salvaguardas para evitar que la publicidad oficial se ocupe como un mecanismo de censura indirecta para premiar o castigar a medios de comunicación afines o críticos al gobierno en turno, la ley menciona vagamente que la asignación de gasto deberá respetar la libertad de expresión (artículo 5, segundo párrafo).

La Ley impugnada tampoco abunda en el significado de la comunicación social de carácter institucional, aunque menciona este término a lo largo de la Ley. Es por esto, que en la presente iniciativa se realiza una propuesta para definir los alcances de dicha institucionalidad. Por otra parte, se explican con mayor claridad los criterios constitucionales de eficacia, eficiencia, honradez, transparencia, objetividad e

---

11 *Ibidem*, p. 49, párrafo 139.

imparcialidad, racionalidad presupuestaria, y se agrega el principio de no discrecionalidad.

Se establecen elementos claros que deberán ser transparentados por las autoridades en lo referente a la creación de sistemas, registros y bases de datos de la información que se ponga a disposición de la ciudadanía, en materia de asignación de contratos y distribución de campañas de comunicación social. Asimismo, se establecen salvaguardas para garantizar que la libertad de expresión de ningún medio de comunicación sea coartada en el ejercicio de los recursos públicos de comunicación social.

En el artículo 19, nuestra propuesta presenta los criterios y elementos que las autoridades deberán cumplir en la contratación de campañas de comunicación social, para lo cual se ordena que los procedimientos sean abiertos, transparentes, se establezcan previamente y se atiendan las necesidades reales de comunicación para hacer llegar la información a toda la población.

La presente propuesta establece principios para la distribución del presupuesto para campañas de comunicación social; se establecen disposiciones para salvaguardar el respeto a los topes presupuestales; y se disponen obligaciones y restricciones concretas a cargo de los entes públicos para no redistribuir los recursos asignados para esta materia en una manera distinta a la aprobada.

La propuesta de ley presentada cumple, en nuestra consideración, con los alcances de la sentencia de la SCJN en el amparo en revisión 308/2020, por lo que con este esfuerzo se espera dar cumplimiento al mandato judicial a cargo de esta Cámara de Diputados.

A efecto de ilustrar el contenido de las modificaciones propuestas, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

## **LEY GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

TEXTO VIGENTE	PROYECTO DE DECRETO
<p><b>Artículo 4.-</b> Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:</p> <p>I. Campañas de Comunicación Social: Aquéllas que difunden el quehacer gubernamental, acciones o logros de Gobierno o estimulan acciones de la ciudadanía para acceder a algún beneficio o servicio público;</p> <p>II a la V. ...</p> <p>VI. Medios de Comunicación: Son los que pueden ser captados simultáneamente por gran cantidad de individuos. Se entenderán como tales a los medios electrónicos, <del>medios</del> impresos, <del>medios</del> complementarios, <del>medios</del> digitales y <del>medios</del> públicos;</p> <p>VII a la IX. ...</p> <p>X. Secretaría Administradora: La Secretaría de Gobernación y la dependencia o unidad administrativa equivalente en el ámbito de las Entidades Federativas y los municipios, encargada de regular el gasto en materia de Comunicación Social, así como las áreas o unidades administrativas con funciones o</p>	<p><b>Artículo 4.-</b> Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:</p> <p>I. Campañas de Comunicación Social: Aquéllas que difunden el quehacer gubernamental, acciones o logros de Gobierno o estimulan acciones de la ciudadanía para <b>ejercer un derecho, cumplir una obligación o acceder a algún beneficio, programa o servicio público, a través de cualquier medio de comunicación, y que son emitidas por parte de los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro Ente Público de los tres órdenes de Gobierno;</b></p> <p>II a la V. ...</p> <p>VI. Medios de Comunicación: Son los que pueden ser captados simultáneamente por gran cantidad de individuos. Se entenderán como tales a los medios electrónicos, impresos, complementarios y digitales, <b>ya sean públicos, privados o sociales;</b></p> <p>VII a la IX. ...</p> <p>X. Secretaría Administradora: La Secretaría de Gobernación y la dependencia o unidad administrativa equivalente en el ámbito de las Entidades Federativas y los municipios, encargada de <b>vigilar la ejecución del gasto y el cumplimiento de las disposiciones</b> en materia de Comunicación Social, así como las</p>



<p>atribuciones equivalentes o similares que determinen el resto de los Entes Públicos;</p> <p>XI. a la XVI. ...</p>	<p>áreas o unidades administrativas con funciones o atribuciones equivalentes o similares que determinen el resto de los Entes Públicos;</p> <p>XI. a la XVI. ...</p>
<p>Sin correlativo.</p>	<p><b>Artículo 4 Bis.- La comunicación social tiene como finalidad garantizar el derecho de la ciudadanía a la información sobre la actuación gubernamental, así como promover la rendición de cuentas por parte los Entes Públicos.</b></p> <p>La comunicación social que emitan los Entes Públicos será de carácter institucional y tendrá fines informativos, educativos o de orientación social, por lo que deberá ser de interés público, objetiva, oportuna, necesaria, clara, útil, accesible e incluyente.</p>
<p><b>Artículo 5.</b> En el ejercicio del gasto público en materia de Comunicación Social, los Entes Públicos deberán observar con los siguientes principios rectores:</p> <p>a) La eficacia, en uso de los recursos públicos;</p> <p>b) La eficiencia, de los recursos públicos destinados a la contratación o gasto de Comunicación Social;</p>	<p><b>Artículo 5.</b> En la contratación de <b>campañas</b> de Comunicación Social, los Entes Públicos deberán observar los siguientes <b>criterios</b>:</p> <p>a) La eficacia, a fin de que el contenido de la comunicación social llegue al público que desea impactar;</p> <p>b) La eficiencia en el ejercicio del gasto público, mediante la selección de Medios de Comunicación que ofrezcan las mejores condiciones para el cumplimiento de los fines de la comunicación social, con base en lo establecido en esta Ley;</p>

<p>c) La economía y racionalidad presupuestaria, que comprende la administración prudente de los recursos destinados a la Comunicación Social;</p> <p>d) La transparencia y máxima publicidad, garantizándose el acceso a toda información relacionada con la contratación y manejo de recursos públicos destinados a la Comunicación Social de los Entes Públicos, conforme a lo dispuesto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y otras disposiciones jurídicas aplicables;</p> <p>e) La honradez, que comprende el manejo de recursos públicos conforme a las leyes y otras disposiciones jurídicas aplicables, que justifique la contratación sujetándose a criterios de calidad cumpliendo los propósitos de la Comunicación Social;</p>	<p>c) La economía y racionalidad presupuestaria, <b>que implica el respeto irrestricto a los topes presupuestales establecidos para cada ejercicio fiscal o, en su caso, la justificación de modificaciones en casos extraordinarios por las causas establecidas en esta Ley;</b></p> <p>d) La transparencia y máxima publicidad <b>de toda la información relativa al gasto en materia de comunicación social, de manera oficiosa y a través de sistemas y registros de datos abiertos, públicos y accesibles, conforme a lo dispuesto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y las demás disposiciones jurídicas aplicables;</b></p> <p>e) La honradez, que comprende el manejo de recursos públicos conforme a las leyes y otras disposiciones jurídicas aplicables, <b>de manera justificada, con base en los criterios establecidos en esta Ley y cumpliendo los propósitos de la Comunicación Social;</b></p> <p>f) La objetividad e imparcialidad que <b>deberá observarse en</b></p>
--	--

<p>f) La objetividad e imparcialidad, que implica que la Comunicación Social en los procesos electorales no debe estar dirigida a influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos, precandidatos y candidatos;</p> <p>g) La institucionalidad, en virtud de sus fines informativos, educativos o de orientación social;</p> <p>h) La necesidad, de comunicar los asuntos públicos a la sociedad para su información y/o atención;</p> <p>i) La congruencia, entre el contenido del mensaje, el objetivo de comunicación y la población objetivo, y</p> <p>j) La veracidad de la información que se difunde.</p> <p>Adicionalmente, deberá atender al respeto a la libertad de expresión y al fomento del acceso ciudadano a la información; y debe contribuir a fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, respetará la diversidad social y cultural de la Nación.</p>	<p>congruencia con los principios de no discriminación, eficacia y eficiencia, mediante la asignación equitativa del gasto de comunicación social;</p> <p>g) La distribución no discrecional, con base en criterios objetivos que impidan actos de corrupción;</p> <p>h) La necesidad, consistente en la justificación de toda campaña de comunicación social para atender exigencias concretas de difusión;</p> <p>i) ...</p> <p>j) ...</p> <p><b>En la distribución de los espacios de las Campañas de Comunicación Social, se procurará que aquella sea igualitaria y no discriminatoria, así como que se respete el pluralismo, la diversidad de opiniones y la libertad de expresión. El ejercicio de recursos públicos en esta materia estará en función de los criterios previstos en esta Ley, sin importar las opiniones, puntos de vista o líneas editoriales de los Medios de Comunicación.</b></p>
--	--

<p>La Secretaría Administradora deberá contemplar en los Lineamientos que emita, los criterios de selección del medio de comunicación correspondiente, a fin de garantizar el cumplimiento de los principios previstos en el presente artículo.</p>	<p>Por ningún motivo los Entes Públicos podrán reclasificar el gasto público en materia de comunicación social de una manera distinta a la aprobada en los presupuestos de egresos respectivos. Las modificaciones que en su caso se requieran, deberán respetar los límites y justificarse en los términos establecidos en esta Ley.</p>
<p><b>Sin correlativo</b></p>	<p><b>Artículo 5 Bis.-</b> En el marco de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los sistemas, registros y bases de datos para facilitar la publicidad y accesibilidad de la información en materia de comunicación social, deberán ponerse a disposición en la Plataforma Nacional de Transparencia y CompraNet, y deberán contener:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>I. Los presupuestos aprobados para el ejercicio fiscal correspondiente y, en su caso, las modificaciones realizadas y su justificación;</li> <li>II. Los instrumentos de planificación establecidos en esta Ley;</li> <li>III. Los informes sobre el gasto de comunicación social ejercido por cada Ente Público, desglosado por tipo de medio;</li> <li>IV. Los procedimientos de contratación realizados en todas sus etapas por cada Ente</li> </ol>

	<p><b>Público y para las campañas de comunicación social;</b></p> <p><b>V. El análisis realizado para el cumplimiento de los criterios de selección de los Medios de Comunicación contratados, en términos de esta Ley;</b></p> <p><b>VI. Los contratos para la difusión de comunicación social, por cada Ente Público y Medio de Comunicación contratado; y</b></p> <p><b>VII. Los datos relativos a objetivos, monto, duración y, en su caso, medición de resultados de cada campaña de comunicación social.</b></p>
<p><b>Artículo 6.-</b> Serán aplicables de manera supletoria, en lo conducente, las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.</p> <p>Los Medios de Comunicación tienen garantizado el pleno ejercicio del desarrollo a la libertad de expresión en la contratación y difusión de propaganda gubernamental, en términos de los artículos 6o. y 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.</p>	<p><b>Artículo 6.- ...</b></p> <p><b>Se deroga</b></p>

<p><b>Artículo 8.-</b> Las Campañas de Comunicación Social, deberán:</p> <p><b>I a la II. ...</b></p> <p><b>III.</b> Informar a los ciudadanos de sus derechos y obligaciones legales, de aspectos relevantes del funcionamiento de los sujetos obligados, y de las condiciones de acceso y uso de los espacios y servicios públicos;</p> <p><b>IV a la VIII. ...</b></p>	<p><b>Artículo 8.- ...</b></p> <p><b>I. a la II. ...</b></p> <p><b>III.</b> Informar, <b>a través de los Medios de Comunicación y otras formas de difusión, sobre los programas, servicios y políticas públicas que los Entes Públicos prestan e impulsan, con la finalidad de cumplir sus facultades y atribuciones, y garantizar con ello la transparencia gubernamental, el derecho a la información, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y el ejercicio de los derechos humanos;</b></p> <p><b>IV a la VIII. ...</b></p>
<p><b>Artículo 19.-</b> Las contrataciones de Tiempos Comerciales que realicen los Entes Públicos con los Medios de Comunicación para la difusión de Campañas de Comunicación Social, deberá apegarse a la legislación y normatividad en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios que les sea aplicable.</p> <p><b>Sin correlativo</b></p> <p><b>Sin correlativo</b></p>	<p><b>Artículo 19.-</b> Las contrataciones de Tiempos Comerciales que realicen los Entes Públicos con los Medios de Comunicación para <b>la difusión de Campañas de Comunicación Social estarán en función de los procedimientos de contratación señalados en el Título Segundo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Adicionalmente, los Entes Públicos deberán establecer los siguientes mecanismos de contratación:</b></p> <p><b>I. Procedimientos abiertos, transparentes y no discriminatorios;</b></p> <p><b>II. Que la contratación de espacios en los Medios de</b></p>

<p><b>Sin correlativo</b></p>	<p>Comunicación se realice a través de procedimientos preestablecidos;</p>
<p><b>Sin correlativo</b></p>	<p>III. Que todo el proceso de contratación sea público y transparente; y</p>
<p><b>Sin correlativo</b></p>	<p>IV. Que se atiendan las características geográficas y de mercado.</p>
<p><b>Sin correlativo</b></p>	<p>Excepcionalmente, la contratación de espacios para Campañas de Comunicación Social podrá realizarse de manera directa, en casos de emergencia y extrema urgencia que pongan en riesgo o grave peligro a la población, en términos de lo que determinen las leyes y autoridades correspondientes.</p>
<p><b>Sin correlativo</b></p>	<p>En ningún caso se podrán establecer requisitos desproporcionados o discriminatorios.</p>
<p><b>Sin correlativo</b></p>	<p>Los Entes Públicos solo podrán contratar Campañas de Comunicación Social en la medida que cuenten con recursos aprobados para ello en el Programa Anual de Comunicación Social, de conformidad con lo establecido en los presupuestos de egresos respectivos o, en su caso, en el presupuesto aprobado por las autoridades correspondientes.</p>
<p><b>Sin correlativo</b></p>	<p>Artículo 18 Bis.- Sin perjuicio de los criterios establecidos en el artículo 5 de esta Ley, los Entes Públicos</p>

	<p>deberán considerar los siguientes principios en la distribución de su presupuesto:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>I. Idoneidad del Medio de Comunicación empleado para llegar a la población objetivo;</li> <li>II. Alcance, frecuencia e impacto, según sea el caso, del Medio de Comunicación o de difusión con relación a los objetivos de la campaña; y</li> <li>III. Equidad entre los tipos de Medios de Comunicación y otras formas de difusión e información similares.</li> </ol> <p>Los Entes Públicos ponderarán los principios establecidos en este artículo, a fin de seleccionar la combinación de Medios de Comunicación requeridos para la campaña, en función de la equidad del gasto y los objetivos de comunicación de la campaña para difundir el mensaje.</p>
Sin correlativo	<p>Artículo 18 Ter.- En la difusión de sus Campañas de Comunicación Social, los Entes Públicos deberán cumplir con las siguientes disposiciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>I. Establecer los objetivos de las Campañas de Comunicación Social en congruencia con los objetivos institucionales, programas o actividades derivadas de las funciones de los entes públicos;</li> </ol>



	<ul style="list-style-type: none"><li>II. Planear el Programa Anual de Comunicación Social con base en el presupuesto aprobado para cada ejercicio fiscal;</li><li>III. Programar y seleccionar los medios a utilizar en la campaña, trátase de televisión, radio, medios impresos, complementarios, digitales u otros, con base en sus características;</li><li>IV. Incluir los recursos económicos para la producción de materiales dentro del presupuesto destinado a comunicación social y publicidad;</li><li>V. Asegurar la equidad entre los tipos de Medios de Comunicación y otras formas de difusión e información similares;</li><li>VI. Considerar la elección de Medios de Comunicación locales cuando el mensaje deba dirigirse a un público específico susceptible de alcanzarse a través de aquellos, a fin de cumplir con la finalidad de la campaña específica, conforme a su ámbito de cobertura y en atención a la disponibilidad presupuestal;</li><li>VII. Seleccionar los medios de difusión en función de los</li></ul>
--	---

	<p>objetivos de comunicación de las campañas, con pleno respeto a la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información en beneficio de la sociedad, y atendiendo a los principios establecidos en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de lograr un correcto y eficaz desarrollo de sus funciones;</p> <p>VIII. Queda prohibido que en la selección de los Medios de Comunicación para la difusión de Campañas de Comunicación Social, los Entes Públicos utilicen criterios de censura o que tengan por fin coartar la libertad de expresión;</p> <p>IX. Queda prohibida la difusión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa que tenga por efecto confundir a la población, contraviniendo con ello los objetivos de comunicación de las Campañas de Comunicación Social; y</p> <p>X. Queda prohibido que un Medio de Comunicación concentre un porcentaje mayor al veinticinco por ciento de la totalidad de la pauta</p>
--	--

	<p>publicitaria destinada a una campaña específica a cargo del Ente Público, salvo que se trate de la producción de los materiales a divulgar o, en su caso, se justifique la imposibilidad de distribuir esa pauta en atención al objetivo previsto en la campaña específica.</p>
<p>Sin correlativo</p>	<p>Artículo 18 Quáter.- Cuando por ajustes presupuestales realizados por las autoridades correspondientes deban cancelarse programas de comunicación social; el Ente Público tendrá quince días hábiles para tramitar la cancelación ante las instancias correspondientes, una vez notificado.</p> <p>La solicitud de cancelación deberá estar fundada y motivada, y deberá acompañarse del dictamen del área administrativa y, en su caso, de la documentación que acredite las razones que motivan el actuar del ente público.</p>
<p>Sin correlativo</p>	<p>Artículo 18 Quinques.- El presupuesto asignado para comunicación social, se ejecutará en el ejercicio fiscal en el que fue programado y no podrán utilizarse recursos de un ejercicio con relación al siguiente, salvo los casos de compromisos que no fuese posible cubrir en el ejercicio fiscal en que fueron erogados.</p>

<p><b>Artículo 20.-</b> Las Secretarías Administradoras, de conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos respectivo y en las leyes competentes en la materia, emitirán anualmente los Lineamientos que contengan las reglas relativas a la difusión de las campañas de carácter industrial, comercial, mercantil y de promoción y publicidad que promuevan o publiciten la venta de productos o servicios que generan algún ingreso para el Estado, mismos que no podrán difundirse en los Tiempos Oficiales.</p>	<p><b>Artículo 20.-</b> Las Secretarías Administradoras, de conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos respectivo y en las leyes competentes en la materia, emitirán anualmente los Lineamientos <b>para la implementación de los procedimientos, criterios y requisitos previstos en esta Ley</b> las campañas de carácter industrial, comercial, mercantil y de promoción y publicidad que promuevan o publiciten la venta de productos o servicios que generan algún ingreso para el Estado, mismos que no podrán difundirse en los Tiempos Oficiales.</p>
<p><b>Artículo 21.-</b> Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales, y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión de toda Campaña de Comunicación Social en los Medios de Comunicación.</p> <p>Para los efectos del párrafo anterior, en el caso de los procesos electorales locales, deberá suspenderse la difusión de Campañas de Comunicación Social en los Medios de Comunicación con Cobertura Geográfica y ubicación exclusivamente en la Entidad Federativa de que se trate.</p> <p>Se exceptúan de lo anterior:</p> <p>I. Las campañas de información de las autoridades electorales;</p>	<p><b>Artículo 21.-</b> ...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p>

<p>II. Las relativas a servicios educativos y de salud;</p> <p>III. Las necesarias para la protección civil en casos de emergencia, y</p> <p>IV. Cualquier otra que autorice el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, de manera específica durante los procesos electorales, sin que ello implique que sólo las campañas aprobadas por la referida autoridad administrativa son las que podrían difundirse.</p> <p>Cuando existan procesos electorales, las dependencias y entidades de la administración pública deben acatar la normatividad aplicable que ordene la suspensión de las campañas gubernamentales.</p> <p><b>Sin correlativo</b></p>	<p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p><b>La Comunicación Social que emitan los Entes Públicos durante los procesos electorales no debe estar dirigida a influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos, precandidatos y candidatos.</b></p>
<p><b>Artículo 22.-</b> La Secretaría Administradora será la encargada, en el ámbito de su competencia, de prestar asistencia técnica y evaluación de las Estrategias, Programas y las Campañas de Comunicación Social de las dependencias y entidades de la</p>	<p><b>Artículo 22.-</b> La Secretaría Administradora será la encargada, en el ámbito de su competencia, de prestar asistencia técnica y evaluación de las Estrategias, Programas y las Campañas de Comunicación Social de <b>los Entes Públicos</b>, a fin de que se lleven a cabo</p>

<p><del>administración pública</del>, a fin de que se lleven a cabo bajo los principios a los que se hace referencia en esta Ley.</p> <p>La Secretaría Administradora será la encargada de la planeación y evaluación de los Programas Anuales de Comunicación Social que elaboren los Entes Públicos respectivos, a fin de que se lleven a cabo bajo los principios a los que se hace referencia en esta Ley.</p>	<p>bajo los principios a los que se hace referencia en esta Ley.</p> <p>...</p>
<p><b>Artículo 24.-</b> Los Entes Públicos que cuenten con recursos en el Presupuesto de Egresos para Comunicación Social, deben elaborar un Programa Anual de Comunicación Social.</p> <p>El Programa Anual de Comunicación Social deberá comprender el conjunto de Campañas de Comunicación Social a difundirse en el ejercicio fiscal respectivo, mismas que estarán encaminadas al cumplimiento del objetivo institucional y de los principios rectores, y que podrán incluir:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>I. Mensajes sobre programas y actividades gubernamentales;</li> <li>II. Acciones o logros del Gobierno, y</li> <li>III. Mensajes tendientes a estimular acciones de la ciudadanía para acceder a</li> </ol>	<p><b>Artículo 24.-</b> ...</p> <p>El Programa Anual de Comunicación Social deberá comprender el conjunto de Campañas de Comunicación Social a difundirse en el ejercicio fiscal respectivo, mismas que estarán encaminadas al cumplimiento <b>de los objetivos institucionales, los objetivos estratégicos o transversales</b> y de los principios rectores, y que podrán incluir:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>I. ...</li> <li>II. ...</li> <li>III. Mensajes tendientes a estimular acciones de la ciudadanía para <b>ejercer un derecho, cumplir una</b></li> </ol>

algún beneficio o servicio público.	<b>obligación</b> o acceder a algún beneficio o servicio público.
<p><b>Artículo 25.-</b> <del>Las dependencias y entidades de las administraciones públicas</del> deberán presentar su Estrategia y Programa anual correspondiente y enviarla a la Secretaría Administradora, previo registro en el Sistema de Información de Normatividad de Comunicación u homólogo, en la primera quincena de enero de cada año, primero de manera electrónica, y posteriormente, con plazos establecidos para la entrega documental con firmas autógrafas.</p> <p>La Secretaría Administradora emitirá las observaciones pertinentes o, en su caso, autorizará las Estrategias y Programas Anuales que corresponda.</p>	<p><b>Artículo 25.- Los Entes Públicos</b> deberán presentar su Estrategia y Programa de <b>Comunicación Social de forma anual ante su respectiva</b> Secretaría Administradora, previo registro en el Sistema de Información de Normatividad de Comunicación o <b>sistema</b> homólogo, en la primera quincena de enero de cada año, primero de manera electrónica, y posteriormente, con plazos establecidos para la entrega documental con firmas autógrafas.</p> <p>La Secretaría Administradora emitirá las observaciones pertinentes o, en su caso, autorizará las Estrategias y Programas Anuales que <b>correspondan.</b></p>
<p><b>Artículo 26.-</b> Los Entes Públicos deberán elaborar el Programa Anual considerando la prioridad temática y cronología de la difusión de las campañas a efecto de dar cumplimiento con la Estrategia anual. Las campañas deben ser acordes al objetivo de comunicación que persiguen los Entes Públicos con la difusión de las mismas.</p> <p>En la ejecución de sus Programas Anuales de Comunicación Social, los Entes Públicos deberán atender los siguientes criterios:</p> <p>I. Que las Campañas de Comunicación Social tengan</p>	<p>Artículo 26.- Los Entes Públicos deberán elaborar el Programa de <b>Comunicación Social anual</b> considerando la prioridad temática y cronología de la difusión de las campañas a efecto de dar cumplimiento con la Estrategia Anual. Las campañas deben ser acordes al objetivo de comunicación que persiguen los Entes Públicos con la difusión de las mismas.</p> <p>...</p> <p>I. Que las Campañas de Comunicación Social tengan</p>

<p>relación directa con las atribuciones y facultades de los sujetos obligados;</p> <p>II. Que los recursos a utilizar sean proporcionales a los objetivos de la campaña;</p> <p>III. Que las herramientas y medios utilizados para la difusión de la campaña sean seleccionados de manera efectiva a fin de que la hagan llegar al público al que vaya dirigida;</p> <p>IV. Que haya objetivos claros y precisos para comunicar;</p> <p>V. Que se establezcan metas de resultados y procedimientos de evaluación de las campañas;</p> <p>VI. Utilizar, en primera instancia, los tiempos oficiales conforme a las disposiciones legales y administrativas aplicables, en el caso de los sujetos obligados que tengan derecho a ello, y</p> <p>VII. Que tengan un carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social.</p>	<p>relación directa con sus atribuciones y facultades;</p> <p>II. Que los recursos a utilizar sean proporcionales a los objetivos de la campaña <b>y que en su conjunto no rebasen los límites de ejercicio establecidos en esta Ley;</b></p> <p>III. Que las herramientas y medios utilizados para la difusión de la campaña sean seleccionados <b>atendiendo a los principios de eficacia, eficiencia, objetividad, imparcialidad, no discriminación, accesibilidad y pertinencia cultural,</b> a fin de que la hagan llegar al público al que vaya dirigida;</p> <p>IV. ...</p> <p>V. ...</p> <p>VI. Utilizar, en primera instancia, los tiempos oficiales conforme a las disposiciones legales y administrativas aplicables, en el caso de los <b>Entes Públicos</b> que tengan derecho a ello, y</p> <p>VII. ...</p>
--	---



<p><b>Artículo 27.-</b> Las dependencias y entidades remitirán sus propuestas de Estrategias, Programas Anuales y respectivas Campañas de Comunicación Social a la Secretaría Administradora, observando los Lineamientos que éstas emitan en el marco de sus respectivas competencias y atendiendo aquellos que en materia presupuestal establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o su equivalente en las Entidades Federativas, según corresponda.</p> <p><b>Sin correlativo</b></p> <p><b>Sin correlativo</b></p>	<p><b>Artículo 27.-</b> Las dependencias y entidades remitirán sus propuestas de Estrategias, Programas Anuales y respectivas Campañas de Comunicación Social a la Secretaría Administradora, observando los <b>criterios para la asignación de campañas de comunicación social, en concordancia con el principio de distribución no discrecional.</b></p> <p><b>La contratación de campañas de comunicación social deberá sujetarse a los criterios establecidos en el artículo 5 de esta Ley.</b></p> <p><b>Es obligación de los Entes Públicos elaborar una adecuada planeación presupuestal de la Estrategia y Programa Anual de Comunicación Social.</b></p>
<p><b>Artículo 28.-</b> La Secretaría Administradora deberá tener registro de las campañas que cada dependencia y entidad prevé realizar, las vigencias generales, los montos del techo presupuestal y la inversión que representaría en el marco de su programación.</p> <p><b>Sin correlativo.</b></p>	<p><b>Artículo 28.-</b> La Secretaría Administradora deberá tener registro de las campañas que cada <b>Ente Público</b> prevé realizar, las vigencias generales, los montos del techo presupuestal y la inversión que representaría en el marco de su programación.</p> <p><b>El límite del gasto en campañas de comunicación social no podrá rebasar en ningún ejercicio fiscal el 0.1 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación.</b></p>

	<p>La Secretaría Administradora supervisará que los Entes Públicos se sujeten a lo aprobado en el Presupuesto de Egresos correspondiente. En casos de emergencia y extrema urgencia, previa justificación, se podrá ampliar el gasto en campañas de comunicación social hasta en un 30% adicional a lo aprobado.</p>
<p><b>Artículo 29.-</b> Una vez autorizada la Estrategia y el Programa Anual conforme al artículo 25 y de acuerdo a las vigencias establecidas en el mismo, las dependencias y entidades deberán presentar ante la Secretaría Administradora, la solicitud de autorización por cada campaña registrada en el Programa.</p> <p>Salvo los mensajes extraordinarios previstos en el Capítulo VI del Título II de esta Ley, la Secretaría Administradora no autorizará solicitudes de campañas que hayan iniciado su difusión, por lo que las dependencias y entidades deben considerar los tiempos del procedimiento de autorización para llevar a cabo la planeación de sus campañas, mismos que se establecerán en los Lineamientos respectivos.</p> <p>Cada solicitud de campaña registrada deberá contener, por lo menos:</p> <p>I. Los Medios de Comunicación a utilizar;</p>	<p><b>Artículo 29.-</b> Una vez autorizada la Estrategia y el Programa Anual conforme al artículo 25 y de acuerdo con las vigencias establecidas en el mismo, <b>los Entes Públicos</b> deberán presentar ante la Secretaría Administradora la solicitud de autorización por cada campaña registrada en el Programa.</p> <p>Salvo los mensajes extraordinarios previstos en el Capítulo VI del Título II de esta Ley, la Secretaría Administradora no autorizará solicitudes de campañas que hayan iniciado su difusión, por lo que <b>los Entes Públicos</b> deben considerar los tiempos del procedimiento de autorización para llevar a cabo la planeación de sus campañas, mismos que se establecerán en los Lineamientos respectivos.</p> <p>...</p> <p>I. Los Medios de Comunicación a utilizar; y</p>

<p>II. Los recursos a erogar, y</p> <p>III. <del>Los requisitos adicionales que establezcan las autoridades correspondientes de conformidad con las disposiciones que para tal efecto emitan en el marco de sus respectivas competencias.</del></p>	<p>II. Los recursos a erogar.</p> <p>III. <b>Se deroga.</b></p>
<p><b>Artículo 42.-</b> La Secretaría Administradora informará bimestralmente a la Cámara de Diputados o los Congresos locales, respectivamente, a través de la Comisión competente, sobre la ejecución de los programas y actividades gubernamentales.</p> <p>Dichos informes deberán contener, al menos, lo siguiente:</p> <p>I. Monto total erogado por dependencia y entidad;</p> <p>II. Empresas prestadoras de los servicios;</p> <p>III. Propaganda contratada, y</p> <p>IV. Para el caso de la Administración Pública Federal, el reporte del uso de los Tiempos Fiscales y de Estado.</p>	<p><b>Artículo 42.- ...</b></p> <p>...</p> <p>I. Monto total erogado por <b>Ente Público</b>;</p> <p>II. ...</p> <p>III. <b>Campaña contratada; y</b></p> <p>IV. ...</p>

En virtud de lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Asamblea, la presente **Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se**

**reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social, para quedar como sigue:**

**PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

**ÚNICO.-** Se **reforman** los artículos 4 en sus fracciones I, VI y X; 5, en su párrafo primero, los incisos a) al h), y los párrafos segundo y tercero; 8, fracción III; 19, párrafo primero; 20; 22, párrafo primero; 24, en su párrafo segundo y su fracción III; 25; 26, en su párrafo primero y sus fracciones I, II, III y VI; 27, párrafo primero; 28, párrafo primero; 29, párrafos primero y segundo, y las fracciones I y II del párrafo tercero; las fracciones I y III del párrafo segundo del artículo 42; se **adicionan** los artículos 4 bis; 5 bis; 18 bis; 18 ter; 18 quáter; 18 quinquies; las fracciones I, II, III y IV al párrafo primero, y los párrafos segundo y tercero del artículo 19; un párrafo quinto al artículo 21; los párrafos segundo, tercero al artículo 27; un párrafo segundo y tercero al artículo 28; y se **derogan** el segundo párrafo del artículo 6; la fracción II del párrafo segundo del artículo 24; y la fracción III del párrafo tercero del artículo 29, todos de la Ley General de Comunicación Social para quedar como sigue:

**Artículo 4.-** Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

**I.** Campañas de Comunicación Social: Aquéllas que difunden el quehacer gubernamental, acciones o logros de Gobierno o estimulan acciones de la ciudadanía para ejercer un derecho, cumplir una obligación o acceder a algún beneficio, programa o servicio público, a través de cualquier medio de comunicación, y que son emitidas por parte de los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro Ente Público de los tres órdenes de Gobierno;

**II a la V. ...**

**VI.** Medios de Comunicación: Son los que pueden ser captados simultáneamente por gran cantidad de individuos. Se entenderán como tales a los medios electrónicos, impresos, complementarios y digitales, ya sean públicos, privados o sociales;

**VII a la IX. ...**

**X. Secretaría Administradora:** La Secretaría de Gobernación y la dependencia o unidad administrativa equivalente en el ámbito de las Entidades Federativas y los municipios, encargada de vigilar la ejecución del gasto y el cumplimiento de las disposiciones en materia de Comunicación Social, así como las áreas o unidades administrativas con funciones o atribuciones equivalentes o similares que determinen el resto de los Entes Públicos;

**XI. a la XVI. ...**

**Artículo 4 Bis.-** La comunicación social tiene como finalidad garantizar el derecho de la ciudadanía a la información sobre la actuación gubernamental, así como promover la rendición de cuentas por parte los Entes Públicos.

La comunicación social que emitan los Entes Públicos será de carácter institucional y tendrá fines informativos, educativos o de orientación social, por lo que deberá ser de interés público, objetiva, oportuna, necesaria, clara, útil, accesible e incluyente.

**Artículo 5.** En la contratación de campañas de Comunicación Social, los Entes Públicos deberán observar los siguientes criterios:

- a. La eficacia, a fin de que el contenido de la comunicación social llegue al público que desea impactar;
- b. La eficiencia en el ejercicio del gasto público, mediante la selección de Medios de Comunicación que ofrezcan las mejores condiciones para el cumplimiento de los fines de la comunicación social, con base en lo establecido en esta Ley;
- c. La economía y racionalidad presupuestaria, que implica el respeto irrestricto a los topes presupuestales establecidos para cada ejercicio fiscal o, en su caso, la justificación de modificaciones en casos extraordinarios por las causas establecidas en esta Ley;
- d. La transparencia y máxima publicidad de toda la información relativa al gasto en materia de comunicación social, de manera oficiosa y a través de sistemas y registros de datos abiertos, públicos y accesibles, conforme a lo dispuesto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y las demás disposiciones jurídicas aplicables;
- e. La honradez que comprende el manejo de recursos públicos conforme a las leyes y otras disposiciones jurídicas aplicables, de manera justificada, con base en los criterios establecidos en esta Ley y cumpliendo los propósitos de la Comunicación Social;

- f. La objetividad e imparcialidad que deberá observarse en congruencia con los principios de no discriminación, eficacia y eficiencia, mediante la asignación equitativa del gasto de comunicación social;
- g. La distribución no discrecional, con base en criterios objetivos que impidan actos de corrupción;
- h. La necesidad, consistente en la justificación de toda campaña de comunicación social para atender exigencias concretas de difusión;
- i. ...
- j. ...

En la distribución de los espacios de las Campañas de Comunicación Social, se procurará que aquella sea igualitaria y no discriminatoria, así como que se respete el pluralismo, la diversidad de opiniones y la libertad de expresión. El ejercicio de recursos públicos en esta materia estará en función de los criterios previstos en esta Ley, sin importar las opiniones, puntos de vista o líneas editoriales de los Medios de Comunicación.

Por ningún motivo los Entes Públicos podrán reclasificar el gasto público en materia de comunicación social de una manera distinta a la aprobada en el presupuesto de egresos respectivo. Las modificaciones que en su caso se requieran, deberán respetar los límites y justificarse en los términos establecidos en esta Ley.

**Artículo 5 Bis.-** En el marco de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los sistemas, registros y bases de datos para facilitar la publicidad y accesibilidad de la información en materia de comunicación social, deberán ponerse a disposición en la Plataforma Nacional de Transparencia y CompraNet, y deberán contener:

- I. Los presupuestos aprobados para el ejercicio fiscal correspondiente y, en su caso, las modificaciones realizadas y su justificación;
- II. Los instrumentos de planificación establecidos en esta Ley;
- III. Los informes sobre el gasto de comunicación social ejercido por cada Ente Público, desglosado por tipo de medio;
- IV. Los procedimientos de contratación realizados en todas sus etapas por cada Ente Público y para las campañas de comunicación social;
- V. El análisis realizado para el cumplimiento de los criterios de selección de los Medios de Comunicación contratados, en términos de esta Ley;
- VI. Los contratos para la difusión de comunicación social, por cada Ente Público y Medio de Comunicación contratado; y
- VII. Los datos relativos a objetivos, monto, duración y, en su caso, medición de resultados de cada campaña de comunicación social.

**Artículo 6.- ...**

Se deroga.

**Artículo 8.- ...**

I. a la II. ...

III. Informar, a través de los Medios de Comunicación y otras formas de difusión, sobre los programas, servicios y políticas públicas que los Entes Públicos prestan e impulsan, con la finalidad de cumplir sus facultades y atribuciones, y garantizar con ello la transparencia gubernamental, el derecho a la información, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y el ejercicio de los derechos humanos;

IV a la VIII. ...

**Artículo 19.-** Las contrataciones de Tiempos Comerciales que realicen los Entes Públicos con los Medios de Comunicación para la difusión de Campañas de Comunicación Social estarán en función de los procedimientos de contratación señalados en el Título Segundo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Adicionalmente, los Entes Públicos deberán establecer los siguientes mecanismos de contratación:

- I. Procedimientos abiertos, transparentes y no discriminatorios;
- II. Que la contratación de espacios en los Medios de Comunicación se realice a través de procedimientos preestablecidos;
- III. Que todo el proceso de contratación sea público y transparente; y
- IV. Que se atiendan las características geográficas y de mercado.

Excepcionalmente, la contratación de espacios para Campañas de Comunicación Social podrá realizarse de manera directa, en casos de emergencia y extrema urgencia que pongan en riesgo o grave peligro a la población, en términos de lo que determinen las leyes y autoridades correspondientes.

En ningún momento se podrán establecer requisitos desproporcionados o discriminatorios.

Los Entes Públicos solo podrán contratar Campañas de Comunicación Social en la medida que cuenten con recursos aprobados para ello en el Programa Anual de

Comunicación Social, de conformidad con lo establecido en los presupuestos de egresos respectivos o, en su caso, en el presupuesto aprobado por las autoridades correspondientes.

**Artículo 18 Bis.-** Sin perjuicio de los criterios establecidos en el artículo 5 de esta Ley, los Entes Públicos deberán considerar los siguientes principios en la distribución de su presupuesto:

- I. Idoneidad del Medio de Comunicación empleado para llegar a la población objetivo;
- II. Alcance, frecuencia e impacto, según sea el caso, del Medio de Comunicación o de difusión con relación a los objetivos de la campaña; y
- III. Equidad entre los tipos de Medios de Comunicación y otras formas de difusión e información similares.

Los Entes Públicos ponderarán las fracciones I, II y III a fin de seleccionar la combinación de Medios de Comunicación requeridos para la campaña, en función de la equidad del gasto y los objetivos de comunicación de la campaña para difundir el mensaje.

**Artículo 18 Ter.-** En la difusión de sus Campañas de Comunicación Social, los Entes Públicos deberán cumplir con las siguientes disposiciones:

- I. Establecer los objetivos de las Campañas de Comunicación Social en congruencia con los objetivos institucionales, programas o actividades derivadas de las funciones de los entes públicos;
- II. Planear el Programa Anual de Comunicación Social con base en el presupuesto aprobado para cada ejercicio fiscal;
- III. Programar y seleccionar los medios a utilizar en la campaña, trátase de televisión, radio, medios impresos, complementarios, digitales u otros, con base en sus características;
- IV. Incluir los recursos económicos para la producción de materiales dentro del presupuesto destinado a comunicación social y publicidad;
- V. Asegurar la equidad entre los tipos de Medios de Comunicación y otras formas de difusión e información similares;
- VI. Considerar la elección de Medios de Comunicación locales cuando el mensaje deba dirigirse a un público específico susceptible de alcanzarse a través de aquellos, a fin de cumplir con la finalidad de la campaña específica, conforme a su ámbito de cobertura y en atención a la disponibilidad presupuestal;



- VII. Seleccionar los medios de difusión en función de los objetivos de comunicación de las campañas, con pleno respeto a la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información en beneficio de la sociedad, y atendiendo a los principios establecidos en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de lograr un correcto y eficaz desarrollo de sus funciones;
- VIII. Queda prohibido que, en la selección de los Medios de Comunicación para la difusión de Campañas de Comunicación Social, los Entes Públicos utilicen criterios de censura o que tengan por fin coartar la libertad de expresión;
- IX. Queda prohibida la difusión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa que tenga por efecto confundir a la población, contraviniendo con ello los objetivos de comunicación de las Campañas de Comunicación Social; y
- X. Queda prohibido que un Medio de Comunicación concentre un porcentaje mayor al veinticinco por ciento de la totalidad de la pauta publicitaria destinada a una campaña específica a cargo del Ente Público, salvo que se trate de la producción de los materiales a divulgar o, en su caso, se justifique la imposibilidad de distribuir esa pauta en atención al objetivo previsto en la campaña específica.

**Artículo 18 Quáter.-** Cuando por ajustes presupuestales realizados por las autoridades correspondientes deban cancelarse programas de comunicación social; el Ente Público tendrá quince días hábiles para tramitar la cancelación ante las instancias correspondientes, una vez notificado.

La solicitud de cancelación deberá estar fundada y motivada, y deberá acompañarse del dictamen del área administrativa y, en su caso, de la documentación que acredite las razones que motivan el actuar del ente público.

**Artículo 18 Quinquies.-** El presupuesto asignado para comunicación social, se ejecutará en el ejercicio fiscal en el que fue programado y no podrán utilizarse recursos de un ejercicio con relación al siguiente, salvo los casos de compromisos que no fuese posible cubrir en el ejercicio fiscal en que fueron erogados.

**Artículo 20.-** Las Secretarías Administradoras, de conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos respectivo y en las leyes competentes en la materia, emitirán anualmente los Lineamientos para la implementación de los procedimientos, criterios y requisitos previstos en esta Ley las campañas de carácter industrial, comercial, mercantil y de promoción y publicidad que promuevan o publiciten la venta de productos o servicios que generan algún ingreso para el Estado, mismos que no podrán difundirse en los Tiempos Oficiales.

**Artículo 21.- ...**

...  
...  
...  
...  
...  
...  
...

La Comunicación Social que emitan los Entes Públicos durante los procesos electorales no debe estar dirigida a influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos, precandidatos y candidatos.

**Artículo 22.-** La Secretaría Administradora será la encargada, en el ámbito de su competencia, de prestar asistencia técnica y evaluación de las Estrategias, Programas y las Campañas de Comunicación Social de los Entes Públicos, a fin de que se lleven a cabo bajo los principios a los que se hace referencia en esta Ley.

...

**Artículo 24.- ...**

El Programa Anual de Comunicación Social deberá comprender el conjunto de Campañas de Comunicación Social a difundirse en el ejercicio fiscal respectivo, mismas que estarán encaminadas al cumplimiento de los objetivos institucionales, los objetivos estratégicos o transversales y de los principios rectores, y que podrán incluir:

- I. ...
- II. ...
- III. Mensajes tendientes a estimular acciones de la ciudadanía para ejercer un derecho, cumplir una obligación o acceder a algún beneficio o servicio público.

**Artículo 25.-** Los Entes Públicos deberán presentar su Estrategia y Programa de Comunicación Social de forma anual ante su respectiva Secretaría Administradora, previo registro en el Sistema de Información de Normatividad de Comunicación o sistema homólogo, en la primera quincena de enero de cada año, primero de manera electrónica, y posteriormente, con plazos establecidos para la entrega documental con firmas autógrafas.

La Secretaría Administradora emitirá las observaciones pertinentes o, en su caso, autorizará las Estrategias y Programas Anuales que correspondan.

**Artículo 26.-** Los Entes Públicos deberán elaborar el Programa Anual considerando la prioridad temática y cronología de la difusión de las campañas a efecto de dar cumplimiento con la Estrategia Anual. Las campañas deben ser acordes al objetivo de comunicación que persiguen los Entes Públicos con la difusión de las mismas.

...

- I. Que las Campañas de Comunicación Social tengan relación directa con sus atribuciones y facultades;
- II. Que los recursos a utilizar sean proporcionales a los objetivos de la campaña y que en su conjunto no rebasen los límites de ejercicio establecidos en esta Ley;
- III. Que las herramientas y medios utilizados para la difusión de la campaña sean seleccionados atendiendo a los principios de eficacia, eficiencia, objetividad, imparcialidad, no discriminación, accesibilidad y pertinencia cultural, a fin de que la hagan llegar al público al que vaya dirigida;
- IV. ...
- V. ...
- VI. Utilizar, en primera instancia, los tiempos oficiales conforme a las disposiciones legales y administrativas aplicables, en el caso de los Entes Públicos que tengan derecho a ello; y
- VII. ...

**Artículo 27.-** Las dependencias y entidades remitirán sus propuestas de Estrategias, Programas Anuales y respectivas Campañas de Comunicación Social a la Secretaría Administradora, observando los criterios para la asignación de campañas de comunicación social, en concordancia con el principio de distribución no discrecional.

La contratación de campañas de comunicación social deberá sujetarse a los criterios establecidos en el artículo 5 de esta Ley.

Es obligación de los Entes Públicos elaborar una adecuada planeación presupuestal de la Estrategia y Programa Anual de Comunicación Social.

**Artículo 28.-** La Secretaría Administradora deberá tener registro de las campañas que cada Ente Público prevé realizar, las vigencias generales, los montos del techo presupuestal y la inversión que representaría en el marco de su programación.

El límite del gasto en campañas de comunicación social no podrá rebasar en ningún ejercicio fiscal el 0.1 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación.

La Secretaría Administradora supervisará que los Entes Públicos se sujeten a lo aprobado en el Presupuesto de Egresos correspondiente. En casos de emergencia y extrema urgencia, previa justificación, se podrá ampliar el gasto en campañas de comunicación social hasta en un 30% adicional a lo aprobado.

**Artículo 29.-** Una vez autorizada la Estrategia y el Programa Anual conforme al artículo 25 y de acuerdo con las vigencias establecidas en el mismo, los Entes Públicos deberán presentar ante la Secretaría Administradora la solicitud de autorización por cada campaña registrada en el Programa.

Salvo los mensajes extraordinarios previstos en el Capítulo VI del Título II de esta Ley, la Secretaría Administradora no autorizará solicitudes de campañas que hayan iniciado su difusión, por lo que los Entes Públicos deben considerar los tiempos del procedimiento de autorización para llevar a cabo la planeación de sus campañas, mismos que se establecerán en los Lineamientos respectivos.

...

- I. Los Medios de Comunicación a utilizar; y
- II. Los recursos a erogar.
- III. Se deroga.

**Artículo 42.-** ...

...

- I. Monto total erogado por Ente Público;
- II. ...
- III. Campaña contratada; y
- IV. ...

## TRANSITORIOS

**Primero.-** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.


**Segundo.-** El Ejecutivo Federal deberá realizar las adecuaciones reglamentarias correspondientes en un plazo que no exceda de 90 días a partir de la publicación del presente Decreto.

**Tercero.-** Los Congresos locales y el Congreso de la Ciudad de México deberán armonizar su legislación en un plazo no mayor a 180 días naturales a partir de la publicación del presente decreto.

**Cuarto.-** Las solicitudes de autorización de campañas en trámite o pendientes de autorización al momento de entrada en vigor del presente Decreto, deben tramitarse y resolverse conforme a las disposiciones vigentes al momento en el que fueron presentadas.

**Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 7 días del mes de abril de 2022.**

  
Dip. Pablo Amílcar Sandoval  
Ballesteros

  
Dip. Moisés Ignacio Mier Velazco  
Coordinador del Grupo  
Parlamentario de Morena

INICIATIVA QUE SUSCRIBEN DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SUSCRITA POR EL DIPUTADO PABLO AMÍLCAR SANDOVAL BALLESTEROS A NOMBRE DE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

Dip. Lidia García Andujar

Dip. Leon Gaby Román

Dip. Yeidkol Pokunsky Turwitz

Dip. María Isabel Alfaro Morales

Dip. Manuel Vazquez Arellano

Dip. Jaime Humberto Pérez Benke

Dip. Andrea Chávez Treviño

Dip. Dulce Ma. Silva

Dip. Nemi Salazar López

Dip. MARISOL GARCIA SEQUERA

Dip. Joaquín Zebadúa Alva

Ana Elizabeth Ayala Leyva

Marcos Rosende Medona Pilograna

Karla Yunitzi Almazón Burga

Maria del Rosario Reyes Silva

Pedro Sergio Pinaloza Pérez

Brenda Espinoza Lopez

Susana Cano

Martha Duzena Camacho Reynoso

Angel Miguel Rodriguez Torres

Rocio Natali Barrera Puc

Rosa Maria Alvarado Murguio

Alegandra Poni Benavente

Javier Huerta Jorale

Celestina Castillo Secundino

FAUSTINO VIDAL BENAVIDES

Alejo Gonzalez Cruz

Angel Domínguez Escobar El Ardorero

Brenda Ramiro Alejo

~~Reyna Celeste Asteneiro Ortega~~

~~Oscair Eusebio Gutierrez~~

~~Alma Delia Navarrete Rivera~~

~~Alfredo Carral Herra~~

~~René Casimiro B~~

~~Nancy Yadira Santacruz Marcos  
Olegaria Carrasco Maun~~

~~Philippe Janzou Jean~~

~~Dip. Lance Martinez Lopez~~

Judith Tainin

Judith C. Tainin Córdoba

~~Dip. Jesus Roberto Briano Borunda~~

FELIX DURAN RUIZ


~~Dip. Martha Barajas Garcia~~

~~Dip. María del Carmen Zúñiga Cerezo~~

Marta Sandoval

Veronica Collado Crisolio

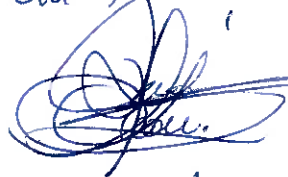


 OLGA ZULEMA ADAMS PERETRA

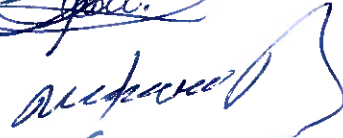


Rosangela Amairany Pérez C.

Araceli Ocampo Monzonova



MAXIMIANO BARBOZA



JORGE MUJICA



Eleuca E. Segura Trejo



Salma Ivón Luna



Arturo Fernández Lapin



MARTHA ROBLES ORTIZ



Karla Estrella Díaz García



Esther Berenice Martínez Díaz



Bennelly Jacobeth Hernández Ruedas




José Miguel de la Cruz Lima

NELLY M. CARRASCO GONZÁLEZ

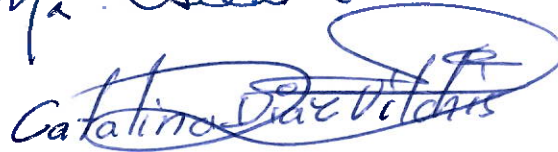



MARIO ALBERTO TORRES ESCOBAR

  
D.P. ALFREDO PORRAS D. BCS.

MARIN SIERRA DAHIA D.  
CANPECHE

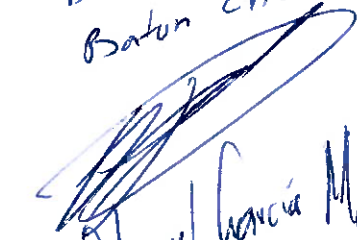


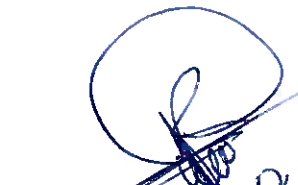
  
Catalina Diaz Vidales


  
Dip. Wilbert Alberto Batun Chulum

LIDIA PÉREZ BARCENAZ





  
Dip. Ottoniel García Montiel


  
Diputado Esteban Bumbista


JOSE GUADALUPE AMBROCIO GACHARZ  


Graciela Sánchez Ortiz

  
Monica Herrera Villavicencio

Flora Tania Cruz Santos  


  
HECTOR IRENEO MARES

  
César Agustín Hernández Pérez

  
Erika Chaves  
Castillo  


Flov Ivone Morales Miranda

  
Daniel Gutierrez

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO PRIMERO, EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XXI Y ADICIONA LA FRACCIÓN XXIX-AA AL ARTÍCULO 73, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN ANTE AGRESIONES A PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS.**

Quienes suscriben Diputada Presidenta Nelly Minerva Carrasco Godínez (GPMorena), Norma Angélica Aceves García (GPPRI), Ricardo Aguilar Castillo (GPPRI), Jaime Baltierra García (GPPT), Sue Ellen Bernal Bolnik (GPPRI), Kathia María Bolio Pinelo (GPPAN), Wendy Maricela Cordero González (GPPAN), Ma. Leticia Chávez Pérez (GPMC), Carolina Dávila Ramírez (GPPRI), Erika Vanessa Del Castillo Ibarra (GPMorena), María del Carmen Escudero Fabre (GPPAN), Ana María Esquivel Arrona (GPPAN), Marisol García Segura (GPMorena), Marisela Garduño Garduño (GPPT), Rosa María González Azcárraga (GPPAN), Mariana Mancillas Cabrera (GPPAN), Esther Mandujano Tinajero (GPPAN), Nora Elva Oranday Aguirre (GPPAN), Inés Parra Juárez (GPMorena), Pedro Sergio Peñaloza Pérez (GPMorena), Julieta Andrea Ramírez Padilla (GPMorena), Martha Robles Ortiz (GPMorena), Beatriz Rojas Martínez (GPMorena), Jorge Ángel Sibaja Mendoza (GPMorena), María Sierra Damián (GPMorena), Rebeca Valle Hernández (GPMorena), integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, de la LXV Legislatura, del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el primer párrafo del artículo 1º, la fracción XXI y adiciona la fracción XXIX-AA al artículo 73, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de prevención y protección ante agresiones a personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

**I. ANTECEDENTES**

Hace una década el Congreso de la Unión aprobó la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (en adelante LPPDDHyP), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2012. Con la emisión de esta Ley el Estado Mexicano reconoció una difícil realidad: el drástico aumento en las cifras de violencia contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

A lo largo de estos años, las autoridades mexicanas han resuelto que dicho reconocimiento debe acompañarse de intervenciones públicas cuyo propósito sea el cumplimiento de la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar sus derechos humanos, tal y como lo prevé el tercer párrafo del artículo primero constitucional. Lo anterior, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

En ese sentido, el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos se ha convertido en un eje fundamental de la agenda pública para el Estado mexicano y, en consecuencia, resulta necesario reconocer que la labor de defensa del derecho a la libertad de expresión y a defender derechos humanos, a lo largo de la historia, se ha enmarcado en permanentes luchas sociales -colectivas e individuales- que tienen como fin, la real satisfacción de necesidades básicas que alienten el desarrollo de un proyecto de vida en condiciones dignas<sup>1</sup>.

Cabe señalar también que, las luchas sociales se alientan y acompañan de las libertades fundamentales y, en virtud de la relación existente entre democracia, derechos humanos y la actividad de defensa de los mismos, cualquier acción de agresión, hostigamiento, amenaza, acoso judicial, secuestro, desaparición, desplazamiento y homicidios de personas defensoras de derechos humanos y periodistas constituye un especial riesgo contra el Estado de Derecho y requiere un reforzamiento estructural en su prevención y atención.

## **II. EL DERECHO A DEFENDER LOS DERECHOS HUMANOS**

El reconocimiento internacional del derecho a defender los derechos humanos inició en el año 1998 por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas con la aprobación de la "Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos", mejor conocida como la "Declaración sobre los defensores de los derechos humanos", al señalar en su artículo 1 que:

Toda persona tiene, ya sea individual o colectivamente, el derecho a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional<sup>2</sup>;

---

<sup>1</sup> González Domínguez, Marta, *El derecho a defender los derechos humanos como un derecho autónomo* en Revista IIDH 63 (enero-junio 2016). Disponible en: <https://www.corteidh.or.cr/tablas/r35519.pdf>. Consultado el 8 de marzo de 2022.

<sup>2</sup> Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos. Disponible en: <https://undocs.org/es/A/RES/53/144>

Lo anterior, independientemente de si dicha labor se ejerce a cambio de una remuneración o de su pertenencia a alguna organización<sup>3</sup>.

Por su parte, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en su primera sesión plenaria celebrada el 7 de junio de 1999, adoptó la Resolución 1671 mediante la cual se reconoció la importante tarea que desarrollan y se exhortó a los Estados Miembros a perseverar en sus esfuerzos para otorgar a las personas defensoras de los derechos humanos las garantías para que puedan seguir ejerciendo su tarea libremente<sup>4</sup>.

En el respaldo a dicha labor, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos creó en diciembre de 2001 la “Unidad de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos”, que en el marco del 141° Período Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en 2011, se convertiría en la actual Relatoría de Defensoras y Defensores de la CIDH.

Al respecto, el Sistema Universal e Interamericano de Derechos Humanos han insistido en que, la labor de quienes defienden derechos humanos impacta positivamente en las tareas del Estado, ya que su papel es fundamental para el fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho<sup>5</sup>, en tanto que actúan ejerciendo un constante reclamo, monitoreo, visibilización y denuncia de aquellas situaciones en que el goce y/o disfrute de un derecho no se encuentra garantizado o es incluso violentado<sup>6</sup>.

El derecho a defender los derechos humanos abarca todo derecho humano protegido en el marco de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) –a la luz de su artículo 1.1– y demás instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos. También abarca todos aquellos que se encuentren en desarrollo y construcción, en atención a la interpretación evolutiva de la mano del desarrollo evolutivo de los derechos ya reconocidos en la Convención, tal y como lo ha hecho la Corte IDH.

---

<sup>3</sup> CIDH, Segundo informe sobre la situación de de las y los defensores de derechos humanos en las Américas”, OEA/Ser.L/V/II., 31 de diciembre de 2012, párr.12, FLWDQGRD2¿FLQDOGHO\$OWR&RPLVLRQDGRGH1DFLRQHVS8QLGDVSDUDORV'HUHFKRVR Humanos (OACNUDH), Folleto informativo No. 29: Los Defensores de Derechos Humanos: Protección del Derecho a Defender los Derechos, Ginebra 2004. Disponible en: <http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet29sp.pdf>. Consultado el 8 de marzo de 2022.

<sup>4</sup> OEA. AG/RES. 1671 (XXIX-O/99). “Defensores de los derechos humanos en las Américas”. Apoyo a las tareas que desarrollan las personas, grupos y organizaciones de la sociedad civil para la promoción y protección de los derechos humanos en las Américas, resolutorios 1 y 2.

<sup>5</sup> Corte IDH. Caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia. Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas. 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192. Párr. 87

<sup>6</sup> González Domínguez, Marta, pág. 109.

Es decir, el derecho a defender derechos humanos conlleva el ejercicio de otros derechos que se interrelacionan entre sí y a pesar de que no se encuentra reconocido expresamente por las normas interamericanas, el mismo se encuentra protegido, entre otros, por los artículos 13.1, 15, 8, 25, 16.1, 23.1.a y 25.1 de la Convención Americana; sin embargo, supeditar dicho derecho al contenido de otros, supondría limitar su concreción a los mismos, sin definirlo con base en su significado particular y específico.

Otra característica de la interdependencia del derecho a defender los derechos humanos la encontramos, por ejemplo, en el derecho a la libertad de expresión y resulta imprescindible que para la defensa de los derechos y libertades fundamentales los Estados deben procurar proteger las funciones de vigilancia y promoción de su labor<sup>7</sup>. De manera específica, la Declaración sobre los defensores de los derechos humanos, señala en su artículo 2:

Los Estados tienen la responsabilidad primordial y el deber de proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, entre otras cosas, adoptando las medidas necesarias para crear las condiciones sociales, económicas, políticas y de otra índole, así como las garantías jurídicas requeridas para que toda persona sometida a su jurisdicción, individual o colectivamente, pueda disfrutar en la práctica de todos esos derechos y libertades.

Específicamente, ante el contexto actual, nuestro país debe adoptar medidas legislativas, judiciales y administrativas apropiadas para garantizar espacios seguros para el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos y la libre expresión.

### **III. OBLIGACIÓN INTERNACIONAL DEL ESTADO DE GARANTIZAR ESPACIOS SEGUROS PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO A DEFENDER LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES**

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha indicado que la calidad de persona defensora de derechos humanos radica en la labor de promoción y protección de los derechos humanos<sup>8</sup>, y relaciona el reconocimiento de este derecho con la garantía del derecho a la integridad personal y el derecho a la vida.

---

<sup>7</sup> OACNUDH. Relatora especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos. Comentario a la Declaración sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos. Julio de 2011, disponible en <http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/HRDCommentarySpanishVersion.pdf>, pág. 85.

<sup>8</sup> Corte IDH. Caso defensor de derechos humanos y otros vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2014. Serie C No. 283. Párr. 129.

La Corte IDH afirma que, en determinados contextos, los Estados tienen la obligación de adoptar todas las medidas necesarias y razonables para garantizar el derecho a la vida, libertad personal e integridad personal de aquellas personas que se encuentren en una situación de especial vulnerabilidad, especialmente como consecuencia de su labor, siempre y cuando el Estado tenga conocimiento de un riesgo real e inmediato en contra de ellos y toda vez que existan posibilidades razonables de prevenir o evitar ese riesgo<sup>9</sup> y con ello, establece como estándar que:

La defensa de los derechos humanos sólo puede ejercerse libremente cuando las personas que la realizan no son víctimas de amenazas ni de cualquier tipo de agresiones físicas, psíquicas o morales u otros actos de hostigamiento.

Es deber del Estado no sólo crear las condiciones legales y formales, sino también garantizar las condiciones fácticas en las cuales los defensores de derechos humanos puedan desarrollar libremente su función.

Los Estados deben facilitar los medios necesarios para que las personas defensoras de derechos humanos o que cumplan una función pública respecto de la cual se encuentren amenazados o en situación de riesgo o denuncien violaciones a derechos humanos, puedan realizar libremente sus actividades; protegerlos cuando son objeto de amenazas para evitar los atentados a su vida e integridad; generar las condiciones para la erradicación de violaciones por parte de agentes estatales o de particulares; abstenerse de imponer obstáculos que dificulten la realización de su labor, e investigar seria y eficazmente las violaciones cometidas en su contra, combatiendo la impunidad.

Los derechos a la vida e integridad personal de las personas se ven reforzados cuando se trata de un defensor o defensora de derechos humanos<sup>10</sup>.

En ese sentido, la Corte IDH ha reiterado que la falta de atención a las amenazas y atentados en contra de personas defensoras de derechos humanos, así como la impunidad de los responsables son graves porque no sólo tienen un efecto individual, sino también colectivo, en la medida en que la sociedad se ve impedida de conocer la verdad sobre la situación de respeto o de violación de los derechos de las personas bajo la jurisdicción de un determinado Estado<sup>11</sup>.

---

<sup>9</sup> Corte IDH. Caso defensor de derechos humanos y otros vs.. párr. 142.

<sup>10</sup> Corte IDH. Caso defensor de derechos humanos y otros vs.. párr. 142.

<sup>11</sup> Corte IDH. Caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia. Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas. 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192. Párr. 96

Es decir, cuando se impide a una persona la defensa de los derechos humanos, se afecta directamente al resto de la sociedad<sup>12</sup>.

Por todo lo anterior, es fundamental que las personas defensoras de derechos humanos y de libertades fundamentales gocen de la protección y de la independencia necesarias para realizar sus funciones a cabalidad ya que, a través de su labor, se mantiene informada a la sociedad, requisito indispensable para que ésta goce de una plena libertad y el debate público se fortalezca.

#### **IV. EL DERECHO A DEFENDER DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO.**

El Sistema Jurídico Mexicano al igual que la CADH no ha reconocido expresamente el derecho a defender derechos humanos, no obstante, con la aprobación y publicación de la LPPDDHyP, en 2012 se creó el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (en adelante, el Mecanismo) como garantía del Estado mexicano para salvaguardar la vida, integridad, libertad y seguridad, de quienes ejercen el periodismo, la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión.

Esta política pública, así como su implementación, ha permitido proteger a personas defensoras de derechos humanos y periodistas a lo largo de estos casi 10 años de existencia. Siendo el caso que hasta la fecha se encuentran incorporadas al Mecanismo 1539 personas beneficiarias, de las cuales 515<sup>13</sup> son periodistas y 1044<sup>14</sup> son personas defensoras de derechos humanos.

No obstante, de la periódica evaluación al Mecanismo, las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, sociedad civil, colectivos, organismos nacionales e internacionales coinciden en la necesidad de fortalecerlo. En ese panorama, el Examen Periódico Universal de noviembre de 2018 realizó 21 recomendaciones directamente al Mecanismo, subrayando la necesidad de protección a la labor de defensa de derechos humanos.

---

<sup>12</sup> CIDH, Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en las Américas. EA/Ser.L/V/II. Doc. 66. 31 diciembre 2011, párr. 13

<sup>13</sup> Con información del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de las cuales 140 son mujeres y 375 son hombres.

<sup>14</sup> Con información del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de las cuales 565 son mujeres y 479 son hombres.



Al respecto, el Informe Final de la Misión del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos, Michel Forst, relativo a su visita a México del 16 al 24 de enero de 2017, reconoció como un avance importante el establecimiento del Mecanismo, sin dejar de apuntar como retos relevantes: 1) la necesidad de no limitarse a “reaccionar”; 2) la ausencia de coordinación entre las autoridades federales y estatales; así como 3) la precaria asignación de recursos<sup>15</sup>.

Por otra parte, en 2019, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) realizó un Diagnóstico sobre el funcionamiento del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a solicitud de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación.

En dicho diagnóstico, OACNUDH señala que la actuación libre de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas resulta esencial para la verdadera realización de un Estado democrático de derecho y, en cuanto al deber de protección, afirma que:

La responsabilidad internacional del Estado de proteger a los defensores y las defensoras, de las agresiones que puedan sufrir, se deriva del deber fundamental de todo Estado de proteger todos los derechos humanos [...].

Este deber de protección no se limita a que los Estados se abstengan de vulnerar los derechos humanos de las personas defensoras y periodistas, sino que también incluye el deber de respetar, prevenir y proteger frente a situaciones de riesgo, así como de investigar, juzgar y sancionar a quienes resulten responsables por las agresiones sufridas por las personas defensoras de derechos humanos y periodistas.<sup>16</sup>

Dentro de los hallazgos del Diagnóstico referido, se encuentra el reconocimiento a la labor del Mecanismo, sobre todo cuando luego de ser entrevistadas, las personas beneficiarias destacaron que la protección brindada por el Mecanismo es el motivo por el cual siguen vivas. Su relevancia se confirma también por el aumento de los acercamientos e incorporaciones durante la actual administración.

---

<sup>15</sup> Informe Final de la de la Misión del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos Michel Forst, visita a México, 16 al 24 de enero de 2017 Disponible en <https://www.ohchr.org/sp/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21111&LangID=S>

<sup>16</sup> OACNUDH. Diagnóstico sobre el funcionamiento del Mecanismo. Julio de 2019. Disponible en [https://hchr.org.mx/wp/wp-content/themes/hchr/images/doc\\_pub/190725-Diagnostico-Mecanismo-FINAL.pdf](https://hchr.org.mx/wp/wp-content/themes/hchr/images/doc_pub/190725-Diagnostico-Mecanismo-FINAL.pdf)

Adicionalmente, se observó que el Mecanismo sirvió como puerta de entrada para que las personas beneficiarias y/o sus representaciones tuvieran comunicación con distintas autoridades en los tres niveles de gobierno, con el objetivo de solventar las causas del riesgo que enfrentan.<sup>17</sup>

Por otra parte, dicho Diagnóstico también encontró áreas de oportunidad, como por ejemplo, i) la falta de coordinación y corresponsabilidad entre las autoridades federales, estatales y municipales; ii) la limitación de las capacidades del Mecanismo —por la insuficiencia de recursos humanos y materiales para dar respuesta a los requerimientos legales y las necesidades reales de protección—; este último punto se prevé que se agudice por la creciente tendencia de solicitudes de incorporación.

Ante tales hallazgos, la OACNUDH realizó recomendaciones con la firme convicción de que el Mecanismo podría mostrar una sensible mejora si las mismas se implementarán de manera consistente e integral, en tanto que las numerosas necesidades de fortalecimiento son transversales o se entrecruzan, las cuales se ordenan en tres grupos: I. Recomendaciones para el fortalecimiento de la protección por el Estado mexicano en su conjunto II. Recomendaciones para el fortalecimiento del Mecanismo III. Recomendaciones para el fortalecimiento de la CEN.<sup>18</sup>

Finalmente, el Diagnóstico exhortó al gobierno de México a promover un cambio de paradigma hacia un enfoque de prevención, combinado con la actuación dirigida a anular las causas del riesgo, que incluya criterios de actuación en los casos de agresiones por parte de servidores públicos y enviar un mensaje de cero tolerancia en relación con estas conductas.

Asimismo, la OACNUDH sostuvo que el Mecanismo no puede ser entendido como la única respuesta a la violencia contra quienes ejercen el periodismo y defienden derechos humanos, sino que es necesario que otras autoridades se involucren y se coordinen con el Mecanismo para garantizar que las personas beneficiarias reciban una protección integral.

---

<sup>17</sup> Idem

<sup>18</sup> Idem

El necesario reforzamiento del Mecanismo será insuficiente si no se acompaña de otras medidas tendientes a la creación de una política pública integral que además de mejorar la protección pueda: implementar la obligación de respeto a las labores de defensa de derechos humanos y periodismo; adoptar estrategias interinstitucionales de prevención; y garantizar el cumplimiento del deber de investigar, juzgar y sancionar las agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas<sup>19</sup>.

Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), como organismo autónomo encargado de denunciar abusos y violaciones a derechos humanos ha señalado, mediante diversas recomendaciones y comunicados, la situación de vulnerabilidad y violencia de la que son víctimas personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Cabe resaltar las siguientes recomendaciones generales:

- No. 17/2009. *Sobre los casos de agresiones a periodistas y la impunidad prevaleciente*. En dicha recomendación señala el incremento de las agresiones dirigidas a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas. De igual forma, documenta la vulneración de los derechos fundamentales a la vida, a la integridad y seguridad personal, y a la seguridad jurídica, así como a la libertad de expresión. Adicionalmente, resalta la falta de diligencia por parte de las autoridades procuradoras de justicia.<sup>20</sup>
- No. 20/20013. *Sobre agravios a periodistas en México y la impunidad imperante*. En ésta, se resalta la falta de debida diligencia de las autoridades para implementar acciones para prevenir delitos, así como la persecución y sanción de los mismos.<sup>21</sup>
- No. 24/2016. *Sobre el ejercicio de la libertad de expresión en México*. Resaltan los grandes desafíos para ejercer dicho derecho en entornos seguros. Hace un llamado a los tres órdenes de gobierno para garantizar la seguridad de periodistas y comunicadores, armonización legislativa y acciones de prevención.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Idem

<sup>20</sup> Recomendación General No. 17. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 2009. Disponible en: [https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Recomendaciones/Generales/RecGral\\_017.pdf](https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Recomendaciones/Generales/RecGral_017.pdf)

<sup>21</sup> Recomendación General No. 20. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 2013. Disponible en: [https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Recomendaciones/Generales/RecGral\\_020.pdf](https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Recomendaciones/Generales/RecGral_020.pdf)

<sup>22</sup> Recomendación General No. 24. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 2016. Disponible en: [https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Recomendaciones/Generales/RecGral\\_024.pdf](https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Recomendaciones/Generales/RecGral_024.pdf)

- No. 25/2016. *Sobre agravios a personas defensoras de derechos humanos, ante el incumplimiento de las autoridades de los tres niveles de gobierno en cuanto a su obligación de proveer seguridad pública para prevenir las posibles violaciones a derechos humanos. Se hace hincapié en la sensibilización y profesionalización de los servidores públicos involucrados en la investigación y procuración de justicia.*<sup>23</sup>

En ese sentido, en los últimos tres años, la CNDH ha emitido cerca de 18 comunicados, en los cuales ha condenado las agresiones en contra de las personas que ejercen la libertad de expresión y defienden derechos humanos, además de exhortar a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a proteger y garantizar sus derechos humanos.

Aunado a lo anterior y de acuerdo con información pública, en el periodo que va de 2019 a 2021, la CNDH abrió 235 expedientes de queja en el Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, a cargo de la Quinta Visitaduría General.

El 14 de julio de 2021, derivado del aumento de homicidios y amenazas contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, la actual titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, dio a conocer información importante al respecto, mediante comunicado de prensa DGC/187/2021, que a la letra señala:

[...] un llamado enérgico a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para que se refuercen los trabajos de prevención y protección de las personas defensoras de derechos humanos y de periodistas ante el alarmante incremento de agresiones, particularmente de homicidios, que se ha registrado en su contra en los últimos años con motivo de su labor [...]

Igualmente, la CNDH subraya que este panorama de violencia en contra de periodistas y personas defensoras lesiona gravemente al tejido social, toda vez que los homicidios perpetrados en su contra no sólo inhiben de manera directa su labor de defensa y libertad de expresión e información, sino que generan un efecto de autocensura en la sociedad a través de la intimidación y amedrentamiento, cuyo objetivo es el evitar que se ejerzan los derechos a la libertad de expresión, de información y a la defensa de derechos humanos [...]

---

<sup>23</sup> Recomendación General No. 24. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 2016. Disponible en: [https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Recomendaciones/Generales/RecGral\\_025.pdf](https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Recomendaciones/Generales/RecGral_025.pdf)

Es de destacar que la CNDH, derivado de su experiencia en la investigación de agresiones, hostigamiento, desplazamiento y amenazas a periodistas y personas defensoras derechos humanos, reconoce la necesidad de actuación no sólo de autoridades federales, sino también estatales y municipales, pues es en las comunidades en que las personas ejercen sus derechos a la libertad de expresión y defensa de derechos humanos donde se actualizan las potenciales amenazas contra su integridad y vida.

Por último, la situación que prevalece en nuestro país en esta materia también ha sido abordada y señalada desde el sistema interamericano, como fue el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en su informe de país sobre la “Situación de los Derechos Humanos en México” de 2015 señala en el párrafo 370 que:

El Estado debe reconocer públicamente que el ejercicio de la promoción y defensa de los derechos humanos es una acción legítima y que, al ejercer estas acciones, las defensoras y defensores no están contra las instituciones del Estado, sino que, por el contrario, propenden al fortalecimiento del Estado de Derecho y la ampliación de los derechos y garantías de todas las personas. Todas las autoridades y funcionarios estatales del ámbito local deben tener conciencia de los principios relativos a las actividades de los defensores y su protección, así como de las directrices aplicables a su observancia.<sup>24</sup>

Más reciente y de manera particular, la Corte IDH reiteró al Estado mexicano las obligaciones estatales de garantizar las condiciones para el ejercicio profesional, en el caso particular, de las personas defensoras de derechos humanos en su rol fundamental de promotoras de la democracia y denuncia de la impunidad en los términos siguientes:

100. Con respecto a la condición profesional de la persona defensora de derechos humanos, esta Corte reitera que el cumplimiento del deber de crear las condiciones necesarias para el efectivo goce y disfrute de los derechos establecidos en la Convención está intrínsecamente ligado a la protección y al reconocimiento de la importancia del papel que cumplen las y los defensores de derechos humanos, cuya labor es fundamental para el fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho. El Tribunal recuerda, además, que las actividades de vigilancia, denuncia y educación que realizan contribuyen de manera esencial a la observancia de los derechos humanos, pues actúan como garantes contra la impunidad.(...) Los Estados tienen el deber de facilitar los medios necesarios para que estos realicen libremente sus actividades;

---

<sup>24</sup> Relatoría sobre libertad de expresión Párrafo 370.  
<https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Mexico2016-es.pdf>

protegerlos cuando son objeto de amenazas para evitar los atentados a su vida e integridad; abstenerse de imponer obstáculos que dificulten la realización de su labor, e investigar seria y eficazmente las violaciones cometidas en su contra, combatiendo la impunidad [...]<sup>25</sup>

Ahora bien, en cuanto a la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, la citada sentencia señala la necesidad de establecer mecanismos de protección y justicia con enfoques diferenciados como son los casos de violencia contra mujeres defensoras de derechos humanos:

101. En el caso de ataques dirigidos a mujeres defensoras de derechos humanos, el Tribunal considera que todas las medidas orientadas a mitigar los riesgos que corren deben ser adoptadas con perspectiva de género y con un enfoque interseccional, de tal manera que se les pueda brindar una protección integral a partir de considerar, comprender y dar un lugar central a las complejidades de las formas diferenciadas de violencia que afrontan las defensoras por su profesión y por su género [...]<sup>26</sup>

Por último, la Corte IDH establece expresamente la obligación del Estado Mexicano de reconocer y proteger la labor de las personas defensoras de derechos humanos. Por lo que, además de reconocimiento expreso constitucional y legal, obliga a emprender una serie de acciones para la promoción de la labor de las personas que se dedican a la defensa de derechos humanos.

En ese tenor, como parte de la garantía de no repetición, la Corte ordenó a México, entre otras acciones, elaborar, en un plazo de dos años, un plan de fortalecimiento calendarizado del "Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas", tomando en consideración, entre otras, las recomendaciones formuladas por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en 2019<sup>27</sup>.

De igual forma, no se obvia señalar la especificidad de criterios para casos especiales como, por ejemplo, las responsabilidades internacionales que el Estado mexicano ha adquirido en materia de personas defensoras del medio ambiente, como lo prevé el Acuerdo de Escazú ratificado el 5 de noviembre de 2020, donde

---

<sup>25</sup> Corte IDH. Caso Digna Ochoa y familiares Vs. México, Sentencia (Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas) de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 25 de noviembre de 2021 Disponible en en: < [https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_447\\_esp.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_447_esp.pdf).

<sup>26</sup> Caso Digna Ochoa y familiares Vs. México, Ibid.

<sup>27</sup> Idem

se refrendaron diversos compromisos, contenidos en el artículo 9 de ese instrumento.<sup>28</sup>

Así las cosas, se reconoce que si bien desde la creación del Mecanismo se han registrado avances importantes, lo cierto es que el contexto actual nos obliga a reflexionar sobre los retos que enfrentamos ante el alarmante aumento de situaciones de riesgo y la constante de la necesidad de proteger a un mayor número de personas o grupos de personas frente a situaciones cada vez más violentas. Por lo anterior, se considera pertinente abrir el diálogo y discusión para adecuar el marco normativo respectivo que permita garantizar, de manera efectiva, la protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

## **V. NECESIDAD DE TRANSITAR A UN SISTEMA NACIONAL EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS**

Es necesario reconocer el clima de complejo y el incremento en las agresiones a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, por ejemplo:

- En casos de homicidios de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, se tiene un registro de 98 y 55 víctimas, respectivamente, en la actual administración.

Al respecto, se debe tener presente que los registros correspondientes a los sexenios previos contabilizan a 165 personas defensoras de derechos humanos y 96 periodistas asesinadas durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, mientras que durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa fueron privadas de la vida 28 personas defensoras de derechos humanos y 103 periodistas.

- En cuanto a las personas desaparecidas, desde el año 2007 se tiene un registro de 25 periodistas y 4 personas defensoras, sin que hasta la fecha se cuente con información de su paradero.
- En razón de lo anterior, y de acuerdo con los datos registrados por el Mecanismo, el número de personas incorporadas se ha incrementado en un 95% en la presente administración.

---

<sup>28</sup> Comisión Económica para América Latina (CEPAL)(2018). Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, disponible en: <[https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43595/1/S1800429\\_es.pdf](https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43595/1/S1800429_es.pdf)>

Dicha situación obedece a diversos factores, entre los que se resalta la presencia del crimen organizado, la impunidad y la falta de cultura sobre la importancia de la defensa de los derechos humanos y la labor periodística en un Estado democrático.

Aunado a lo anterior, los niveles de impunidad se mantienen en un alto porcentaje. Si bien es cierto que las fiscalías estatales registran el inicio de la investigación, no se reportan avances significativos en las investigaciones o elementos que permitan descartar o confirmar si los hechos estuvieron relacionados con su labor de defensa o de labor periodística.

En la mayoría de los casos, no se cuenta con sentencias firmes. La falta de sanción a los responsables es un mensaje que contribuye a la repetición de los hechos y, por lo tanto, al incremento de la violencia hacia dicha población.

No obstante, el actual texto constitucional en su artículo 73 fracción XXI establece que:

[...]las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta;

Sin embargo, no ha reconocido expresamente la protección de las personas que ejercen la defensa de los derechos humanos, lo que en muchas ocasiones se ha convertido en el argumento que impide su protección cuando son víctimas de alguna agresión o, en su caso, dificulta la definición de competencia entre las autoridades de los diferentes niveles de gobierno.

Asimismo, existen normativas y prácticas a nivel estatal y municipal sin desarrollar: se tiene registro de catorce entidades con legislaciones específicas para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas; ocho entidades han impulsado normatividad específica encaminada a la protección de la libertad de expresión y protección a periodistas; y una entidad publicó una ley específica para la protección de los defensores de derechos humanos.

En ese sentido, resulta necesaria la creación de un esquema de intervención que permita: i) identificar situaciones que pueden detonar escenarios de violencia y factores de riesgo; ii) implementar acciones preventivas; iii) reaccionar de forma inmediata cuando las agresiones y amenazas sean materializadas; iv) brindar atención con perspectiva de género y enfoque interseccional.

Por lo antes expuesto, se estima necesaria la reforma al texto constitucional que reconozca expresamente el derecho a defender derechos humanos y la transición



a un Sistema Nacional en Materia de Prevención y Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en atención a las siguientes razones:

**Primera.** El reconocimiento en el texto constitucional del derecho a defender derechos humanos incidirá en el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado mexicano en la materia.

**Segunda.** Transitar a un Sistema Nacional favorecerá la definición de competencias, así como la coordinación de autoridades en los tres niveles de gobierno en materia de prevención y protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Derivado de lo anterior, se **propone reformar el primer párrafo del artículo 1º y penúltimo párrafo de la fracción XXI, así como, adicionar una fracción XXIX-AA al artículo 73, todos de la Constitución**, para reconocer el derecho a defender derechos humanos, contemplar los delitos contra personas defensoras de derechos humanos como aquellos que podrán ser investigados por autoridades federales y establecer como facultad del Congreso de la Unión, la expedición de una Ley de carácter General en la que se establezca la forma de colaboración y concurrencia de facultades y responsabilidades de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en materia específica de prevención y protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

### CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TEXTO VIGENTE	PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
<p><b>Artículo 1o.</b> En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.</p> <p>Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.</p>	<p><b>Artículo 1.</b> En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. <b>Todas las personas tienen derecho a promover y defender los derechos humanos.</b></p> <p>Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.</p>



<p>Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.</p> <p>Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.</p> <p>Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias.</p>	<p>Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.</p> <p>Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.</p> <p>Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias.</p>
<p><b>Artículo 73.</b> El Congreso tiene facultad: I. a XX. ... XXI. ... a) ... b) ... c) ...</p> <p>Las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero común, cuando estos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta.</p> <p>... XXII. a XXXI. ...</p> <p>Sin correlativo</p>	<p><b>Artículo 73.</b> El Congreso tiene facultad: I. a XX. ... XXI. ... a) ... b) ... c) ...</p> <p>Las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero común, cuando estos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra <b>personas defensoras de derechos humanos</b>, periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta, <b>así como el derecho de defender los derechos humanos.</b></p> <p>... XXII. a XXIX. XXIX-AA. Para expedir la ley general que establezca la concurrencia de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, en el ámbito de sus competencias, en materia de prevención y protección ante agresiones a <b>personas defensoras de derechos humanos y periodistas.</b></p>

ARTÍCULOS TRANSITORIOS	<p><b>Primero.-</b> El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.</p> <p><b>Segundo.-</b> El Congreso de la Unión deberá expedir la Ley General en la materia, de conformidad con este Decreto, en un plazo máximo de 180 días contados a partir del inicio de su vigencia.</p> <p><b>Tercero.-</b> Una vez publicada la ley general a que se refiere el artículo anterior las Legislaturas de las entidades federativas deberán expedir las leyes locales que correspondan en un plazo máximo de 180 días.</p> <p><b>Cuarto.-</b> Los casos que a la fecha de entrada en vigor de la Ley General sean conocidos por las autoridades federales seguirán su curso ante la autoridad correspondiente en que estén siendo tramitados.</p>
------------------------	---

Una vez que inicie la vigencia de la Reforma Constitucional, el Congreso de la Unión deberá expedir la Ley reglamentaria correspondiente, para cuyo cumplimiento se establece un plazo de 90 días. Esta Ley General servirá de marco a las entidades federativas para que éstas emitan las normas locales relativas en un plazo de 90 días a partir de la entrada en vigor de la normativa de carácter general.

**PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO PRIMERO, EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XXI Y ADICIONA LA FRACCIÓN XXIX-AA AL ARTÍCULO 73, TODOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.**

**ARTÍCULO PRIMERO.-** Se reforma el primer párrafo del artículo 1º, el penúltimo párrafo de la fracción XXI y se adiciona una fracción XXIX-AA al artículo 73, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la sigue:

**“Artículo 1º.** En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. **Todas las personas tienen derecho a promover y defender los derechos humanos.**

...  
...  
...

...  
“**Artículo 73.** El Congreso tiene facultad:

I. a XX.

XXI. ...

a) ...

b) ...

c) ...

Las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero común, cuando estos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra **personas defensoras de derechos humanos**, periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta, **así como el derecho de defender los derechos humanos.**

...

XXII. a XXIX. ...

**XXIX-AA.** Para expedir la ley general que establezca la concurrencia de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, en el ámbito de sus competencias, en materia de prevención y protección ante agresiones a personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

...

## ARTÍCULOS TRANSITORIOS

**Primero.-** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

**Segundo.-** El Congreso de la Unión deberá expedir la ley general en la materia, de conformidad con este Decreto, en un plazo máximo de 180 días contados a partir del inicio de su vigencia.

**Tercero.-** Una vez publicada la ley general a que se refiere el artículo anterior las legislaturas de las entidades federativas deberán expedir las leyes locales que correspondan en un plazo máximo de 180 días.

**Cuarto.-** Los casos que a la fecha de entrada en vigor de la Ley General sean conocidos por las autoridades federales seguirán su curso ante la autoridad correspondiente en que estén siendo tramitados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de abril de 2022

**Diputados Firmantes:**

1. Nelly Minerva Carrasco Godínez (GPMorena),
2. Norma Angélica Aceves García (GPPRI),
3. Ricardo Aguilar Castillo (GPPRI),
4. Jaime Baltierra García (GPPT),
5. Sue Ellen Bernal Bolnik (GPPRI),
6. Kathia María Bolio Pinelo (GPPAN),
7. Wendy Maricela Cordero González (GPPAN),
8. Ma. Leticia Chávez Pérez (GPMC),
9. Carolina Dávila Ramírez (GPPRI),
10. Erika Vanessa Del Castillo Ibarra (GPMorena),
11. María del Carmen Escudero Fabre (GPPAN),
12. Ana María Esquivel Arrona (GPPAN),
13. Marisol García Segura (GPMorena),
14. Marisela Garduño Garduño (GPPT),
15. Rosa María González Azcárraga (GPPAN),
16. Mariana Mancillas Cabrera (GPPAN),
17. Esther Mandujano Tinajero (GPPAN),
18. Nora Elva Oranday Aguirre (GPPAN),
19. Inés Parra Juárez (GPMorena),
20. Pedro Sergio Peñaloza Pérez (GPMorena),
21. Julieta Andrea Ramírez Padilla (GPMorena),
22. Martha Robles Ortiz (GPMorena),
23. Beatriz Rojas Martínez (GPMorena),
24. Jorge Ángel Sibaja Mendoza (GPMorena),
25. María Sierra Damián (GPMorena),
26. Rebeca Valle Hernández (GPMorena),



CÁMARA DE  
**DIPUTADOS**  
LXV LEGISLATURA

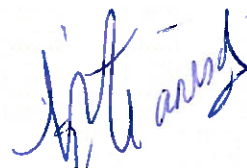
## COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO PRIMERO, EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XXI Y ADICIONA LA FRACCIÓN XXIX-AA AL ARTÍCULO 73, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN ANTE AGRESIONES A PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS.




---

**Dip. Nelly Minerva Carrasco Godínez**  
Presidenta



---

**Dip. Marisol García Segura**  
Secretaria



---

**Dip. Rebeca Valle Hernández**  
Secretaria



---

**Dip. Julieta Andrea Ramírez Padilla**  
Secretaria




---

**Dip. Rojas Martínez Beatriz**  
Secretaria

---

**Dip. Kathia María Bolio Pinelo**  
Secretaria



---

**Dip. Ana María Esquivel Arrona**  
Secretaria



CÁMARA DE  
**DIPUTADOS**  
LXV LEGISLATURA

## COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO PRIMERO, EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XXI Y ADICIONA LA FRACCIÓN XXIX-AA AL ARTÍCULO 73, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN ANTE AGRESIONES A PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS.

**Dip. Mariana Mancillas Cabrera**  
Secretaria

**Dip. Sue Ellen Bernal Bolnik**  
Secretaria

**Dip. Carolina Davila Ramirez**  
Secretaria

**Dip. María Leticia Chávez Pérez**  
Secretaria

**Dip. Jaime Baltierra Garcia**  
Secretario

**Dip. Norma Angélica Aceves García**  
Integrante

**Dip. Ricardo Aguilar Castillo**  
Integrante

**Dip. Wendy Maricela Cordero González**  
Integrante



CÁMARA DE  
**DIPUTADOS**  
LXV LEGISLATURA

## COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO PRIMERO, EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XXI Y ADICIONA LA FRACCIÓN XXIX-AA AL ARTÍCULO 73, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN ANTE AGRESIONES A PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS.



---

Dip. Erika Vanessa Del Castillo Ibarra  
Integrante



---

Dip. María del Carmen Escudero Fabre  
Integrante



---

Dip. Marisela Garduño Garduño  
Integrante



---

Dip. Rosa María González Azcárraga  
Integrante




---

Dip. Esther Mandujano Tinajero  
Integrante



---

Dip. Nora Elva Oranday Aguirre  
Integrante



---

Dip. Inés Parra Juárez  
Integrante



---

Dip. Pedro Sergio Peñaloza Pérez  
Integrante



## COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO PRIMERO, EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XXI Y ADICIONA LA FRACCIÓN XXIX-AA AL ARTÍCULO 73, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN ANTE AGRESIONES A PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS.

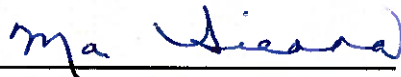


---

**Dip. Martha Robles Ortiz**  
Integrante

---

**Dip. Jorge Ángel Sibaja Mendoza**  
Integrante



---

**Dip. María Sierra Damián**  
Integrante



**CÁMARA DE  
DIPUTADOS**  
LXV LEGISLATURA

## COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 05 de abril de 2022

**DIP. NELLY MINERVA CARRASCO GODINEZ**  
**PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS**  
**DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS**  
**Presente**

En alcance al oficio de fecha 31 de marzo del año en curso, mediante el cual el suscrito solicito excluir, mi nombre y mi firma de la Iniciativa que a continuación se enuncia, le solicito de la manera más atenta dejar sin efector dicha petición con la finalidad de que el suscrito, si firme tal Iniciativa.

**Que reforma el primer párrafo del artículo primero, el penúltimo párrafo de la fracción XXI y adiciona la fracción XXIX-AA al artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de prevención y protección ante agresiones a personas defensoras de derechos humanos y periodistas.**

Sin otro particular, me despido de Usted enviándole un cordial saludo.

**Atentamente**

**Dip. Ricardo Aguilar Castillo**  
**Integrante de la Comisión de Derechos Humanos**



**CÁMARA DE  
DIPUTADOS**  
LXV LEGISLATURA

## COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de marzo de 2022

**DIP. NELLY MINERVA CARRASCO GODINEZ**  
**PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS**  
**DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS**  
**Presente**

Sea este el medio para solicitarle de la manera más atenta girar sus amables instrucciones a efecto de **excluir mi nombre y mi firma** de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que a continuación se enuncia:

**Que reforma el primer párrafo del artículo primero, el penúltimo párrafo de la fracción XXI y adiciona la fracción XXIX-AA al artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de prevención y protección ante agresiones a personas defensoras de derechos humanos y periodistas.**

Sin otro particular, me despido de Usted enviándole un cordial saludo.

**Atentamente**

**Dip. Ricardo Aguilar Castillo**  
**Integrante de la Comisión de Derechos Humanos**



**CÁMARA DE  
DIPUTADOS**  
LXV LEGISLATURA

## COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de marzo de 2022

**DIP. NELLY MINERVA CARRASCO GODINEZ**  
**PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS**  
**DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS**  
**Presente**

Por este conducto le informo mi interés por suscribir la Iniciativa con Proyecto de Decreto que a continuación se enuncia:

**Que reforma el primer párrafo del artículo primero, el penúltimo párrafo de la fracción XXI y adiciona la fracción XXIX-AA al artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de prevención y protección ante agresiones a personas defensoras de derechos humanos y periodistas.**

Le solicito de la manera más atenta girar sus amables instrucciones a efecto de incluir mi nombre en la iniciativa de mérito.

Sin otro particular, me despido de Usted enviándole un cordial saludo.

**Atentamente**



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

**RECIBIDO**

29 MAR 2022

RECIBIÓ: C. ELIZABETH ARCE M.

HORA: 13:33 pm FOLIO: —

Dip. KATHIA MARÍA BOLIO PINELO

Secretaria de la Comisión de Derechos Humanos  
en la Cámara de Diputados



**CÁMARA DE  
DIPUTADOS**  
LXV LEGISLATURA

## COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

"LXV, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad"  
"2022, Año de Ricardo Flores Magón"

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 05 de abril de 2022

**DIP. NELLY MINERVA CARRASCO GODINEZ**  
**PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS**  
**DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS**  
**Presente**

Por este conducto le informo mi interés por suscribir la Iniciativa con Proyecto de Decreto que a continuación se enuncia:

**Que reforma el primer párrafo del artículo primero, el penúltimo párrafo de la fracción XXI y adiciona la fracción XXIX-AA al artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de prevención y protección ante agresiones a personas defensoras de derechos humanos y periodistas.**

Le solicito de la manera más atenta girar sus amables instrucciones a efecto de incluir mi nombre en la iniciativa de mérito.

Sin otro particular, me despido de Usted enviándole un cordial saludo.

**Atentamente**

**Dip. María Leticia Grávalos Pérez**  
**Secretaria**

Av Congreso de la Unión No. 66 Col El Parque, V. Carranza, CP 15960, CDMX  
55 5036 0000 ext. 53244

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 04 de abril de 2022

**DIPUTADA NELLY MINERVA CARRASCO GODÍNEZ**  
**PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS**  
**DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS**  
**Presente**

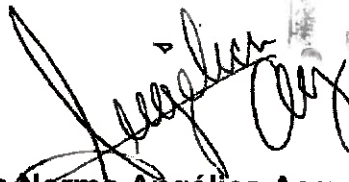
Por este conducto le informo mi interés por suscribir la Iniciativa con Proyecto de Decreto que a continuación se enuncia:

**Que reforma el primer párrafo del artículo primero, el penúltimo párrafo de la fracción XXI y adiciona la fracción XXIX-AA al artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de prevención y protección ante agresiones a personas defensoras de derechos humanos y periodistas.**

Le solicito de la manera más atenta girar sus amables instrucciones a efecto de incluir mi nombre en la iniciativa de mérito.

Sin otro particular, me despido de Usted enviándole un cordial saludo.

**Atentamente**



**Diputada Norma Angélica Aceves García**  
Integrante de la Comisión de Derechos Humanos



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

**RECIBIDO**

05 ABR 2022

RECIBIÓ: C. Elizabeth Arce M.

Hora: 12:56 p.m.



CÁMARA DE  
**DIPUTADOS**  
LXV LEGISLATURA

## COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de marzo de 2022

**DIP. NELLY MINERVA CARRASCO GODINEZ**  
**PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS**  
**DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS**  
**Presente**


Por este conducto le informo mi interés por suscribir la Iniciativa con Proyecto de Decreto que a continuación se enuncia:

**Que reforma el primer párrafo del artículo primero, el penúltimo párrafo de la fracción XXI y adiciona la fracción XXIX-AA al artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de prevención y protección ante agresiones a personas defensoras de derechos humanos y periodistas.**

Le solicito de la manera más atenta girar sus amables instrucciones a efecto de incluir mi nombre en la iniciativa de mérito.

Sin otro particular, me despido de Usted enviándole un cordial saludo.

**Atentamente**

Dip.   
Nora Elva Oranday Aguirre



**CÁMARA DE  
DIPUTADOS**  
**LXV LEGISLATURA**

## COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de marzo de 2022

**DIP. NELLY MINERVA CARRASCO GODINEZ**  
**PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS**  
**DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS**  
**Presente**

Por este conducto le informo mi interés por suscribir la Iniciativa con Proyecto de Decreto que a continuación se enuncia:

**Que reforma el primer párrafo del artículo primero, el penúltimo párrafo de la fracción XXI y adiciona la fracción XXIX-AA al artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de prevención y protección ante agresiones a personas defensoras de derechos humanos y periodistas.**

Le solicito de la manera más atenta girar sus amables instrucciones a efecto de incluir mi nombre en la iniciativa de mérito.

Sin otro particular, me despido de Usted enviándole un cordial saludo.

**Atentamente**

Dip. Inés Parra Juárez  
Integrante



Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de marzo de 2022  
**Oficio No. JASM/LXV /033/2022**

**DIP. NELLY MINERVA CARRASCO GODINEZ**  
**PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS**  
**P R E S E N T E.**

Por este conducto le informo mi interés por suscribir la Iniciativa con Proyecto de Decreto que a continuación se enuncia:

**Que reforma el primer párrafo del artículo primero, el penúltimo párrafo de la fracción XXI y adiciona la fracción XXIX-AA al artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de prevención y protección ante agresiones a personas defensoras de derechos humanos y periodistas.**

Le solicito de la manera más atenta girar sus amables instrucciones a efecto de incluir mi nombre en la iniciativa de mérito.

Sin otro particular, me despido de Usted enviándole un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**



**DIP. JORGE ÁNGEL SIBAJA MENDOZA**  
**INTEGRANTE DE LA COMISIÓN**

**Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, LXV Legislatura****Junta de Coordinación Política**

**Diputados:** Rubén Ignacio Moreira Valdez, presidente, PRI; Moisés Ignacio Mier Velasco, MORENA; Jorge Romero Herrera, PAN; Carlos Alberto Puente Salas, PVEM; Alberto Anaya Gutiérrez, PT; Jorge Álvarez Máynez, MOVIMIENTO CIUDADANO; Luis Ángel Xarriel Espinosa Cházaro, PRD.

**Mesa Directiva**

**Diputados:** Sergio Carlos Gutiérrez Luna, presidente; vicepresidentes, Karla Yuritz Almazán Burgos, MORENA; Santiago Creel Miranda, PAN; Marcela Guerra Castillo, PRI; secretarios, Brenda Espinoza López, MORENA; Karen Michel González Márquez, PAN; Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, PRI; Jasmine María Bugarín Rodríguez, PVEM; Luis Enrique Martínez Ventura, PT; Jessica María Guadalupe Ortega de la Cruz, MOVIMIENTO CIUDADANO; María Macarena Chávez Flores, PRD.

**Secretaría General****Secretaría de Servicios Parlamentarios****Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados**

**Director:** Juan Luis Concheiro Bórquez, **Edición:** Casimiro Femat Saldívar, Ricardo Águila Sánchez, Antonio Mariscal Pioquinto.

**Apoyo Documental:** Dirección General de Proceso Legislativo. **Domicilio:** Avenida Congreso de la Unión, número 66, edificio E, cuarto nivel, Palacio Legislativo de San Lázaro, colonia El Parque, CP 15969. Teléfono: 5036 0000, extensión 54046. **Dirección electrónica:** <http://gaceta.diputados.gob.mx/>